



Revista

# DESPIERTA

Sociedade, Cultura e Contestação Social

Ano 11, número 15, jan-jun. 2024

**Nº 15**

**ISSN 2359 -5868**



## SUMÁRIO

### ARTIGOS

**“SEGURIDAD, VIOLENCIAS Y CUESTIÓN SOCIAL: PROBLEMATIZACIONES EN EL CONTEXTO DE “POSPANDEMIA” EN ARGENTINA (2022-2023)” ..... 03**

*Emilio Ajos*

*Tatiana Jack*

*Lucía Ibarra Ruoreda*

**SUPERPOPULAÇÃO RELATIVA – A ARGENTINA NO CONTEXTO GLOBAL NO INÍCIO DO SÉCULO XXI ..... 37**

*Ricardo Donaire*

**A LEGITIMAÇÃO DA VIOLÊNCIA ESTATAL POR MEIO DAS LEGISLAÇÕES DE EXCEÇÃO E A DEGRADAÇÃO DOS SUJEITOS ..... 59**

*Marisa de Fatima Morais*

**ACUMULAÇÃO INTEGRAL E ESCALADA REPRESSIVA ..... 70**

*Jaciara Veiga*

### RESENHAS

**CAPITALISMO CRIMINOSO: COMO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FACILITAM O CRIME ..... 01**

*Elias Marcos Lesczynski*

**“SEGURIDAD, VIOLENCIAS Y CUESTIÓN SOCIAL:  
PROBLEMATIZACIONES EN EL CONTEXTO DE “POSPANDEMIA” EN  
ARGENTINA (2022-2023)”**

Emilio Aynos\*

Tatiana Jack\*\*

Lucía Ibarra Ruoredda\*\*\*

## **Introducción**

Este trabajo muestra algunos resultados de una línea de investigación que tiene como objetivo general analizar la reorientación de los términos y principios a partir de los cuales se define la disputa política por el sentido y la legitimidad de las intervenciones sociales del Estado en general y de la política social en particular<sup>1</sup>. En este sentido, en este artículo se realiza una reconstrucción de las formas de problematización, las articulaciones y tensiones que se producen en torno a la noción de inseguridad, las violencias y la cuestión social, a partir del análisis de las discusiones y los posicionamientos de trabajadoras y trabajadores de distintos grupos socio-ocupacionales en el período comprendido entre los años 2022-2023 en Argentina. En concatenación, se reconstruyen y analizan estas problematizaciones y tensiones específicamente en relación a tres ejes de indagación. Por un lado, en cuanto a las principales preocupaciones de cada grupo socio-ocupacional en torno a la seguridad. Por otra parte, en relación a sus percepciones y posicionamientos acerca de las causas de la inseguridad. Por último, sobre los grupos sociales que identifican como las principales víctimas del delito y/o de las prácticas de policiamiento que despliegan las fuerzas de seguridad.

---

\* Licenciado en Sociología y Doctor en Ciencias Sociales de la UBA. Profesor de la UBA e Investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Mail: [emilio.ayos@gmail.com](mailto:emilio.ayos@gmail.com)

\*\* Licenciada en Trabajo Social, Especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales y doctoranda en Ciencias Sociales (FSOC-UBA). Integrante del Grupo de Estudios sobre Política Social y Condiciones de Trabajo del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG-UBA). Docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Mail: [jacktatiana1@gmail.com](mailto:jacktatiana1@gmail.com)

\*\*\* Estudiante de la Licenciatura de Trabajo Social (FSOC-UBA). Integrante del Grupo de Estudios sobre Política Social y Condiciones de Trabajo del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Mail: [luibarra68@gmail.com](mailto:luibarra68@gmail.com)

<sup>1</sup> Proyecto PICT-2017-378: “Política Social y disputas político-culturales. Continuidades y rupturas en los modos de problematización de las relaciones entre trabajo, condiciones de vida y política social en Argentina” de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.

La cuestión de la inseguridad se instala en el debate público sobre el control del delito en Argentina a partir de mediados de la década de 1990, mostrando una problematización centrada en los delitos callejeros, producidos fundamentalmente en el ámbito urbano, contra la propiedad y mediante el uso de violencia, aunque excluyendo a los delitos de “cuello blanco”, delitos económicos, o los ligados a las fuerzas de seguridad y demás agencias estatales (BARATTA, 1997; DAROQUI, 2003; PEGORARO, 2003; RANGUGNI, 2009). Desde entonces, la cuestión de la inseguridad emerge en los debates político-culturales de la sociedad argentina mostrando diferentes articulaciones, relaciones y tensiones entre el delito, las violencias, la cuestión juvenil y la cuestión social. En este sentido, en trabajos anteriores (AYOS Y JACK 2018, 2020), hemos observado que una de las líneas de debate que se instaló en la escena mediática y política en la Argentina post-kirchnerista en torno a las causas de la inseguridad se vinculó, desde una mirada retrospectiva respecto al ciclo político que acababa de finalizar en el año 2015, con el diagnóstico de que el “descontrol” en la administración del delito: jóvenes ingobernables, policía corrupta, y al mismo tiempo “atada de manos” por los “derechos humanos”, pero fundamentalmente descontrol en la asignación de políticas sociales, refiriendo a la proliferación de “planes”, sin criterios “justos” de merecimiento o de vinculación con la obligación de trabajar, debilita la “cultura del trabajo y del esfuerzo”, y tendría efectos contraproducentes, como la proliferación de prácticas delictivas y conductas violentas por parte de jóvenes de sectores populares (AYOS Y JACK, 2018).

Ahora bien, el trabajo de campo en el que se basa este artículo fue realizado entre los años 2022 y 2023, en la etapa final del gobierno nacional presidido por Alberto Fernandez en Argentina. Por lo cual, las discusiones y problematizaciones de los diferentes grupos socio-ocupacionales se producen en un escenario “pospandémico” que muestra como algunos de sus elementos distintivos, una mirada crítica sobre las prácticas de policiamiento, la cuestión de la corrupción policial y la intensificación de la violencia institucional en los barrios populares. En este sentido, identificamos que emerge como tópico de discusión pública la potestad de la autoridad política y de las agencias estatales de regulación de las libertades individuales y su capacidad de control de los intercambios sociales. Esto puede observarse en un conjunto diverso de expresiones, que van desde el cuestionamiento libertario o de la nueva derecha a las medidas de confinamiento sanitario y de restricción de ciertas actividades sociales y a la circulación en los espacios públicos, hasta los reclamos de organizaciones sociales y comunitarias por la intensificación de la violencia institucional en los barrios populares, particularmente hacia jóvenes. Este es el

estado del debate “pospandémico” en el que se produce la discusión sobre las formas de articulación entre seguridad, violencias y cuestión social en nuestros grupos focales.

El trabajo de campo de esta investigación consistió en la realización de siete grupos focales conformados por trabajadoras/es pertenecientes a cinco sectores del mundo del trabajo<sup>2</sup>: trabajadoras/es de la Economía Social (integrantes de cooperativas de trabajo y/o servicios); Trabajadoras/es de la Economía Popular (vendedoras/es ambulantes, trabajadoras/es de comedores comunitarios, entre otra/os); Empleadas/os Rutinarias/os (trabajadoras/es administrativas/os del sector público o privado que realizan tareas administrativas no especializadas, técnicas, ni profesionales); Trabajadoras/es Obreras/os (trabajadoras/os formales o no registradas/os); Trabajadoras/os atípicas/os (trabajadoras/os de aplicaciones/plataformas como Uber, Cabify, Rappi, Pedidos Ya); profesionales independientes (profesionales con ejercicio autónomo, comerciantes). Cada grupo contó con la participación de entre seis y siete personas, y se buscó equiparar la cantidad de hombres, mujeres y otras identidades sexo-genéricas, así como también un amplio margen de edades entre participantes.

Para la realización de esta investigación se adoptó una perspectiva metodológica cualitativa, con el propósito de interiorizarnos en los posicionamientos, las interpretaciones y las construcciones de sentido de las personas participantes, y se siguieron los lineamientos y procedimientos propuestos por la teoría fundada en los datos de Glaser y Strauss (1967; SONEIRA, 2004). Por ello, para la sistematización y análisis de la información se implementó el Método de las Comparaciones Constantes (MCC) que permite, a través de la técnica de codificación y la construcción de categorías analíticas articuladas con conceptos teóricos del mismo campo conceptual, desarrollar teoría a partir de los datos empíricos (STRAUSS Y CORBIN 2002; MAXWELL, 1996; SAMTER, 2012). En este sentido, este método permitió generar categorías conceptuales a partir del relato y las discusiones que emergieron en los grupos focales.

Para la recopilación de información se optó por la técnica cualitativa de los grupos focales, que consiste en entrevistas colectivas y semiestructuradas realizadas a grupos

---

<sup>2</sup> Siguiendo a Estela Grassi y Susana Hintze, “Con mundo del trabajo abarcamos al conjunto de las formas y condiciones de realización de las capacidades para la generación de ingresos de los hogares, globalmente subordinadas o dependientes del capital aunque no las emplee, porque las condiciones generales de la ocupación están dadas por la dinámica de la acumulación capitalista, de la que depende también la viabilidad y productividad de las unidades económicas de reproducción de la economía popular. En consecuencia, el mundo del trabajo rebasa el empleo directo por el capital (formal o informal) y abarca el autoempleo, el trabajo cooperativo, los servicios personales y la participación en economías de subsistencia” (Grassi y Hintze, 2018:25).

homogéneos (FONTAS ET AL., 2014), lo cual posibilita el intercambio y la confrontación de reflexiones y opiniones entre las personas participantes para relevar y registrar sus posicionamientos y perspectivas acerca de los diferentes ejes de debate.

A modo de hoja de ruta para su lectura, el artículo se organiza de la siguiente manera: en primer término realizamos una reconstrucción socio-histórica y conceptual que tiene como eje la relación y las discusiones acerca de la seguridad, la cuestión social, las violencias y las juventudes de sectores populares. Esta primera parte nos brinda herramientas teóricas y conceptuales para el análisis de nuestro material empírico. Por último, se presentan los resultados y las conclusiones finales de la investigación.

### **La emergencia de la cuestión de la inseguridad, fuerzas policiales y punitividad: claves socio-históricas y conceptuales para el abordaje del caso argentino**

A partir de mediados de la década de 1990 en Argentina la cuestión de la inseguridad se instala en el debate público sobre el control del delito, mostrando una problematización centrada en los delitos callejeros, producidos fundamentalmente en el ámbito urbano, contra la propiedad y mediante el uso de violencia, y reconfigurando la agenda estatal en cuanto a su prevención y administración. Este proceso supuso que el fenómeno de la inseguridad excluyera los delitos de “cuello blanco”, delitos económicos, o los ligados a las fuerzas de seguridad y demás agencias estatales; en suma, los ligados a los sectores más encumbrados socialmente (BARATTA, 1997; DAROQUI, 2003; PEGORARO, 2003; RANGUGNI, 2010). De manera que el “miedo al delito” en el contexto urbano, enlazado al “delito común” vinculado principalmente a las prácticas de los sectores populares, se configura en una preocupación pública central en la sociedad argentina y como eje nodal de la cuestión de la inseguridad. En este sentido, Victoria Rangugni (2010) señala que:

El miedo al delito se objetiva como un espacio emergente del gobierno de la (in)seguridad, es así que la sensación de (in)seguridad se constituye como elemento constitutivo del problema. El miedo a ser víctima de un delito está fuertemente concentrado en los delitos callejeros, y está mucho más generalizado que la experiencia efectiva de haberlo padecido (Rangugni, 2010, p. 239).

Según la última Encuesta Nacional de Victimización realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en el año 2017 en Argentina el 85,1% de la población, mayor de 18 años, considera a la inseguridad en su ciudad de residencia como un problema bastante grave o muy grave y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires este porcentaje alcanza al 90% (INDEC, 2018). A su vez, en esta encuesta nacional se señala

que solo el 47,6% de la población del país declaró “sentirse segura o muy segura caminando sola/o cerca de donde vive” y este indicador es más bajo en la Provincia de Buenos Aires, donde el sentimiento de inseguridad en esa situación es mayor (Idem, 2017). Por su parte, según el informe de monitoreo de inseguridad realizado por el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires en el año 2023, el 70% de la población percibe al problema de la inseguridad como muy grave o extremadamente grave y la percepción de inseguridad es aún mayor en la Provincia de Buenos Aires (el AMBA) y la Ciudad de Rosario (en la Provincia de Santa Fe). Es decir, estas son las localidades consideradas como más inseguras en Argentina (OPSA, 2023).

Por otro lado, la reorganización del campo del control del delito a partir de la idea de inseguridad implicó, a su vez, la configuración de sujetos sociales, distinguiendo de manera tajante y esencializada entre los “amenazantes” de los “amenazados”, los victimarios de las víctimas. Esta producción ha sido identificada por variadas investigaciones, señalando que los jóvenes, varones y de sectores populares son los portadores de un estigma que los performa como los sujetos-objetos de la inseguridad en tanto agentes amenazantes, peligrosos, violentos. De manera que las juventudes de sectores populares se configuran en una de las poblaciones marginalizadas bajo la imagen de la delincuencia, así como también en objeto de las prácticas violentas, de baja y alta intensidad punitiva, que despliegan las fuerzas de seguridad (como las detenciones arbitrarias, el hostigamiento, la persecución y torturas)(GUEMUREMAN, 2002, 2011; GUEMUREMAN Y DAROQUI, 2001, 2004; LÓPEZ ET AL, 2011; CALZADO, 2004; PEGORARO, 2002; VILKER, 2011; AYOS, 2016; AYOS Y JACK, 2018, 2020; GUMUREMAN Y ZAJAC, 2020; ZAJAC, 2020).

En este contexto, la discusión social sobre la inseguridad se configura como uno de los espacios centrales en la generación de estereotipos sociales, en particular asociados a la peligrosidad, de manera que el “problema de la inseguridad” opera en la producción, amplificación y naturalización de la fragmentación social (AYOS, ET AL, 2010), en la identificación (y segregación) social de sectores y grupos sociales y espacios urbanos, ingresando en las dinámicas de distinción entre los grupos que ocupan lugares diferentes en el espacio social. La gestión de la inseguridad se instituye como un mecanismo o “paradigma de gobernanza” (RODRÍGUEZ ALZUETA, 2014) que opera a partir de la separación y/o exclusión de aquellos grupos sociales que son identificados bajo la imagen del delincuente como amenazantes para determinadas poblaciones.

En este sentido, la forma en la que el eje seguridad-inseguridad emerge en nuestras discusiones político-culturales retejiendo las relaciones entre el delito, las condiciones de vida, lo urbano, o la cuestión de lo juvenil, muestra una profunda transformación de nuestras sociedades, que puede rastrearse, también desde los años noventa, en la construcción de una sensibilidad social con respecto al delito que intensifica los contenidos punitivos, que es crítica de la justicia penal por su permisividad y por “atarles” las manos a las fuerzas de seguridad, y que desde un posicionamiento emotivo y moral no duda en fijar como sujetos culpables de esta inseguridad a aquellos grupos constituidos en objeto de los procesos de criminalización que realizan las agencias penales los que antes referíamos: los jóvenes, varones, pobres, habitantes de sectores diferenciables territorialmente de la urbe, como villas o asentamientos (PEGORARO, 2003; DAROQUI, 2003).

Otro punto importante que puede advertirse en lo que hace a esta reconfiguración del campo del control del delito, refiere a los momentos en los que se intensifica el debate público sobre la cuestión de la inseguridad. La campaña electoral del año 1999 fue uno de esos momentos, cuando alcanzó niveles inéditos (SOZZO, 2007). En ese momento, el entonces vicepresidente de la nación y candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, fue uno de los principales exponentes del discurso de la “mano dura” frente al delito bajo el lema “*hay que meter bala a los delincuentes*” (SOZZO, 2008, 2009; AYOS, ET AL, 2010; AYOS, 2014). Este escenario marcó el ascenso del “populismo penal” (SOZZO, 2009) en Argentina, es decir la intensificación de la punitividad frente a la delincuencia con el objeto de dar respuesta a los reclamos sociales de mayor endurecimiento penal y policial. Si observamos las tasas de encarcelamiento: en el año 1998 el total de la población privada de la libertad alcanzaba a más de 31 mil personas, promediando una tasa de encarcelamiento de 84 cada 100 mil habitantes, mientras que hacia el año 2005 la población alcanzó un total de 63 mil personas aproximadamente, promediando una tasa de 174 cada 100 mil habitantes (SNEEP, 2005). En el caso de la Provincia de Buenos Aires, en el período se duplicó el número de personas detenidas: en el año 1998 la cantidad era de 12.460, en el año 2000 de 15.012 y en el año 2005 la población alcanzó un total de 24.721 (ÍDEM, 2005).

No obstante, esta tendencia hacia el aumento de la punitividad ha persistido (y se ha intensificado) durante las últimas dos décadas, incluso en el marco de gobiernos considerados “progresistas” o “posneoliberales” (SOZZO, 2016). Para graficar esta tendencia, en diciembre del año 2014 la tasa de encarcelamiento era de 161,8 cada 100



mil habitantes y del total de la población detenida en las cárceles, el 60% tenía entre 18 y 34 años (SNEEP, 2014). Hacia el año 2019 la tasa de encarcelamiento era de 243 personas detenidas cada 100.000 habitantes, mientras que hacia el año 2022 la tasa de encarcelamiento era de 255 personas detenidas (SNEEP, 2019, 2022). En relación a la Provincia de Buenos Aires, hacia el año 2015 la tasa de encarcelamiento era de 216 cada 100 mil habitantes, con más de 36 mil personas privadas de la libertad (CELS, 2016), en el año 2019 la tasa pasó a 336 cada 100 mil habitantes, con 58.300 personas detenidas (MINISTERIO PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 2019), mientras que en el año 2022 había 407 personas detenidas cada 100 mil habitantes (COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA, 2023).

Por otra parte, también puede advertirse esta reconfiguración del campo del control del delito en relación al reforzamiento de la presencia y vigilancia policial en los barrios y las zonas de mayor vulnerabilidad como estrategia preventiva, en particular de las fuerzas de seguridad nacionales como la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y la Prefectura Naval Argentina (PNA) (AYOS Y FIUZA, 2018; GUEMUREMAN Y ZAJAC, 2020; ZAJAC, 2020; FREDERIC, 2021). En el año 2010 el Ministerio de Seguridad de la Nación lanzó el Operativo Centinela, que implicó el despliegue de 6000 gendarmes en el conurbano bonaerense (GUEMUREMAN Y ZAJAC, 2020), y en el año 2011 se implementó el Operativo Cinturón Sur, que tuvo lugar en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires con el despliegue de más de 2500 efectivos de la GNA y de la PNA (ÍDEM, 2020). Asimismo, en octubre del año 2011 también se puso en marcha el programa “Cuerpos de Prevención Barrial” de la Policía Federal Argentina y de la Gendarmería Nacional Argentina con el objetivo de “contribuir a la resolución y gestión de los conflictos, a la convivencia pacífica y el uso por parte de todos los vecinos del espacio público” (BERNI, 2015, p.24) y “restituir la confianza entre la ciudadanía y las agencias policiales” a través de la interacción, el diálogo y el vínculo de cercanía de estas fuerzas con la comunidad (ÍDEM, 2015, p. 14).

Ahora bien, durante la gestión de gobierno de la alianza “Cambiamos” entre los años 2016 y 2019 se observó un marcado reforzamiento de los contenidos punitivistas en los posicionamientos y en la retórica del discurso de la alianza gobernante en materia de seguridad. En este sentido, el discurso securitario del gobierno se orientó a la criminalización y estigmatización de diferentes poblaciones, como militantes y dirigentes de organizaciones y movimientos sociales, receptores de “planes sociales”, migrantes y jóvenes de sectores populares (CANELO, 2019; PLAZA, ET AL., 2019) y se caracterizó,

también, por el fuerte respaldo político-institucional a las fuerzas de seguridad bajo el lema “tenemos que cuidar a los que nos cuidan”, reactualizando la polarización entre sujetos sociales de la “inseguridad” (DALLORSO Y SEGHEZZO, 2016): por un lado, los victimarios, a quienes hay que combatir por su peligrosidad, pero que están protegidos por una justicia penal que opera diferencialmente en beneficio de su impunidad y, por otra parte, las víctimas de la inseguridad, auto-percibido como un “nosotros” conformado por buenos ciudadanos que quieren vivir en paz (ÍDEM, 2016).

En ese escenario, una de las principales líneas de intervención en materia securitaria del gobierno de la alianza “Cambiamos” se centró en el reforzamiento de la presencia policial en los barrios populares. En el año 2016 la exministra de seguridad de la nación, Patricia Bullrich, creó en la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación el Programa “Barrios Seguros” para reforzar la intervención de la GNA en tareas de seguridad interior, principalmente en villas y asentamientos, en pos de recuperar “el control en los barrios que habían sido tomados por las bandas narcos” (FREDERIC, 2021).

Diferentes autoras/es sostienen que el incremento de la presencia de efectivos de las fuerzas de seguridad en los barrios tuvo como correlato el aumento general de la violencia policial hacia jóvenes (PERELMAN Y TUFRÓ, 2016; GUEMUREMAN Y ZAJAC, 2020; ZAJAC, 2020), principalmente en relación al “despliegue de técnicas de menor intensidad punitiva”, como las retenciones y detenciones arbitrarias, el hostigamiento, los “pedidos de documento constantes, amenazas, cacheos y requisas agresivas en busca, principalmente, de droga en pequeñas cantidades, agresión verbal y psicológica” (GUEMUREMAN Y ZAJAC, 2020, p.168). Según la Comisión Provincial por la Memoria (2023), entre el año 2017 y 2021 aumentó el porcentaje de personas jóvenes detenidas en el sistema penitenciario bonaerense y la mayoría de la población detenida son jóvenes varones. Asimismo, según el Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena, hacia el año 2019 el 95% de las personas detenidas (en cárceles y/o comisarías) eran varones y el 58% tenía menos de 35 años de edad, mientras que hacia el año 2022 el 96% de la población detenida eran varones y el 54% tenía menos de 35 años de edad (SNEEP, 2019, 2022). A su vez, en ese contexto de intenso debate público sobre la cuestión juvenil y la inseguridad, el gobierno de Mauricio Macri impulsó un proyecto de ley que proponía la baja de la edad de imputabilidad a los 15 años de edad para delitos graves y el establecimiento de penas y sanciones más altas y ejemplificadoras (GUEMUREMAN Y ZAJAC, 2020). Esta iniciativa no avanzó en el congreso nacional,

pero en el año 2019 fue puesto en marcha el programa “Servicio Cívico Voluntario en Valores” en la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación para jóvenes entre 16 y 20 años de edad con el objeto de promover su inserción laboral y prevenir que sean “cooptadas/os” por organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico (JACK, 2022). Este programa socio-educativo tenía como propuesta brindar a jóvenes oportunidades de formación a través de la intervención de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) (ÍDEM, 2022).

Desde los primeros meses del año 2020, con la gestión de gobierno del presidente Alberto Fernández y Cristina Fernandez (2019-2023), se han producido una serie de reorientaciones en las intervenciones estatales del campo de la política social y del control del delito. En primer término, el gobierno intentó marcar un cambio de paradigma en la política socioeconómica Argentina, con un retorno a los ideales sociopolíticos peronistas, en tanto se llevaron a cabo políticas económicas y sociales con un enfoque más intervencionista, buscando la reactivación económica y el fortalecimiento del sistema de protección social (FERRARI MANGO Y GUIMENEZ 2021; CANTAMUTTO Y SCHORR, 2022).

En materia securitaria, el discurso de la alianza gobernante en torno a la actuación de las fuerzas de seguridad se centró en la noción de derechos humanos. En este sentido, en el acto de asunción presidencial de Alberto Fernandez ante la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre de 2019, el expresidente destacó la consigna de respeto de los derechos humanos y sus garantías en relación al accionar policial. En este marco, desde el gobierno nacional se llevó a cabo un proceso de revisión de los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad, buscando limitar el uso letal de la fuerza, así como también prevenir los abusos policiales y la violación de los derechos humanos (DECRETO N° 571/2020; RESOLUCIÓN 413/2022).

Ahora bien, en marzo del año 2020 el gobierno de Alberto Fernández decretó una serie de medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) a causa de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. El ASPO impuso estrictas restricciones de circulación a la población, a excepción de quienes debían cumplir tareas laborales consideradas esenciales. Frente a este escenario, se asignó a las fuerzas de seguridad (federales y provinciales) la responsabilidad de garantizar en la vía pública el cumplimiento de las medidas de aislamiento y distanciamiento establecidas por las autoridades nacionales.

En ese contexto de ASPO, se viralizaron y denunciaron diferentes situaciones de violencia institucional hacia jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad por incumplir con la cuarentena obligatoria. El primer hecho ocurrió en la localidad de Isidro Casanova, partido de la Matanza de la Provincia de Buenos Aires, cuando miembros de la Policía Bonaerense obligaron a un grupo de jóvenes a “bailar” a modo de castigo por incumplir la cuarentena. Otro hecho tuvo lugar en la Villa 1-11-14 de Flores de la Ciudad de Buenos Aires, cuando agentes de la Gendarmería Nacional obligaron a jóvenes que circulaban en el barrio a caminar en cuclillas. Finalmente, otro hito importante de violencia institucional hacia jóvenes en el contexto de ASPO tuvo lugar a fines de abril del mismo año con la desaparición, seguida de muerte, del joven Facundo Astudillo en la Ciudad de Bahía Blanca luego de ser detenido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires por violar las medidas de aislamiento decretadas por el gobierno nacional.

En este sentido, Garrida Zucal (2023) señala que en el período de pandemia, con el establecimiento de los controles centrados en la restricción de la circulación en el espacio público, las fuerzas de seguridad no modificaron sus patrones de policiamiento, sino que se intensificaron dos formas de violencia policial hacia las poblaciones en condición de vulnerabilidad que son de larga data: el “hostigamiento”, que alude a aquellas prácticas violentas como los abusos policiales, el maltrato físico y verbal, las demoras en las delegaciones, el verdugueo y la humillación; y la “ausencia policial”, que refiere a la falta de patrullaje en los barrios o bien a la desatención de las llamadas a las comisarías o delegaciones (GARRIDA ZUCAL, 2023). Asimismo, en el año 2020, en el primer período de aislamiento y restricción de la circulación, también aumentaron notablemente las detenciones policiales en la Provincia de Buenos Aires. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)<sup>3</sup>, en ese año se registraron 427401 detenciones, mientras que en el año 2019 se habían registrado 299.078. Por lo cual, aumentaron un 43% las detenciones policiales durante 2020, en comparación a las aprehensiones efectuadas en los años previos a la pandemia (CELS, 2020 en GARRIDA ZUCAL, 2023). En el siguiente apartado se presentan los resultados de la investigación y luego las conclusiones finales del trabajo.

### **Imágenes de la pospandemia en Argentina: seguridad, violencias y cuestión social**

---

<sup>3</sup> Información publicada por el CELS en función a la base de datos de la Superintendencia de Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Nuestro trabajo de campo muestra diferentes modos de problematización en los que se articulan y tensionan la inseguridad, las violencias y la cuestión social. Estas discusiones o problematizaciones se producen en un escenario “pospandémico” y en ese sentido muestran como nota distintiva una predominancia de las discusiones sobre las prácticas de policiamiento, la violencia institucional y el rol de las fuerzas de seguridad en la producción de inseguridad. Esto se conecta con un estado de los debates públicos en este escenario “pospandémico”: en un contexto de confinamiento o restricción a la circulación en los espacios públicos, emerge como tópico la potestad de la autoridad política y de las agencias estatales de regulación de las libertades individuales y su capacidad de control de los intercambios sociales. Esto puede observarse en un conjunto diverso de expresiones, que van desde el cuestionamiento libertario o de la “nueva derecha” a las medidas de confinamiento sanitario y de restricción de ciertas actividades sociales, hasta los reclamos de organizaciones sociales y comunitarias por la intensificación de la violencia institucional en los barrios populares. Este es el estado de discusión “pospandémico” en el que la discusión sobre las formas de articulación entre seguridad, violencias y cuestión social se produce en nuestros grupos focales.

En este escenario, los modos de problematizar la seguridad muestran una pluralidad de abordajes, reconstruyendo un heterogéneo mapa de elaboraciones, en donde identificaremos tensiones, oposiciones, solapamientos y también continuidades. Vamos a priorizar un desarrollo sobre las particularidades que han mostrado las discusiones en cada uno de los grupos socio-ocupacionales y los posicionamientos que al interior de los mismos se recortan en virtud de aquellas otras dimensiones que tuvimos en cuenta en la construcción de nuestros grupos: el género, la edad y la inscripción territorial dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)<sup>4</sup>.

A modo de guía general podemos decir que en el Grupo de Profesionales Independientes la seguridad emerge como construcción compleja y en un registro que podemos llamar “político”, en donde la explicación social sobre el delito y la violencia

---

<sup>4</sup> El Área Metropolitana de Buenos Aires está conformada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y por otros 24 municipios de la Provincia de Buenos Aires que conforman el Conurbano Bonaerense. El Conurbano Bonaerense se organiza en cordones de municipios aledaños a la CABA. El primer cordón está integrado por los partidos de: Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza (una parte), Morón, Tres de Febrero, San Martín, Vicente López, San Isidro; el segundo cordón lo integran: Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Ezeiza, Moreno, Merlo, Malvinas Argentinas, Hurlingham, Ituzaingó, Tigre, San Fernando, José C. Paz, San Miguel, La Matanza, Almirante Brown; el tercer cordón, más alejado de CABA, comprende las jurisdicciones de: Escobar, Pilar, San Vicente, Marcos Paz, Pte. Perón y General Rodríguez.

(esa, que como ya desarrollamos, por diversas vías entiende de modo general al delito como producto de la desigualdad social y que lo inscribe en el marco de tensiones relativas a la cuestión social) es complementada con un diagnóstico sobre cierta descomposición social y política que incluye la cuestión de la corrupción judicial y policial, el ascenso de la derecha política y la consolidación de los discursos sociales y políticos punitivistas frente a la inseguridad.

Como contrapunto, en el Grupo de Trabajadoras/es Obreras/os la cuestión de la seguridad y la violencia aparece, fundamentalmente, a partir del tópico de la policía y una mirada crítica de las prácticas de policiamiento, en el marco de una reconstrucción más vívida y concreta que en el Grupo de Profesionales Independientes, como parte de un diagnóstico sobre el incremento de la violencia. Esta centralidad de la discusión sobre la policía y sus prácticas es retomada por los Grupos de las/os Trabajadoras/es de la Economía Popular y las/os Trabajadoras/es Rutinarias/os. No obstante, en el primero surge, como idea polémica, el diagnóstico de los límites e impedimentos legales que entorpecen el accionar policial. Mientras que en el segundo, se observan miradas contrapuestas sobre la seguridad y el accionar policial que se conectan directamente con experiencias personales concretas. A partir de aquí comenzaremos a desarrollar las particularidades que adquiere la discusión en cada grupo, retomando las continuidades y diferencias que surgen entre ellos.

Comenzamos con el Grupo Focal de Trabajadoras/es Independientes, realizado a finales de 2022. Si bien en este Grupo fue relevante la discusión sobre las “causas sociales” de la inseguridad luego aparece una interpretación que toma la forma de una complejización de dicha explicación social, a partir de la incorporación al análisis de las prácticas corruptas y violentas de las fuerzas de seguridad, del poder judicial y del ámbito político. En este sentido, Camila, trabajadora independiente de 29 años que vive en la zona norte del Conurbano Bonaerense, reconstruye la inseguridad como una consecuencia directa de la desigualdad social, anclando su mirada a su propia experiencia personal alejada del miedo al delito, con una referencia directa a su vida cotidiana en barrios “muy lindos” tanto del conurbano como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También hay una elaboración retrospectiva que vincula el miedo al delito con la juventud y a su condición de género:

Camila: A mi me preocupa [la inseguridad], lo veo como una consecuencia de la desigualdad social, creo que es como una consecuencia de eso. Obvio que no justifico que haya inseguridad, pero identifiqué antes como la raíz de eso y en lo concreto yo no sé... un poco seré más inconsciente, entonces... no lo

vivo así tan en carne... Yo vivo la mitad de los días en una zona [de la zona norte del conurbano bonaerense] que es muy linda y la otra mitad en Palermo, Villa Crespo... por ahí, cambié mi manera de vivir, yo antes salía un montón con mis amigas, iba a bailar un montón y era un momento capaz no sé si tiene que ver con la edad particular donde vos veás todo el día las noticias en el diario y era “chica violada de 22 años”. Si recuerdo que cuando empecé la facultad hubo un par de años donde yo vivía sí con mucho miedo y era tomar un colectivo y pensar en que ponerme, tenía miedo de tomar un taxi, hoy en día a mis casi 30 pasa que no vivo con esa inseguridad... (Grupo Focal N° 6, Trabajadoras/es independientes, diciembre de 2022).

Introduciendo un contrapunto, Cecilia, trabajadora independiente de 50 años de edad que reside en CABA, afirma que la cuestión de la inseguridad se encuentra entre sus preocupaciones principales y remite a su experiencia personal señalando que sufrió varios episodios violentos:

Cecilia: En el caso justamente del tema de la inseguridad yo pase por varios estadios porque... mi familia y yo tuvimos dos o tres episodios muy violentos realmente. Va con la experiencia de uno, yo pase por varios estadios, desde pensar cuando era más joven que me podía subir a un colectivo hasta por ahí no querer salir a determinadas horas... hoy en día la realidad es que me preocupa. Yo vivo cerca de un barrio que en una época era bastante conflictivo... Pero en general, todos los lugares no dejan de tener su peligro, no es porque vivas en un lugar más o menos, la realidad es que me preocupa si voy a visitar a mi hermano... y si tengo que viajar de noche uso taxi o Uber o Cabify... (Grupo Focal N° 6, Trabajadoras/es independientes, diciembre de 2022).

En su relato se observa que, si bien considera que algunos territorios pueden ser más conflictivos que otros, también señala que “*todos los lugares no dejan de tener su peligro*”. Es decir, que todos los barrios serían potencialmente inseguros. A su vez, Cecilia refiere que la inseguridad “no es solamente un problema socio-económico”, sino también una cuestión vinculada a la corrupción policial, judicial y política. La corrupción se configura en un problema arraigado en la cultura, que produce una situación de “anomia” social, de falta de respeto e incumplimiento de las leyes, que se encuentra intrínsecamente vinculada (en tanto factor causal) con la producción de la inseguridad:

Cecilia: Creo que en determinados estamentos relacionados a lo que sería el poder judicial, la policía, la política, hay una corrupción muy grande y eso para mí hace que lamentablemente exista una anomia absoluta, en muchos casos nos acostumbramos a no respetar la ley. Si lo traslado a todo lo que pasa diariamente, vos tenés la persona que cruza en rojo, claro no te pasa nunca pero viene uno distraído y lo pisa, los de las bicicletas no respetan la bicisenda, van por la vereda, que se yo, de pavadas como esas hasta cosas gravísimas... y eso no es solamente, me parece a mí, un problema social económico, **hay otra cosa que es mucho más profunda que está muy arraigada cada vez más y tiene relación directa con la corrupción y la anomia, el hecho de que la ley existe pero no la vamos a respetar porque si...** (Grupo Focal N° 6, Trabajadores/as independientes, diciembre de 2022).

Este diagnóstico es compartido por Cristina, trabajadora independiente de 60 años de edad que reside en la zona sur del conurbano bonaerense, quien señala que la cuestión de la inseguridad y la corrupción judicial constituyen dos problemáticas interrelacionadas que se encuentran entre sus preocupaciones principales, pero introduciendo la idea de que si “la justicia está comprada” y no funciona, “nada va a funcionar”:

Cristina: Estaba pensando, (...) el tema de la inseguridad me parece que es importante y hay mucha corrupción. (...). La justicia que está comprada, todo eso para mí es un combo... son muchas cosas que me preocupan, pero sobre todo en la justicia, por supuesto educación, obvio... pero justicia fundamentalmente.. y la inseguridad y la corrupción.

E: Cuando vos hablas de corrupción, ¿te referís a la política, también a la justicia? ¿Estas conectando esas cosas?

Cristina: Si, a todo... a la corrupción en general, no solamente por los políticos en particular, sino en general. (...). Pero lo que más me preocupa, más allá de la corrupción, que es fundamental... porque vos decís: Si tengo una justicia super corrupta, voy a tener inseguridad porque es obvio, no voy a tener educación porque también es obvio... o sea, si no funciona la justicia, si hay jueces corruptos, gente corrupta que nos maneja, nada va a funcionar, ni siquiera la política, porque los medios están comprados, la gente escucha a los medios, escuchamos los medios, hacemos corridas... no sé, me parece que está todo interrelacionado (Grupo Focal N° 6, Trabajadoras/es independientes, junio de 2023).

En línea con Cecilia, en el discurso de Cristina se observa que la corrupción en general y la corrupción judicial en particular, es asociada de manera directa como factor causal de la inseguridad. En este sentido, emerge en su relato la idea de que “nada funciona” si hay corrupción judicial. De esta forma, la corrupción judicial, la “justicia que no funciona”, así como también la corrupción política y de los medios de comunicación que son “comprados”, operan de manera interrelacionada en la producción de la inseguridad y la violencia.

Esta interpretación es compartida también por Silvia (trabajadora independiente de 36 años que reside en la zona norte del conurbano), con un giro que retoma la explicación social. En su relato, la corrupción judicial, la “falta de justicia”, pero también la falta de trabajo y la inflación, son las causas de la inseguridad. No obstante, en su discurso aparece un elemento adicional: este diagnóstico centrado en la corrupción, el desempleo y la inseguridad, desde su perspectiva se relaciona, en tanto factor causal, con su preocupación principal que versa sobre el avance del “fascismo”, vinculado a “los libertarios” y la figura de Javier Milei como la imagen de la “rebeldía entre los jóvenes”, y la radicalización de los discursos sociales y políticos que demandan “mano dura” para enfrentar el delito:



Silvia: A mí lo que más me preocupa ahora es el fascismo que está avanzando, que por ahí ahora la rebeldía de los chicos es Milei ¿No? Es decir... la libertad mal entendida, que me parece que viene de la mano de... la educación que está bajando, la inseguridad también, que lo primero que la sociedad quiere es mano dura y eso es falta de justicia, por ahí... son cosas como que se relacionan como dice Cristina y otra de las cosas es la crisis habitacional, para nosotros los que alquilamos está bastante complicado... y otra cosa es la inflación que tiene que ver con lo mismo también. La inseguridad que va de la mano de la falta de trabajo también, es todo... como dice Cristina... todo va relacionado, una cosa con la otra... pero creo que lo que más me preocupa ahora es el fascismo que está avanzando a nivel mundial (Grupo Focal N° 6, Trabajadoras/es independientes, junio de 2023).

De manera que para Silvia el avance de las derechas a nivel mundial y en Argentina en particular, es expresión de la falta de justicia y educación, como también del aumento del desempleo y de la inseguridad. En el mapa esbozado, el fortalecimiento de los discursos reaccionarios se nutre del estado de situación descrito en el que se incluye a la inseguridad, estableciendo un vínculo entre el discurso de mano dura frente al delito con la radicalidad del discurso de la nueva derecha.

En estos Grupos de Trabajadoras/es independientes emerge una elaboración sobre la cuestión de la inseguridad que podríamos caracterizar como *compleja y política*, en tanto que, sin negar la explicación social a partir de la desigualdad, complejiza su construcción introduciendo otras causalidades como la corrupción judicial y policial. Sin embargo, a su vez aparece cierto diagnóstico de *desintegración política*, donde resuenan palabras como “anomia”, o se refiere al surgimiento del “fascismo” aludiendo al apoyo de jóvenes a la figura de Javier Milei. De este modo, la inseguridad es explicada en referencia a la creciente desigualdad y los problemas sociales como el trabajo y la educación, pero al mismo tiempo es inscripta en un diagnóstico más general de *desorganización o descomposición simbólica*, en donde la noción de corrupción se escapa de la producción más recurrente del discurso conservador, y parece adoptar un posicionamiento crítico en relación al campo de lo político. Es decir, aparece una aproximación crítica de la policía y de la justicia, pero también de procesos más generales y eminentemente políticos, como la emergencia de la extrema derecha entre los jóvenes.

En las discusiones del Grupo Focal de Trabajadoras/es Obreras/os en torno al problema de la inseguridad emerge principalmente la preocupación acerca del desempeño policial y las violencias. Pero, al mismo tiempo, es una discusión en la que aparece una reconstrucción más vívida de la violencia y su incremento en comparación con el Grupo anterior, junto a un diagnóstico de la "complicidad" policial, y de las formas de violencia institucional, como parte del problema, presente, vívido, de la inseguridad.

Podemos comenzar con uno de los emergentes del debate que tuvo lugar en este grupo focal, en donde se plantea la relación entre la cuestión de la violencia de género y el problema de la inseguridad. En esta línea, en el relato de María, obrera de 47 años que reside en la zona sur de la CABA, esta cuestión aparece como un problema vinculado a la seguridad porque, desde su perspectiva, la designación de policías para la custodia y protección de mujeres ha tenido como correlato la falta de presencia policial en las calles para prevenir y disuadir el delito. En este sentido, si bien María señala que en su barrio observa que ha aumentado la violencia por motivos de género, al mismo tiempo refiere que la falta de presencia policial en las calles se debe a que las fuerzas de seguridad están abocadas principalmente a la custodia y protección de las mujeres que se encuentran atravesando una situación de violencia:

María: Veo que hay mucha violencia de género, se ponen custodia ahora, están como todos en eso y a nosotros, yo que salgo a las 6 de la mañana de mi casa, y a veces pasan cosas, pasa uno de lo ajeno y no hay policía, y te vas a hacer la denuncia y no te dan pelota (Grupo Focal N° 3, Trabajadoras/es obrera/os, junio de 2022).

Esta cuestión se habría tornado en un factor causal de la desprotección del barrio frente al delito. Es decir, aparece un diagnóstico en el cual se enlaza la cuestión de la violencia de género con la falta de policías para cuidar el barrio y brindar seguridad a vecinos que van a trabajar, en pos de brindar protección a mujeres que luego “defienden a los varones que las maltratan”:

Hector (Trabajador obrero de 39 años que reside en la zona oeste del conurbano bonaerense): Yo eso de la violencia de género me he peleado en la calle, y me metí, hasta a la comisaría fui... y la piba lo defendía a él que la recagaba a palos (Grupo Focal N° 3, Trabajadoras/es obreras/os, junio de 2022).

En concatenación, también emerge en el debate de este grupo focal una línea analítica crítica de la intervención judicial y policial en materia de prevención y abordaje de las violencias por motivos de género. La asignación de un mayor presupuesto estatal, de recursos institucionales, como los botones antipánico, y el establecimiento de comisarías especializadas, como las comisarías de la mujer, es leído como ineficiente e insuficiente. En este sentido, José, residente de la zona sur del conurbano bonaerense, refiere que las/los policías de las comisarías no estarían preparadas/os para recibir las denuncias de las mujeres, “se burlan de ellas” y no tienen la voluntad real de ayudarlas:

José (trabajador obrero de 32 años que reside en la zona sur del conurbano bonaerense): El tema también con el tema de la violencia de género [es que] le dan botón antipánico, no sé para qué sirve porque los chabones van igual, las comisarías de la mujer son un desastre porque van a hacer la denuncia y les

toman el pelo, la hacen esperar 50 mil horas ahí a la pobre piba. Entonces tampoco hay ganas de ayudar a las chicas que sufren violencia de género (Grupo Focal N° 3, Trabajadoras/es obreras/os, junio de 2022).

De esta forma, podemos evidenciar una tensión entre la valoración de las políticas públicas diseñadas para combatir la violencia de género a partir de una crítica a su ineficacia o insuficiencia en su implementación concreta, y la elaboración anterior que las ubicaba como parte de las causas en el diagnóstico de la falta de presencia policial.

Por otra parte, Ernesto (trabajador obrero de 24 años que reside en la zona sur del conurbano bonaerense), comenta que sufrió varios episodios (personales y familiares) de robos y de violencia en la puerta de su casa de la zona sur del conurbano bonaerense: “Yo sufrí muchos robos familiares. En la puerta de mi casa, a mi hermano casi le meten un tiro en la puerta de mi casa, le llevaron el auto, le pegaron” (Ernesto, Grupo Focal N° 3 Trabajadoras/es Obreras/os, junio de 2022). Además, refiere que para él la inseguridad es consecuencia, en parte, de la corrupción e inoperancia policial. De la policía que está en la comisaría “sin hacer nada”, “tomando café”, o cuando están en la calle tampoco serían garantía de protección porque la policía “*nunca está donde debería estar*”:

Ernesto: Yo creo que también es un poco la corrupción que hay entre policías. Vos vas a la comisaría y no te dan pelota, estás ahí esperando que te tomen la denuncia y están todos ahí tomando café, y vos lo que menos querés es esperar e irte a tu casa. Y los policías en la calle van a dos por hora, o están parados, donde tiene que estar la policía nunca está. Supuestamente Alberto no sé cuántos móviles puso, y la policía nunca... Por lo menos yo creo que todos los lados son inseguros, no hay ninguna zona segura (Grupo Focal N° 3, Trabajadoras/os obreras/os, junio de 2022).

La ausencia, la inoperancia y corrupción policial en la calle se traduce en que “*todos los lugares sean inseguros*”, que “*ninguna zona sea segura*”. No obstante, luego señala, en sintonía con Hector, también residente del conurbano bonaerense pero de la zona oeste, que en “provincia” (en referencia a la Provincia de Buenos Aires) la inseguridad es aún mayor, y que se ha intensificado en los últimos años:

Hector (trabajador obrero de 39 años que reside en la zona oeste del conurbano bonaerense): Yo ando en la moto todas las noches y no cambié nada. Provincia [de Buenos Aires] es un poco más jodido, pero es suerte.

Ernesto (trabajador obrero de 24 años que reside en la zona sur del Conurbano bonaerense): O sea, hay muchos más robos que en años anteriores...

Hector (trabajador obrero de 39 años que reside en la zona oeste del conurbano bonaerense): Hasta en el colectivo han robado el fin de semana (Grupo Focal N° 3, Trabajadoras/es obreras/os, junio de 2022).

Para Julio, trabajador obrero de 24 años de edad que también reside en la zona sur del conurbano bonaerense, la inseguridad actual, es “*más violenta*” que antes: “*hay inseguridad, el tema es que ahora a diferencia de antes que también había, es que capaz*

*es más violento, por cualquier boludez ya te pegan un tiro”* (Grupo Focal N° 3 Trabajadoras/es Obreras/os, junio de 2022).

Por otra parte, en la discusión mantenida en este grupo focal en torno al problema de la seguridad-inseguridad, si bien emerge una problematización centrada en la explicación social del delito y la violencia, sobre la cual luego volveremos, también se observa que se pone en el centro de la discusión la cuestión de la intervención policial, pero no sólo en términos de la corrupción y la inoperancia que caracterizaría el accionar de las fuerzas de seguridad, como se mencionó anteriormente, sino específicamente en relación a la violencia institucional que las y los agentes policiales despliegan sobre las poblaciones que son vinculadas a la imagen de la inseguridad, como las detenciones arbitrarias de jóvenes de barrios populares:

José (trabajador obrero de 32 años que reside en la zona sur del conurbano bonaerense): Y tiene que ver con lo que dice él para mí que la policía también, porque si ellos son los que saben quién está robando...

Silvina (trabajadora obrera de 42 años que reside en la zona sur de la CABA): Sí, a mí no me da seguridad que haya policía la verdad.

José (trabajador obrero de 32 años que reside en la zona sur del conurbano bonaerense): Una vuelta andaban los patrulleros por ahí cerca de mi casa y lo agarraron a un pibe, un pibe que trabaja, y se lo querían llevar y él estaba ahí, siempre se paraba en una esquina el pibe, hablando con los otros pibes. Y como él les respondió “no, yo no voy a ir, si yo trabajo”, y como le contestó ya es una falta de respeto para ellos, viste. Entonces lo quisieron reducir, se pelearon ahí, al final lo terminaron reduciendo. Pero el chaboncito que vende droga en el barrio estaba ahí mirando y él no lo llevás que vende droga? ¿me llevás a mí que voy a laburar? Entonces vos no sabés qué es peor, si que esté la policía o que no esté (Grupo Focal N° 3, Trabajadoras/es obreras/os, junio de 2022).

Tensionando el diagnóstico del problema de la falta de policías en las calles por la centralidad de la protección a las víctimas de la violencia de género que observamos anteriormente, la presencia policial en los barrios del conurbano bonaerense y de la zona sur de la CABA es cuestionada como garantía de mayor seguridad. Por el contrario, las fuerzas policiales serían un agente vinculado a la delincuencia, que “*conoce a quienes roban*” y detiene de forma ilegal y hostiga a las/os jóvenes por estar “*en una esquina, hablando con otros pibes*”, en lugar de detener a quienes efectivamente cometen delitos. En este sentido, se observa una discusión en la que se plantea que lxs jóvenes se configuran en la población objetivo del accionar violento que despliegan las fuerzas policiales, las cuales tampoco brindarían protección a aquellos pibes del barrio que pueden sufrir situaciones de inseguridad:

Hector (trabajador obrero de 39 años que reside en la zona oeste del conurbano bonaerense): A los pibes en el barrio los cagan a palos, mi primo apareció todo morado. Capaz que con cámaras podés mandar un patrullero, no sé, algo.

María (trabajadora obrera de 47 años que reside en la zona sur de la CABA): O lo buscás vos, porque la policía... (Grupo Focal N° 3, Trabajadoras/es obreras/os, junio de 2022).

De esta manera, en el Grupo Focal de Trabajadoras/es Obreras/os podemos reconstruir una discusión sobre la seguridad que se ancla en experiencias concretas y cotidianas sobre el aumento de la violencia en la vida barrial, con un eje en el desempeño policial, articulando posicionamientos que presentan la falta de presencia policial en los barrios como problema (a partir de una mirada crítica de las políticas de protección contra la violencia de género) con otros que la reconstruyen como parte del problema y no de la solución, refiriendo tanto a la ineficiencia como a la violencia institucional. De este modo vemos que hay una diferencia de registro y de tópicos con respecto a los Grupos de Trabajadoras/es Independientes: anclaje en experiencias barriales más concretas y centralidad de la institución policial, frente al registro más generalista y la complejización de la explicación social.

Ahora bien, en el Grupo Focal de Trabajadoras/es de la Economía Popular la cuestión del abuso y la violencia policial, específicamente hacia jóvenes, también se encuentra entre las preocupaciones principales vinculadas a la inseguridad. Sin embargo, en esta discusión emerge a su vez un posicionamiento polémico, centrado en la idea crítica de los límites que la legislación (vista como excesiva e ineficiente) le impone a las fuerzas de seguridad, entorpeciendo su trabajo.

Como primer movimiento puede observarse una concepción en la cual las fuerzas de seguridad son comprendidas como parte del problema de la inseguridad. En este sentido, Gabriela señala que la policía se lleva a “*los chicos que tienen portación de rostro*” por “usar la gorrita” o ropa deportiva, mientras que no son detenidas/os las/os delincuentes de “*guante blanco*”:

Gabriela (trabajadora de la economía popular de 50 años que reside en CABA): Es horrible cuando los llevan a los chicos que tienen portación de rostro, es jodido, viste. Pobre chico está, qué sé yo, está vendiendo un par de medias y porque lo vieron con la gorrita o con una campera adidas y ya dicen a este negro lo llevo. Y no es así, viste. Por qué no se fijan los que tienen guante blanco (Grupo Focal N° 4, Trabajadoras/es de la Economía Popular, junio de 2022).

En el discurso de Gabriela se observa que no focaliza en los ilegalismos de los sectores populares, sino que pone en el centro del debate otras formas de ilegalismos: por un lado, las prácticas violentas de las fuerzas de seguridad hacia jóvenes, y, por otra parte,

los delitos de “cuello blanco”, es decir, los ilegalismos ligados al poder económico y empresarial (BARATTA, 1997; PEGORARO, 2003; RANGUGNI, 2009).

Aquí aparece como contrapunto la idea de los límites legales que enfrenta la policía en su accionar. Esta construcción, recurrente en los debates públicos sobre la inseguridad en Argentina, las fuerzas de seguridad se ven constreñidas para intervenir frente al delito por la legislación excesivamente protectora de los supuestos delincuentes, por lo cual las/os policías deben evitar “tener problemas” y poner en riesgo su trabajo, bajo el argumento de “*las leyes defienden más al delincuente que al policía*”:

Alicia (trabajadora de la economía popular de 40 años de edad que reside en CABA): La verdad la inseguridad es demasiado pero, no se fijan en el que de verdad se tienen que fijar.

Alberto (trabajador de la economía popular de 56 años de edad que reside en CABA): Ojo que no lo quieren agarrar. Cuando la policía tiene problemas es cuando interviene, porque a ellos lo que les interesa es cobrar a fin de mes más que agarrar y tener una medalla al mérito -que no se la van a dar tampoco-, es agarrar y pasar el mes sin [tener] problemas. Entonces qué pasa, si vos no denunciás que alguien te robó, ellos directamente no intervienen, si ven que van a robar van a hacer que miran para otro lado. ¿Por qué? porque si vos le llegás a pegar ahí están las leyes que -vamos a decir la verdad- defienden más al delincuente que al policía. El tipo viene con el cuchillo y el policía tiene que pensar dos veces si saca el arma y lo mata porque después por ahí va preso él de por vida. Entonces qué pasa, yo soy policía y salgo corriendo, con las leyes que hay (Grupo Focal N° 4, Trabajadoras/es de la Economía Popular, junio de 2022).

No obstante, se observa una discusión en la que se plantea el temor de la policía a intervenir por el mismo argumento de las leyes que defienden más a los delincuentes que a las/os policías, pero en ese punto Alberto y Gabriela introducen la idea de que el problema es cómo se interviene, planteando las alternativas de una *intervención no letal*. En el caso de Gabriela, vinculando esto a la falta de formación que detenta las fuerzas de seguridad, y en el caso de Alberto, asociado a la falta de implementación de pistolas taser para inmovilizar a los delincuentes y evitar que los policías arriesguen su vida:

Gabriela (trabajadora de la economía popular de 50 años que reside en CABA): Yo creo que el policía tiene que tomar clases o estar más experimentado... porque a veces no son delincuentes. Matan a los que no tienen que matar. O si no los llevan detenidos y no saben ni como esposarlos, ni cómo llevarlos.

Alberto (trabajador de la economía popular de 56 años de edad que reside en CABA): Una vez vi uno, también un tipo con un cuchillo y lo apuñaló. Eran como tres policías. Estaba el loco este con el cuchillo así, y dudó porque hacía poco este hombre que mató al que le dio 7 puñaladas al turista, le disparó y lo mató y fue preso. Fue preso el policía por matar a uno que lo estaba apuñalando, cómo tenés que accionar entonces. Entonces qué pasa, al poco tiempo vino uno con un cuchillo y el tipo no se defendió, porque amagó como para sacarle el arma, y vino uno y le clavó el puñal. Y si lo tendría que haber matado, lo podría haber matado, si el otro estaba armado, pero dudó el policía,

¿por qué? porque si vos lo matás por ahí te arruinás la vida. Yo soy partidario de usar las pistolas [taser] esas, si no lo querés matar, inmovilízalo (Grupo Focal N° 4, Trabajadoras/es de la Economía Popular, junio de 2022).

Desde otro punto de vista, José, trabajador de la economía popular, plantea los límites que presentan las alternativas de intervención no letal, mencionadas por Alberto y Gabriela, argumentando que el problema de la violencia y corrupción de las fuerzas policiales no sólo se vincula con la falta de formación y capacitación profesional que éstas detentan, sino también con la exacerbación de los discursos políticos y las políticas estatales punitivistas en materia securitaria, que sustentan y otorgan legitimidad a los modos racializados de intervención policial sobre grupos asociados a las representaciones sociales hegemónicas de la inseguridad, como la población migrante de países limítrofes. Población que se configura en objeto de criminalización, control, persecución y hostigamiento ilegal policial:

José (trabajador de la economía popular de 41 años de edad que reside en la zona norte de la CABA): Me acuerdo de Chocobar... Que Macri lo abrazó tan fuerte ¿no? Eso te da la pauta de... Porque vos podés instruir, obviamente tiene que ver con la formación, la calidad de la formación que tienen y un montón de cosas, pero si le das un poquito de posibilidades de matar gente, van a salir a matar gente. Que maten a un pibe porque es morochito la verdad es un bajón. Eso se tiene que cortar. Por eso... Nilda Garré avanzó bastante con el Ministerio de Seguridad cuando estuvo, avanzó bastante en sacar las armas de fuego en las manifestaciones. Pero la policía son perros, y a los perros les enseñan a morder y en la medida que pueden van a morder. A nosotros nos ha pasado un montón de veces... me acuerdo cuando pasó el segundo incendio de un taller textil en 2015, a una compañera que trabaja de enfermera la allanaron porque era boliviana, la allanó un policía, ni siquiera la agencia de control gubernamental... (Grupo focal N° 4, Trabajadoras/es de la economía popular, junio de 2022).

En este sentido, Alicia, trabajadora de la economía popular en una cooperativa textil de CABA, también refiere a esta dinámica de corrupción y persecución policial de poblaciones migrantes racializadas, haciendo alusión a su propia experiencia personal como mujer migrante que ha sido objeto de la violencia racista y xenofóbica de las fuerzas de seguridad:

Alicia (trabajadora de la economía popular de 40 años de edad que reside en CABA): Yo pienso lo mismo, que deberían cambiar las leyes e instruirlos de verdad a los policías como debe de ser. No ir a tiros a matar, no discriminar, porque la verdad del lado de la policía también se sufre mucha discriminación ante los extranjeros, peor si sos morochito, y peor si no podés desenvolverte, es peor que te discriminan. A nosotros mismos, acá en la cooperativa, a mi misma me pasó lo mismo, pero si yo no hablo, si yo soy calladita seguro me dicen "cuánto me vas a pagar"... no, no te dice cuánto me vas a pagar, te dice "cómo lo arreglamos", pero yo digo pará qué tenemos que arreglar, yo me organicé, yo saqué esto. Porque si vos te organizas no vas a llegar a hacer todo completo de una porque te lleva tiempo, y aparte de eso, si Ciudad te daría la posibilidad de regularizarte enseguida sería bárbaro, pero no te ayudan, no te

apoyan, y nosotros nos tenemos que organizar. Y todo eso genera dinero y ahí es cuando viene la policía y te dice, la verdad que te quieren sacar, "cómo arreglamos, porque si no te clausuro", no, no estamos para eso, sí, somos todos bolivianos pero pará, también tenemos nuestros derechos, y no vengas a decir cómo arreglamos o te clausuramos (Grupo focal N° 4, Trabajadoras/es de la economía popular, junio de 2022).

Por último, José plantea una explicación "social" sobre los orígenes de la violencia, pero introduciendo la idea del "*negocio de la violencia*" que comprende a las fuerzas policiales como también a los narcotraficantes, y reflexionando sobre cómo intervenir para que el mercado laboral y la educación sean los ejes de la sociedad en la cual se inserten estos sectores, y no la violencia:

José (trabajador de la economía popular de 41 años de edad que reside en la zona norte de la CABA): Hace un ratito preguntaron cuál sería la sociedad perfecta, cómo sería la sociedad o el Estado, y la verdad que la función del Estado es sostener la sociedad en equilibrio. Y ese equilibrio tiene que ver con las desigualdades económicas, el acceso a todos los derechos básicos que tienen que ver con salud, educación y trabajo. Y entonces yo estoy absolutamente seguro que si se encuentran los medios como para que haya un gran porcentaje de la población trabajando, esos niveles de inseguridad bajan considerablemente. Después tenés otro sector, que tiene que ver con el negocio de la violencia y todo lo demás, que eso lo tenés que intervenir. Pero uno de los factores que determina ese grado de vulnerabilidad, tiene que ver con el trabajo, es ahí donde el Estado tiene que apuntar. A partir de ahí es bueno, cómo educamos para que se inserten en un mercado laboral distinto, cómo hacemos para que todo el negocio de la violencia, que tiene que ver no solamente con la policía sino también con el narco y con todo un montón de cosas, cómo intervenimos para que esos sectores se inserten al mercado laboral, se inserten a espacios de educación, se inserten a una sociedad donde la violencia no sea el eje (Grupo focal N° 4, Trabajadoras/es de la economía popular, junio de 2022).

De este modo, en el Grupo de Trabajadoras/es de la Economía Popular podemos observar cómo en el eje de discusión sobre las fuerzas de seguridad se articula un posicionamiento que las piensa como parte del problema, fundamentalmente en relación al tópico de la violencia institucional, con otro centrado en la crítica a los "límites" legales del accionar policial, que al mismo tiempo abre a la discusión sobre la baja profesionalización y los problemas de formación de los agentes policiales. Por otro lado, aparecen la xenofobia y el racismo como claves para interpretar la violencia policial, en referencia especialmente a la población migrante. A su vez, se observa una reelaboración de la explicación social a partir de la idea del "negocio de la violencia".

En relación al Grupo Focal de Trabajadoras/es Rutinarias/es del Sector Público y Privado, emerge una discusión en torno a la cuestión de la seguridad que también se centra en la cuestión del accionar policial en términos de "*la represión y el abuso de las fuerzas policiales*" en el contexto urbano, pero desde un registro cercano a la experiencia concreta de la vida cotidiana.



En este sentido, Marina y Fernanda, ambas residentes de la zona norte del conurbano bonaerense, plantean su preocupación sobre el accionar policial y la intensificación de la violencia institucional. En el caso de Marina, reflexionando sobre la tensión que se presenta entre los reclamos sociales por mayor seguridad, para “*caminar con tranquilidad por la calle*” sin temor a la delincuencia callejera, y el “*abuso de poder de las fuerzas de seguridad*” y haciendo referencia a la idea de que la inseguridad es más una “*sensación*” antes que una experiencia real de haber sido víctima de un delito; y en el caso de Fernanda, planteando su preocupación sobre la violencia institucional en torno a la intensificación de los abusos policiales, y la vía libre para la represión, particularmente en el contexto de pandemia (por las medidas de aislamientos social, preventivo y obligatorio):

Marina (Trabajadora rutinaria del sector público/privado de 31 años que reside en la zona norte del conurbano bonaerense): A mí lo que más me preocupa es el abuso de las fuerzas, me parece que hay un lugar común de pedir seguridad por caminar una tranquila por la calle, pero a mí eso me hace mucho ruido y pienso en cuánto poder le estamos dando a la policía o a la metropolitana o lo que sea y lo que hacen con eso, pero bueno también insisto que tengo la tranquilidad de que yo por donde me muevo no tengo ese chip de: “Ay me da miedo estar acá”, me parece que es algo más prefabricado que lo real, esto por supuesto es mi opinión y desde ya me parece que por supuesto la mejor manera de combatir eso es garantizando derechos.

Fernanda (Trabajadora rutinaria del sector público/privado de 39 años que reside en la zona norte del conurbano bonaerense): Coincido bastante con lo que dijo [en referencia a Marina]... la verdad que no es una preocupación que tenga en el día a día. La seguridad no sé en qué lugar la pondría, no entra en el Top 10 ni mucho menos, me preocupa la violencia institucional, me preocupa por ejemplo cuando fue la época más dura de la pandemia como eso favoreció a los abusos policiales, se dieron muchos abusos, como que había cierta vía libre para cierta represión y en general el discurso de más seguridad viene acompañado muchas veces de mano dura, de más represión y no me siento para nada interpelada por ese discurso (Grupo focal N° 2, Trabajadoras/es rutinarias/os del sector público y privado, mayo de 2022).

Ahora bien, mientras Marina y Fernanda refieren, haciendo alusión a sus propias experiencias personales, que el miedo al delito no se encuentra entre sus preocupaciones principales, desde otro punto de vista Melina realza su temor a ser víctima de la inseguridad en el espacio público urbano, focalizando en aquellas personas que residen en barrios empobrecidos, principalmente en villas. Es decir, en su discurso localiza la peligrosidad en un segmento socio-espacial específico en función de la cercanía con villas o asentamientos urbanos. Melina conceptualiza la cuestión de la inseguridad a partir de su experiencia personal concreta, vinculada a los robos cuando sale de su trabajo, marcando un contrapunto con la mirada de Marina y Fernanda que refieren no haber vivenciado hechos delictivos:

Melina (Trabajadora rutinaria del sector público/privado de 35 años que reside en la zona norte de la CABA): Yo totalmente opuesto, si voy con mucho miedo por la calle, de hecho, parte de lo que gano de propina es para volverme en Uber, taxi, Cabify lo que de más barato a mi casa todas las noches porque salgo de las doce y media en adelante, he salido del trabajo a las tres de la mañana, justo ahí que está la villa al toque han robado a todos mis compañeros y no sé, como que... una situación, iba con el gas pimienta en la mano, muerta del susto porque no se... se te acercan... (...). Muy peligroso, yo los veo detrás de los árboles con palos y la verdad que no tengo ganas de pasar por eso, es feo, es angustiante, iba con el gas pimienta y me daba cuenta que estaba obsesionada, practicaba como activarlo rápido porque a todos mis compañeros les han robado, a todos, no hay uno al que no le hayan robado esperando el colectivo entonces es como salud mental fue decidir, me va a salir un ojo de la cara como si pagase, no sé, más caro que la obra social, más caro que cualquier cosa pagar un auto todos los días hasta mi casa pero bueno, si, voy muerta del susto (Grupo focal N° 2, Trabajadoras/es rutinarias/os del sector público y privado, mayo de 2022).

Esta perspectiva, centrada en el temor personal a ser víctima del delito callejero, es compartida por Mariela, pero planteando también, en línea con Marina y Fernanda, su preocupación acerca del abuso y la corrupción policial, como las golpizas y detenciones arbitrarias que tienen lugar en el barrio en el cual reside en la zona oeste del conurbano bonaerense:

Mariela (Trabajadora rutinaria del sector público/privado de 24 años y reside en la zona oeste del conurbano bonaerense): Bueno, a mí me pasa lo mismo. Yo donde vivo el año pasado entraron a robar a la mañana, ni siquiera era de noche, a la mañana le entraron a robar a dos casas de mi propia cuadra en una media hora de diferencia cada una, vivo con miedo cuando camino por la calle, estoy a diez cuadras del Fuerte Apache<sup>5</sup>, me pasaba que antes trabajaba mucho de noche que después tuve que pedir el cambio de horario porque se me iba también en Uber, en remise, porque esas dos cuadras que tenía que caminar hasta mi casa eran de terror. Pero no estoy de acuerdo obviamente con el abuso policial porque así como conozco casos de delincuencia terribles en mi barrio conozco también, y hay videos circulando, golpizas a gente que nada que ver, a vendedores ambulantes, que han agarrado a alguien en un mal momento y lo hayan interrogado, llevado detenido de una manera totalmente injusta. La seguridad para mí no debería ser más policía, sino cambiar cómo está el sistema de seguridad en este momento. Me ha pasado también de que han venido a robar al local donde trabajo, llamar a la policía y que no hagan absolutamente nada, entonces yo no pediría más de eso, yo lo que quiero es un cambio, tiene que cambiar la sociedad entera... a partir de la educación, para tener posibilidad de trabajo porque claramente es ahí donde está la falencia y no en la policía o en las fuerzas armadas (Grupo focal N° 2, Trabajadoras/es rutinarias/os del sector público y privado, mayo de 2022).

Además, Mariela propone una intervención no policial frente a la seguridad, que tenga como eje central a la educación y el trabajo, focalizando en las causas sociales del delito. Reforzando esta posición, pero desde otra perspectiva, Juan reflexiona, como trabajador de un organismo del Estado especializado en la materia, sobre la intervención estatal deficiente respecto a la prevención del delito, señalando “nosotros llegamos tarde,

---

<sup>5</sup> Nombre por el que se conoce al barrio Ejército de los Andes en Ciudadela, Provincia de Buenos Aires.

cuando ya pasó el delito”. En su caso, proponiendo, *desde una mirada psicologizante sobre las causas del delito*, una “intervención transversal” que aborde “la psiquis” de las personas que delinquen para modificar su accionar delictivo:

Juan (Trabajador rutinario del sector público/privado de 28 años que reside en CABA): El origen, estamos todos de acuerdo, es falta de trabajo, falta de educación, falta de un montón de cosas. Pero también nosotros en la justicia llegamos tarde, cuando ya pasó el delito, la reinserción es como super importante. Entender que hay una psiquis detrás de la persona que delinque que hay que abordarla de una manera transversal para que entienda que es la salida fácil y que es una estupidez pensar que por entrar a la casa de una persona que es de clase media va a saltar de acá a acá (Grupo focal N° 2, Trabajadoras/es rutinaria/es del sector público y privado, mayo de 2022).

De esta manera, este grupo presenta un debate anclado en una mirada desde las experiencias personales concretas, a partir de las cuales se establecen contrapuntos sobre cómo problematizar la cuestión, acerca de las figuras de víctimas y victimarios, la policía, las vivencias vinculadas al temor al delito y posibles soluciones a instrumentar. De la crítica a la violencia policial desde cierta lejanía al miedo al delito a el lugar de las “villas” en las experiencias personales de victimización.

## Conclusiones

A lo largo de todo el escrito se han presentado distintos emergentes observados en el marco de nuestro trabajo de campo, los cuales dan cuenta de la convergencia de diversos modos de problematización y articulación respecto de las nociones de inseguridad, violencias y cuestión social, durante el periodo que denominamos “pospandémico” (2022-2023). De esta forma, en cada grupo socioocupacional se hicieron presentes múltiples formas de concebir e interrelacionar dichas nociones, a partir de las cuales hemos podido identificar tanto elementos transversales como elaboraciones distintivas, aunque primando la heterogeneidad al interior de los grupos. Entendemos a las discusiones sociales sobre la inseguridad y lo social como parte de la producción social de las condiciones de vida, las formas de sociabilidad y las modalidades de construcción de la autoridad política. En este sentido, pensamos que en este trabajo presentamos algunas imágenes sobre la producción de lo común en el escenario pospandémico.

Uno de los aspectos más destacados de estas discusiones es la mirada crítica que se proyecta sobre las prácticas de policiamiento y la violencia institucional. En un contexto de confinamiento o restricción a la circulación en los espacios públicos, cobra relevancia el debate en torno a la potestad de la autoridad política y de las agencias estatales para regular las libertades individuales y controlar los intercambios sociales.

Este debate se manifiesta en una variedad de expresiones, que van desde el cuestionamiento libertario o de la nueva derecha a las medidas de confinamiento sanitario y de restricción de ciertas actividades sociales, hasta los reclamos de organizaciones sociales y comunitarias por la intensificación de la violencia institucional en los barrios populares.

Las narrativas y discursos emergentes durante nuestro trabajo de campo revelan una dinámica en la que se evidencia una brecha entre las explicaciones basadas en experiencias personales y aquellas de índole más "política", caracterizadas por su mayor contenido conceptual y un diagnóstico más elaborado. Este fenómeno se observó de manera destacada en dos categorías ocupacionales específicas: Trabajadoras/es Obreras/os y Trabajadoras/es Rutinarias/os, donde predominaron las narrativas fundadas en experiencias individuales; y en Profesionales Independientes y Trabajadoras/es de la Economía Popular, donde las explicaciones adoptaron un enfoque más conceptual y político. Es importante señalar que esta división no puede interpretarse como una dicotomía rígida, sino más bien como una tendencia observable en los relatos y discursos de los distintos grupos ocupacionales. Sin embargo, nos brinda una oportunidad inicial para comprender los registros y modalidades de problematización presentes en estos sectores durante el periodo pospandémico, el cual estuvo caracterizado por la predominancia de incertidumbres sobre certezas.

Para trazar las líneas transversales, podemos decir que en primer lugar es posible identificar una tensión entre una construcción complejizante, elaborada y con cierto nivel de abstracción en su argumentación, en un registro eminentemente político, que inscribe la cuestión del delito en el marco de una reflexión sobre la descomposición o la "anomia"; y otra que, está organizada a partir de las postales más concretas que se extraen de las experiencias cotidianas vinculadas a la inseguridad, a partir del diagnóstico del aumento de la violencia y con la mirada puesta en las prácticas de policiamiento.

Otra de las saliencias tiene que ver con producciones sobre la inseguridad que divergen entre las formas hegemónicas de problematizar el vínculo entre inseguridad, policiamiento y cuestión social, a partir del problema de los límites de la legislación penal al accionar policial; las miradas que reactualizan algunas de las formas clásicas de la explicación welfarista en la que la desigualdad, el trabajo y la educación toman el centro del escenario; y al mismo tiempo, emergen complejizaciones de esta mirada social, en las que otros factores, como la corrupción policial, judicial o política, son introducidos al análisis.

Por otra parte, entendemos como un elemento para destacar que, si bien algunas de estas líneas predominan más en algunos grupos sociales que en otros, una de las claves que caracterizan nuestras discusiones sobre la inseguridad, la violencia y el delito y lo social es la heterogeneidad al interior de los grupos sociales, en donde es posible encontrar estos posicionamientos transversalmente, aunque no con una intensidad monótona, sino con predominancias diferenciales.

Miramos a las problematizaciones en torno a la inseguridad y la violencia como formas de sociabilidad y representación de los lazos que organizan nuestra sociedad. Las imágenes que reconstruimos en estas páginas muestran los modos de producción sobre las formas de estar juntos, los vínculos, las instituciones, la representación de los otros, los espacios urbanos, las formas de interpelación al Estado y en última instancia la cuestión de la autoridad política. En este sentido, la elaboración de lo común que nos muestran estas discusiones parece caracterizarse por un espacio fragmentado aunque no de dispersión, con algunas saliencias que ordenan la diversidad.

## Referencias

AYOS, Emilio y FIUZA, Pilar. (Re)definiendo la cuestión securitaria: tensiones y aperturas en las problematizaciones en torno a una «seguridad democrática» en el período 2000-2015. En *Delito y Sociedad*, 45, (27), pp. 57-87, 2018.

AYOS, Emilio y JACK, Tatiana. El control del delito, el control de la política social: Inseguridad, políticas y trabajo en la Argentina de la reconstrucción neoliberal. En Aguilar, Paula y Minteguiag, Analía (Eds.) *La disputa por el bienestar en América latina en tiempos de asedio neoliberal*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2020.

AYOS, Emilio y JACK, Tatiana. La inseguridad desde abajo: postales sobre el “descontrol”. Elaboraciones sobre el miedo al delito en diferentes grupos del espacio social. En Grassi, Estela y Hintze, Susana (Coord.): *Tramas de la desigualdad. Las políticas y el bienestar en disputa*. 1°ed. Buenos Aires: Editorial Prometeo, 2018.

AYOS, Emilio y JACK, Tatiana. Reorientaciones en las políticas asistenciales hacia a jóvenes y la cuestión del delito. Política social, trabajo e inseguridad en Argentina. En *Revista Postdata*, 25, (2), pp. 519-553, 2020.

AYOS, Emilio. ¿Una política democrática de seguridad? Prevención del delito, políticas sociales y disputas en el campo conformado en torno a la inseguridad en la Argentina de la última década. En *Reforma y Democracia*, 58. Caracas: Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, 2014

AYOS, Emilio. Responsabilidad, trabajo y condiciones de vida. Problematizaciones sobre los jóvenes en los programas de prevención social del delito en Argentina. *Revista: Espiral. Estudios de Estado y Sociedad*, 68, 2016.

AYOS, Emilio; DALLORSO, Nicolas; RANGUGNI, Victoria y RECEPTER, Celina. La Argentina neoliberal: naturalización de la fragmentación social y exacerbación punitiva. En Sozzo, M. (Comp.), *Delito y Sociedad: Por una sociología crítica del control social. Ensayos en honor de Juan S. Pegoraro*. Buenos Aires: Editores Puerto, 2010

BARATTA, Alessandro. Política Criminal: entre la política de seguridad y la política social. En Carranza, Elias (coord.): *Delito y seguridad de los habitantes*. México: Siglo XXI editors, 1997.

BERNI, Sergio. *Policías de Prevención Barrial: una respuesta para la inclusión social y la seguridad ciudadana*. CABA: Ministerio de Seguridad de la Nación, 2015

CALZADO, Mercedes. Discursos sociales y prácticas punitivas. Las construcciones significantes de la opinión pública en las asambleas del Plan de Prevención del Delito. En *Revista Delito y Sociedad*, N° 20. Santa Fe: Ediciones UNL, 2004.

CANELO, Paula. *¿Cambiamos? La batalla cultural por el sentido común de los argentinos*. Buenos Aires: Editorial Siglo XXI, 2019.

CANTAMUTTO, Francisco y SCHORR, Martín. El gobierno de Alberto Fernández: balance del primer año de gestión. Una mirada desde la economía política. *el@tina*. *Revista electrónica de estudios latinoamericanos*, 20(78), 66-90, 2022.

CELS (Centro de estudios legales y sociales). *Derechos Humanos en la Argentina. Informe 2016*. Editorial: CELS - Siglo XXI. Colección: Informes anuales, 2016.

COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA. Tasas de encarcelamiento. Datos abiertos violencia estatal en la provincia. 2023. Ver en: <https://www.comisionporlamemoria.org/datosabiertos/politica-criminal/tasas-de->



Guemureman, Silvia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de delincuencia juvenil en la argentina del siglo XXI? El problema de la medición; vulnerabilidad de los jóvenes y fantasmas mediáticos. En Saintout, Florencia (comp.), *Jóvenes Argentinos: Pensar lo político*. Buenos Aires: Editorial Prometeo, 2011.

GUEMUREMAN, Silvia. La contracara de la violencia adolescente-juvenil: la violencia pública institucional de la agencia de control social judicial. En Gayol, Sandra y Kessler, Gabriel (comps.), *Violencias, justicias y delitos en la Argentina* (pp. 169-189). Buenos Aires: Ediciones Manantial y Universidad Nacional de General Sarmiento, 2002.

GUEMUREMAN, Silvia. y DAROQUI, Alcira. *La niñez ajusticiada*. Buenos Aires: Editores Del Puerto, 2001.

GUEMUREMAN, Silvia. y ZAJAC, Joaquin. Reconfiguración del gobierno de la niñez y adolescencia en riesgo en la Ciudad de Buenos Aires: Un recorrido por los cambios recientes en el funcionamiento de la cadena punitiva 2011-2019. En Revista Cuestión Urbana. Año 4, N° 7. Centro de Estudios de Ciudad. Facultad de Ciencias Sociales (UBA). 2020.

INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). Encuesta Nacional de Victimización 2017. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), 2018.

JACK, Tatiana. La juventud como amenaza a la seguridad, la juventud como referente del cambio: el Programa Servicio Cívico Voluntario en Valores en la Argentina de la recomposición neoliberal. Revista Perspectivas de Políticas Públicas Lanús, 11 (22), 301-335, 2022.

LÓPEZ, Ana Laura, ANDERSEN, Jimena, PASIN, Julia, Suarez, Agustina, BOUILLY, Maria del Rosario. Estrategias de gobierno del territorio urbano: hostigamiento y brutalidad policial sobre los jóvenes en la provincia de Buenos Aires” (trabajo presentado en la mesa de trabajo sobre “Sistema Penal y DDHH” de las IX Jornadas de Sociología). Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 2011.

MAXWELL, Joseph Alex. *Qualitative research design. An interactive approach*. Washington: Sage publications, 1996.

MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN. Resolución N° 413/2022. 2022.



MINISTERIO PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Registro Único de Personas Detenidas. Informe Estadístico Año 2019. N° de serie 008. Prov. de Buenos Aires: Procuración General de la SCBA, 2019.

OPSA (Observatorio de Psicología Social Aplicada). Monitor de inseguridad. N° 8. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, 2023.

PEGORARO, Juan. Teoría sociológica y delito organizado: el eslabón perdido. Encrucijadas UBA. Revista de la Universidad de Buenos Aires, (19), 38-55, 2002.

PEGORARO, Juan. Una reflexión sobre la inseguridad. En Revista Argumentos Nro. 2, Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 2003.

PERELMAN, Marcela. Y TUFRÓ, Manuel. *Violencia institucional. Tensiones actuales de una categoría política central*. Buenos Aires: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 2017.

PLAZA, Valeria, MORALES, Susana y BROCCA, Magdalena. La política de seguridad de Cambiemos: continuidades, rupturas y la legitimación política de la violencia policial. En Nazareno, Marcelo, Segura, Maria, y Vázquez Guillermo (Edits.). *Pasaron cosas*. Córdoba: Editorial Brujas, 2019.

RANGUGNI, Victoria. Prácticas policiales y gobierno de la (in)seguridad en argentina. Apuntes para pensar el uso de la fuerza letal como técnica de regulación biopolítica. En Galvani, M. et al, *A la inseguridad la hacemos entre todos. Prácticas académicas, mediáticas y policiales*. Buenos Aires: Hekht Editores, 2010.

RODRÍGUEZ ALZUETA, Esteban. *Temor y Control. La gestión de la inseguridad como forma de gobierno*. 1° Edición. Buenos Aires: Ediciones Futuro Anterior, 2014.

SAMTER, Natalia. El Método de Comparaciones Constantes. En Paola, Jorge, Danel, Paula, y Manes, Romina (Comp.) *Reflexiones en torno al Trabajo Social en el campo gerontológico. Tránsito, miradas e interrogantes*. Segundas Jornadas de Trabajo Social en el Campo Gerontológico. Buenos Aires, Carrera de Trabajo Social (FSC-UBA), 2012.

SNEEP (Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Penal). Informe Anual República Argentina. Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2005.

SNEEP (Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Penal). Informe Anual República Argentina. Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2014.

SNEEP (Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Penal). Informe Anual República Argentina. Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2019.

SNEEP (Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Penal). Informe Anual República Argentina. Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2022.

SONEIRA, Abelardo Jorge. La teoría fundada en los datos. Grounded Theory de Glaser y Strauss. En IV Jornadas de etnografía y métodos cualitativos. Buenos Aires: IDES, 2004.

SOZZO, Máximo. ¿Metamorfosis de la prisión? Proyecto normalizador, populismo punitivo y “prisión-depósito” en Argentina. URVIO. Revista Latinoamericana De Estudios De Seguridad, 1(1), 88–116, 2007.

SOZZO, Máximo. Park, Shaw y McKay y la mirada sociológica sobre el delito en la Escuela de Chicago. Revista Delito y Sociedad, (25). Santa Fe: Ediciones UML, 2008.

SOZZO, Máximo. Postneoliberalismo y política penal en Argentina. En Sozzo, M. (Comp.), *Postneoliberalismo y penalidad en América del Sur*, pp. 9-28. Buenos Aires: CLACSO, 2016

SOZZO, Máximo. Seguridad Urbana y Técnicas de Prevención del Delito. En Sozzo, Máximo, *Inseguridad, prevención y policía*. Ecuador, Quito: Flacso, 2008.

STRAUSS, Anselm. Y CORBIN, Juliet. *Bases de Investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Colombia: Editorial Universidad de Antioquia, 2002.

VILKER, Shila. No hay solución. Un estudio de recepción de noticias sobre juventud y delito del repertorio cultural de la víctima al nihilismo propositivo. En Gutiérrez, Mariano (comp.) *Populismo punitivo y justicia expresiva*. Buenos Aires: Fabián J. Di Plácido Editor, 2011.

ZAJAC, Joaquin. Presencia de Gendarmería Nacional Argentina y sus efectos para las y los jóvenes de barrios informales de Buenos Aires. En Revista Nuestra América, 8, (15), pp. 161-190, 2020.

**Resumo:** Neste artigo, é realizada uma reconstrução das formas de problematização, articulações e tensões que ocorrem em torno da noção de insegurança, violências e questão social, a partir da análise das discussões e posicionamentos de trabalhadores de diferentes grupos socioocupacionais no período entre os anos de 2022 e 2023 na Argentina. Por meio da realização de grupos focais compostos por trabalhadores pertencentes a diversos setores do mundo do trabalho, identificamos que emerge como tópico de discussão pública a autoridade política e a capacidade das agências estatais de regulamentar as liberdades individuais e controlar as trocas sociais. Isso pode ser observado em uma variedade de expressões, que vão desde o questionamento libertário ou da nova direita às medidas de confinamento sanitário e restrição de certas atividades sociais e circulação em espaços públicos, até as demandas de organizações sociais e comunitárias pela intensificação da violência institucional em bairros populares, particularmente contra jovens. Sob uma perspectiva metodológica qualitativa, este trabalho apresenta o estado do debate "pós-pandêmico" no qual ocorre a discussão sobre as formas de articulação entre segurança, violências e questão social em nossos grupos focais.

**Palavras-chave:** Segurança, questão social, debates sociais, grupos socioocupacionais, pós-pandemia.

**Resumen:** En este artículo se realiza una reconstrucción de las formas de problematización, las articulaciones y tensiones que se producen en torno a la noción de inseguridad, las violencias y la cuestión social, a partir del análisis de las discusiones y los posicionamientos de trabajadoras y trabajadores de distintos grupos socio-ocupacionales en el período comprendido entre los años 2022-2023 en Argentina. A partir de la realización de grupos focales conformados por trabajadores pertenecientes a diversos sectores del mundo del trabajo, identificamos que emerge como tópico de discusión pública la potestad de la autoridad política y de las agencias estatales de regulación de las libertades individuales y su capacidad de control de los intercambios sociales. Esto puede observarse en un conjunto diverso de expresiones, que van desde el cuestionamiento libertario o de la nueva derecha a las medidas de confinamiento sanitario y de restricción de ciertas actividades sociales y a la circulación en los espacios públicos, hasta los reclamos de organizaciones sociales y comunitarias por la intensificación de la violencia institucional en los barrios populares, particularmente hacia jóvenes. Desde una perspectiva metodológica cualitativa, este trabajo muestra el estado del debate "pospandémico" en el que se produce la discusión sobre las formas de articulación entre seguridad, violencias y cuestión social en nuestros grupos focales.

**Palabras claves:** Seguridad, cuestión social, debates sociales, grupos socio-ocupacionales, pospandemia.

**Abstract:** This article offers an examination of the ways in which issues of insecurity, violence, and social concerns are problematized, articulated, and debated within the Argentine context during the period of 2022-2023. Through an analysis of discussions and perspectives among workers from diverse socio-occupational backgrounds, it investigates the emergence of public discourse surrounding the role of political authority and state agencies in regulating individual freedoms and controlling social interactions. This discourse encompasses various viewpoints,

ranging from libertarian critiques or those of the new right regarding sanitary confinement measures and restrictions on social activities and public mobility, to the demands of social and community organizations for heightened attention to institutional violence in marginalized neighborhoods, particularly affecting youth. Employing a qualitative methodological approach, this study examines the state of post-pandemic debates regarding the interplay between security, violence, and social issues within our focus groups.

**Keywords:** Security, social issues, social debates, socio-occupational groups, post-pandemic

## SUPERPOPULAÇÃO RELATIVA – A ARGENTINA NO CONTEXTO GLOBAL NO INÍCIO DO SÉCULO XXI

Ricardo Donaire\*

### Introdução

Se há uma característica que se tornou típica da Argentina nas últimas décadas, é a consolidação de uma massa de pessoas que pode ser caracterizada como “uma população trabalhadora adicional relativamente excedente, isto é, excessiva para as necessidades médias de valorização do capital e, portanto, supérflua (MARX, 2013, p. 857). Talvez ainda mais notável é a presença que ela alcançou na organização e no protesto social.

Desde a década de 1990, essa população começou a formar suas próprias organizações que, com variações, persistem até hoje. Têm sofrido mudanças na composição e no tamanho, mas houve uma tendência de evoluir para expressões cada vez mais institucionalizadas de seus interesses coletivos, que, nesse sentido, funcionam como “sindicatos” das camadas mais pobres do proletariado<sup>1</sup>. Embora não diminua a centralidade dos trabalhadores empregados nos protestos sociais, essas camadas desempenharam um papel significativo em vários eventos. Às vezes, elas até conseguiram se coordenar de forma mais ampla com outras camadas e frações do proletariado, como nas *Jornadas Piqueteras* de 2001, ou convocando mobilizações conjuntas ou com o apoio das diferentes confederações sindicais, como nas manifestações para a aprovação de um projeto de lei de emergência social e por trabalho em 2016 e 2017 (COTARELO 2016: IÑIGO CARRERA, FERNÁNDEZ e CANGUSSU DE SOUZA 2022: IÑIGO CARRERA, FERNÁNDEZ e COTARELO 2020).

Essa presença dos supranumerários nas relações políticas, juntamente a sua notável persistência, parece ser uma característica do país. A própria existência de uma população excedente relativa, que tem atingido uma extensão mundial, não é (DAVIS, 2006; WACQUANT, 2007; COLLINS, 2015). De fato, sua natureza global levou a várias

---

\* Graduado em Sociologia. Doutor em Ciências Sociais, Universidad de Buenos Aires. Pesquisador associado no Consejo Nacional de Investigaciones Científicas e Técnicas e no Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina.

<sup>1</sup> Atualmente, a maioria está organizada em duas tendências principais: a *Unión de Trabajadores de la Economía Popular* e a *Unidad Piquetera*. De acordo com fontes jornalísticas, seus membros combinados são estimados em 650.000 (Infobae, 2019, La Nación, 2022).

tentativas de medição (BENANAV, 2015; FOSTER, MCCHESENEY e JONNA, 2011; NIELSON e STUBBS, 2011).

Isso levanta a questão de saber se há características distintivas da população excedente na Argentina, especialmente em comparação com o resto do mundo na esfera das relações objetivas. Este artigo oferece uma abordagem inicial.

Em primeiro lugar, apresentamos suas principais formas de expressão no país e uma estimativa provisória, a fim de nos concentrarmos no que parece ser sua principal manifestação, o “pauperismo oficial”. Em seguida, e com base em uma revisão crítica das medições internacionais, mostramos as nossas próprias medições, especialmente preocupadas com o peso de suas diferentes formas constantes (flutuante, latente e estagnada, seguindo a conceituação clássica). Por fim, ao comparar o volume e a composição da população excedente entre a Argentina e o resto do mundo, introduzimos novos elementos para formular algumas hipóteses sobre as semelhanças e diferenças, especialmente na forma de regulação desta população<sup>2</sup>.

### **Superpopulação relativa na Argentina**

Nos círculos acadêmicos e políticos, a primeira maneira pela qual o problema do excedente populacional relativo é apresentado é em sua manifestação mais aparente: o desemprego.

Desde a década de 1960, a taxa de desemprego tem registrado oscilações de longo prazo. Na década de 1990, ela se acelerou, atingindo picos de 8,6%, 18,4% e, finalmente, 21,5% em 1990, 1995 e 2002. O contraste particular entre esse aumento crescente e seu declínio subsequente após 2002 (acentuado até 2007, depois mais estagnado, mas, ainda assim, em declínio até 2015 e, desde então, com outros picos menores), levou os números do ano passado a serem oficialmente comemorados como “pleno emprego” (TELAM, 2023). O entusiasmo durou pouco, e a nova cifra posterior foi de 7,7%.

Contudo, uma mudança é digna de nota nesse mais de meio século de oscilações: enquanto a partir de meados dos anos 70 a taxa raramente ultrapassava 6%, no final dos anos 80 ela excedeu esse limite e, conforme mencionado, atingiu picos sucessivos até 2002. O declínio subsequente só excepcionalmente conseguiu ficar abaixo da marca de

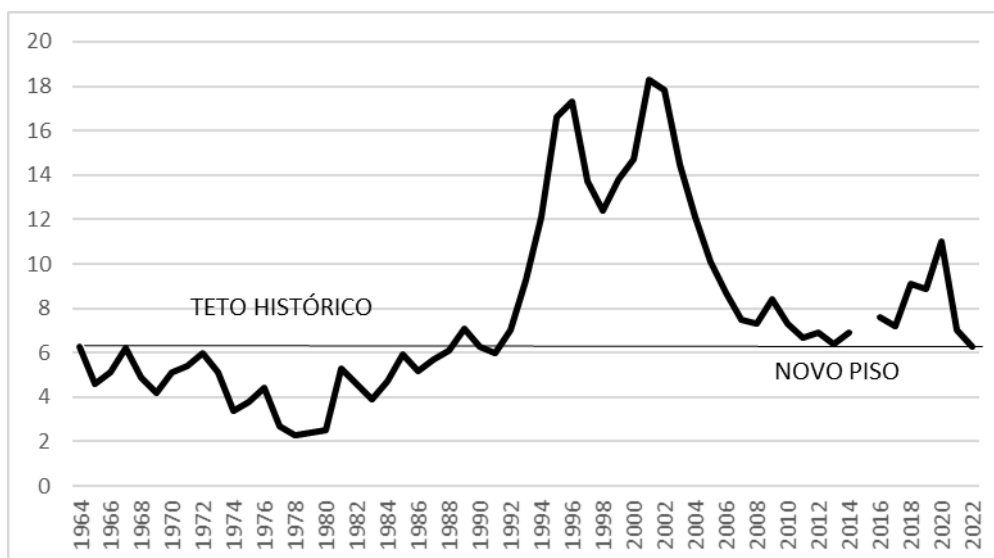
---

<sup>2</sup> Foi necessário acrescentar alguns dados sobre modificações que estão ocorrendo na Argentina enquanto estas linhas são escritas, principalmente com base em material jornalístico e no levantamento de notícias da própria equipe de pesquisa do PIMSA.

6%. Em essência, o que serviu de teto por mais de vinte anos tornou-se, desde então e nos últimos trinta anos, um novo piso.

Essas diferentes margens de oscilação indicam uma mudança qualitativa no desenvolvimento capitalista da Argentina, conforme caracterizado inicialmente por Iñigo Carrera e Podestá (1997). Em termos simples, independentemente das políticas econômicas adotadas, o retorno aos níveis de desemprego considerados normais há meio século tem se mostrado inatingível por mais de trinta anos. É por isso que o desemprego se tornou um problema persistente. As políticas estatais aceleraram ou desaceleraram esse processo, mas sem conseguir revertê-lo.

**Gráfico 1. Taxa de desemprego urbano. Argentina, 1964-2022**



Fonte: Elaboração própria com base na Encuesta Permanente de Hogares, INDEC, última medição de cada ano.

Tendências semelhantes são evidentes nos demais indicadores do mercado de trabalho: emprego não registrado, subemprego e pobreza. Não nos estenderemos sobre eles aqui, basta dizer que em termos gerais, o movimento do desemprego está intimamente relacionado ao dos esses outros indicadores, que, exceto em casos específicos, parece sintetizar: um momento agudo na década de 1990, que durou até a crise de 2001/02, é seguido por outro, em que o subemprego, o trabalho não registrado e a pobreza se tornam crônicos e acima dos níveis existentes no período anterior.

Queremos nos concentrar no que parece ser talvez a manifestação mais crua desse fenômeno, reflita no número crescente de indivíduos obrigados a depender de subsídios públicos para sobreviver. Sem uma medição oficial sistemática e afetado por

modificações frequentes na estrutura e na cobertura dos programas de assistência, o rastreamento preciso da evolução dessa população revela-se complexo. Independentemente disso, um exame de suas mudanças indica uma mudança do foco nos “desempregados” para outros grupos. Sem a pretensão de sermos exaustivos, tentamos resumir algumas características dos principais programas (MTSS 2021: GAMALLO 2017; BANTAR, BROWN e NEFFA 2015; SCHIPANI, ZARAZAGA e FORLINO 2022).

Há consenso em considerar o *Jefes y Jefas de Hogar Desocupados*, implementado em 2002, como o primeiro programa nacional de grande escala que oferece assistência monetária mensal direta às famílias. Destinado a população em idade ativa que chefia famílias com filhos menores de 18 anos, bem como a pessoas com deficiência e mulheres grávidas, o programa ampliou as experiências anteriores mais limitadas de compensação trabalhista e educacional em troca do subsídio. Essa iniciativa atingiu mais de dois milhões de pessoas.

No entanto, desde 2004, formatos alternativos e complementares foram introduzidos para apoiar a subsistência de vários membros da família pobre da classe trabalhadora. Para crianças e adolescentes, foi implementado um auxílio universal para crianças (*Asignación Universal por Hijo*), juntamente a um programa de ajuda estudantil para incentivar a continuidade do ensino para jovens (*Progresar*). Além disso, uma série de moratórias previdenciárias foi desenvolvida para os idosos (por meio da regularização de dívidas e da aposentadoria antecipada), e as previdências sociais foram estendidas à população com deficiência. Além disso, várias dessas situações podiam ser complementadas com uma renda extra para cobrir as necessidades básicas de consumo (*Alimentar*).

O acesso aos principais subsídios normalmente exige, sob diferentes formulações, que os possíveis beneficiários sejam membros de famílias em que seus principais provedores estejam desempregados, envolvidos em empregos informais ou descontínuos, com renda baixa ou insuficiente, em situação de pobreza ou, em termos gerais, considerados “vulneráveis”.

Para mostrar sua escala, estima-se que o auxílio universal para crianças cobriu 33,4% da população de até 17 anos em 2021 (SIEMPRO, 2021a). Em 2019, o programa de apoio ao estudante atingiu aproximadamente 73,5% da população estudantil entre 18 e 24 anos nos níveis de ensino obrigatórios (SIEMPRO, 2021b). Em 2022, 49,2% das aposentadorias e pensões por morte haviam sido concedidas por meio de moratória, em



uma sociedade em que a cobertura de idosos ultrapassa 90% (MTSS, 2022). Em 2018, pelo menos 17,5% da população de 6 anos ou mais com deficiência recebia esse tipo de pensão (INDEC, 2018). A lista de programas é incompleta e, portanto, o escopo dos subsídios é maior. Os mencionados aqui estão entre os mais massivos de transferências monetárias diretas, atingindo mais de meio milhão de pessoas cada um deles.

A implementação de diversos subsídios para crianças, jovens, idosos e pessoas com deficiência em famílias pobres da classe trabalhadora aliviou a pressão sobre os subsídios específicos para a população em idade ativa, cujos programas passaram por várias mudanças ao longo do tempo. O plano original *Jefes y Jefas de Hogar Desocupados* evoluiu em 2020, após vários formatos, para o *Potenciar Trabajo*, relacionado à possibilidade de receber um “salário complementar social”.

Essas mudanças estão deslocando o foco da figura do desempregado, particularmente o considerado “empregável”, para a do trabalhador “vulnerável” na chamada “economia popular”, reconhecida em um registro público. Em 2022, aproximadamente 1,2 milhão dessas pessoas estavam recebendo uma ajuda ou um “salário social complementar”.

Esse número parece consideravelmente menor quando comparado ao número de indivíduos desempregados subsidiados vinte anos antes. Isso se deve, em parte, ao apoio dos programas mencionados acima desenvolvidos para sustentar aos outros membros da família de trabalhadores pobres. Além disso, o Estado reconhece que apenas uma parte dos trabalhadores “vulneráveis” recebe o salário social complementar, enquanto o número real de pessoas no registro oficial de trabalhadores da economia popular era de 3,2 milhões. Para entender a magnitude desse número, a fonte oficial o compara com os 5,8 milhões de assalariados privados registrados no país. Quem compõe essa população? Suas principais ocupações dão uma ideia da posição em que a acumulação capitalista os deixa: catadores de papelão e de materiais recicláveis, camelôs, pedreiros e ajudantes de construção: indivíduos com fontes irregulares de trabalho que se dedicam a trabalhos ocasionais e bicos. Há também trabalhadores em cozinhas populares, organizados como grupos comunitários, que ajudam a alimentar e sustentar a própria população empobrecida (RENATEP, 2022).

Mais recentemente, no início deste ano, o novo governo que assumiu o cargo no final de 2023 dividiu o programa *Potenciar Trabajo* em dois: *Volver al Trabajo*, para o qual um pouco mais de um milhão de beneficiários foram encaminhados com o objetivo de desenvolver sua “empregabilidade”, e *Acompañamiento Social*, destinado à população

em famílias vulneráveis para promover sua inclusão social, onde foram outros 260 mil (Res. 84/24 MCH). Essa é uma nova confissão de que parte da população não é “empregável” nos termos capitalistas, mas agora acompanhada de uma política de maiores restrições ao acesso a subsídios públicos no contexto de um novo aumento na taxa de desemprego e pobreza (JUEGUEN, 2024). Nesse contexto, as limitações no escopo da assistência social não indicam uma diminuição da superpopulação relativa, mas uma piora em suas condições de vida<sup>3</sup>.

Assim, parece inegável que uma parcela da população se consolidou com essas características: expropriada de suas condições de existência e impossibilitada de obter regularmente seu sustento a partir da venda parcial ou total de sua força de trabalho, ou seja, uma população trabalhadora excedente relativa. Seu tamanho é elusivo devido à sua diversificação em diferentes medições nos indicadores estatísticos, projetados principalmente para caracterizar os fenômenos do mercado de trabalho e não o movimento da estrutura social. Essa complexidade cria dificuldades para a reconstrução de um número exato, o que supõe considerar não apenas o desemprego, mas também outras características como trabalho não registrado, subemprego, emprego irregular, etc.

Considerando-os, uma medição para 2017 nas áreas urbanas da Argentina, com base na pesquisa oficial do mercado de trabalho (Encuesta Permanente de Hogares) revelou que, embora com o desemprego abaixo de 10% e a pobreza em 25%, a mais baixa da última década, cerca de 40% da população em idade ativa poderia ser considerada excedente para o capital (DONAIRE e ROSATI, 2023). No entanto, essa é uma estimativa conservadora, pois há outros 14%, difíceis de classificar, que incluem uma parte de “trabalhadores por conta própria”. Essa categoria, que historicamente abrigava pequenos produtores e proprietários, agora inclui cada vez mais uma população apresentada como supostamente independente nas estatísticas, apenas devido à sua incapacidade de obter seus meios de vida de forma regular (DONAIRE, 2007). Ela engloba uma parte dos “trabalhadores da economia popular”, cuja independência pretensa os obriga a tentar obter um subsídio do Estado para sua subsistência.

---

<sup>3</sup> A isso se soma a restrição da ajuda por meio de outros canais, como, por exemplo, os alimentos distribuídos aos refeitórios sociais, os quais denunciam a retenção de 5.000 toneladas de alimentos (elDiarioAR, 2024) e o projeto, por enquanto abortado, de anular a moratória previdenciária mencionada anteriormente (Gimenez, 2024). Essas modificações levantam a questão de saber se o que está sendo desenvolvido implica uma mudança qualitativa na regulamentação do pauperismo oficial ou uma mudança quantitativa na piora de suas condições de subsistência.

Em resumo, apesar dos problemas de medição, é possível afirmar que existe uma superpopulação relativa para o capital extensa e consolidada. Sobre esse território social, essa população desenvolve suas lutas e organizações como parte do proletariado argentino. Mas será que a existência desse excedente é uma característica típica apenas da sociedade argentina?

### **Uma comparação com o resto do mundo**

A superpopulação relativa resulta da interação dinâmica de atração e repulsão em relação à produção na sociedade capitalista, sendo que a repulsão tende a predominar e a moldar esse fenômeno. A relação entre esses movimentos é complexa e não linear, o que faz com que ele se manifeste em formas periódicas, agudas ou crônicas, dependendo dos ciclos econômicos: durante períodos de atividade moderada e prosperidade, parte do exército de reserva é absorvido, enquanto recessões e crises assistem à sua expansão. Mas também gera formas constantes, conhecidas como flutuante, latente e estagnada, que representam articulações distintas entre atração e repulsão: rítmica, descompensada ou intermitente. A forma flutuante, geralmente ligada imediatamente ao movimento rítmico da acumulação capitalista em grandes centros urbanos e industriais, é amplamente conhecida e está ligada ao desemprego aberto. Infelizmente, as outras formas recebem menos atenção, como a latente, resultante do desenvolvimento capitalista nas áreas rurais, especialmente sobre a propriedade camponesa individual ou comunitária, levando ao empobrecimento e à migração periódica para as cidades, e a forma estagnada, aglomerada pelo desenvolvimento capitalista nas áreas urbanas, que suporta as condições mais desfavoráveis dependendo do trabalho irregular para sobreviver (MARX, 2013, p. 870-873).

A teoria sugere que, à medida que as relações capitalistas se tornam dominantes em uma sociedade, é estabelecido um excedente flutuante com suas oscilações características. Nos estágios iniciais, ele coexiste com uma população rural ainda substancial, na qual um excedente latente toma forma. À medida que a dinâmica industrial e urbana se instala, a forma flutuante coexistirá com uma massa urbana estagnada, a qual se tornará, por fim, o componente predominante da superpopulação geral. Portanto, a composição da população excedente varia de acordo com o nível de desenvolvimento das relações capitalistas em cada país e é fundamental considerar esse critério para comparações internacionais.

Para realizar essa abordagem, utilizamos dados sistematizados por organizações internacionais, principalmente da OIT (2018) e da FAO (2022). Além dos desafios teóricos e metodológicos mencionados anteriormente, associados à abordagem de um fenômeno de estrutura social por meio de indicadores do mercado de trabalho, há restrições técnicas na disponibilidade da informação. Isso restringe o uso de indicadores àqueles que não se sobrepõem, garantindo uma medição coerente. Com relação aos dados globais, essa reconstrução só foi possível para o ano de 2016. Embora limitada a um ponto específico no tempo, ela fornece uma visão das características desse fenômeno durante um período de crescimento econômico: sua forma crônica. Essa fotografia captura o ciclo econômico global que vai além da crise de 2008/9, com o momento crítico subsequente durante a pandemia de 2020 ainda por acontecer.

Atualmente, a medição está limitada à população ativa, o que torna os dados provisórios. O principal desafio de incorporar a população economicamente inativa à medição está no fato de que, por ser definida como “fora” do mercado de trabalho, as estatísticas oficiais carecem de muitos indicadores para caracterizá-la. Contudo, considerando a estrutura teórica apresentada, é possível que uma parcela significativa da superpopulação relativa esteja registrada como empregada (devido à sua latência no campo e à sua intermitência nas cidades). Portanto, essa apresentação preliminar de dados, embora provisória, permite uma compreensão inicial.

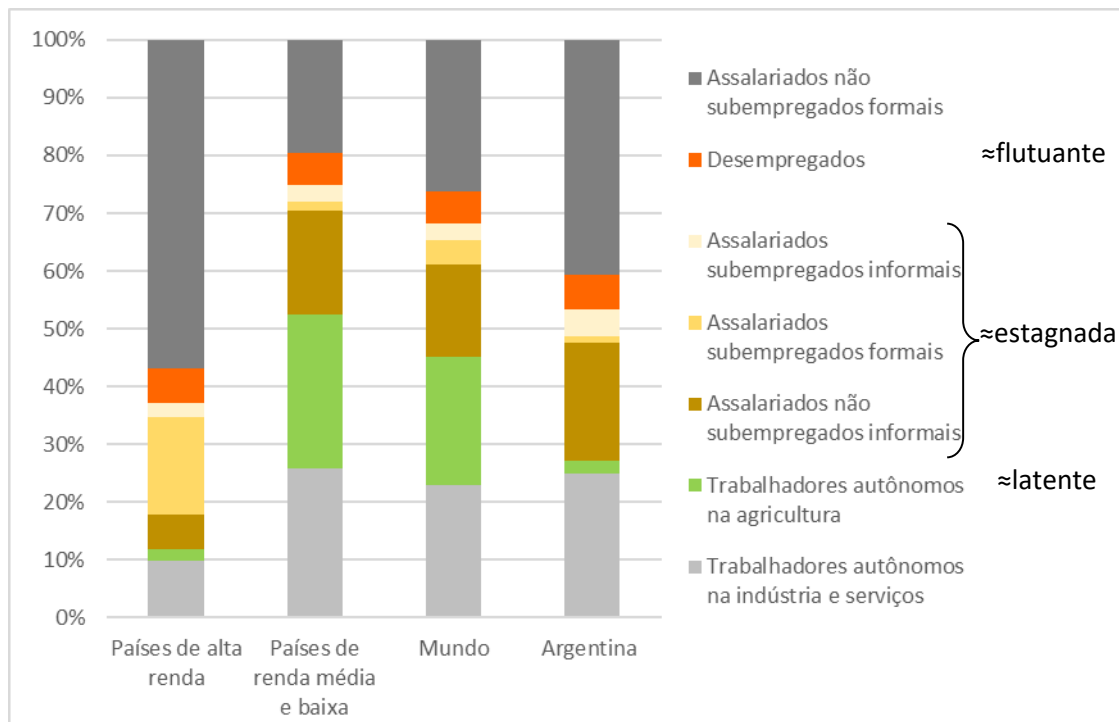
Operacionalmente, usamos a população desempregada como uma aproximação para a forma flutuante. A forma latente é representada por indivíduos por conta própria no ramo agrícola, enquanto a forma estagnada inclui assalariados subempregados ou informais em outros ramos<sup>4</sup>. Conseqüentemente, a população latente pode estar superestimada, pois nem todo pequeno proprietário do campo é imediatamente excedente ao capital. Por outro lado, a modalidade estagnada provavelmente esteja subestimada devido à ausência de outros indicadores disponíveis de trabalho irregular. No entanto, nossa estimativa permanece cautelosa em termos da relação entre a superpopulação relativa e o grau de desenvolvimento capitalista, aderindo à premissa teórica de que o maior desenvolvimento diminui o peso da forma latente e amplia o da forma estagnada.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Para obter mais detalhamento sobre questões metodológicas cf. DONAIRE, 2024.

<sup>5</sup> A estimativa também parece ser cautelosa, especialmente com a potencial incorporação da população economicamente inativa na medição. O envelhecimento da população, mais prevalente em países de alta renda, pode funcionar como um peso morto para os trabalhadores direta ou indiretamente; enquanto que, por outro lado, a população mais jovem em outras regiões pode contribuir para famílias maiores que já não poderiam subsistir sob formas pré-capitalistas de produção no campo.

**Gráfico 2. População ativa por grupos de países (2016) e Argentina (2010) de acordo com categorias selecionadas para abordar a superpopulação relativa.**



Fonte: elaboração própria com base na FAO e na OIT (para o mundo) e no INDEC (para a Argentina).

Embora cautelosa, essa estimativa indica que pouco mais da metade (51%) da população ativa constitui superpopulação relativa.<sup>6</sup> Ao distinguir as características das formas constantes de acordo com os grupos de países, observamos:

- latente: o peso dos trabalhadores por conta própria no setor agrícola é muito maior no resto do mundo do que nos países de alta renda (27% contra 2%). Em outras palavras, a margem para a existência de superpopulação relativa no campo é insignificante nos países capitalistas mais desenvolvidos,

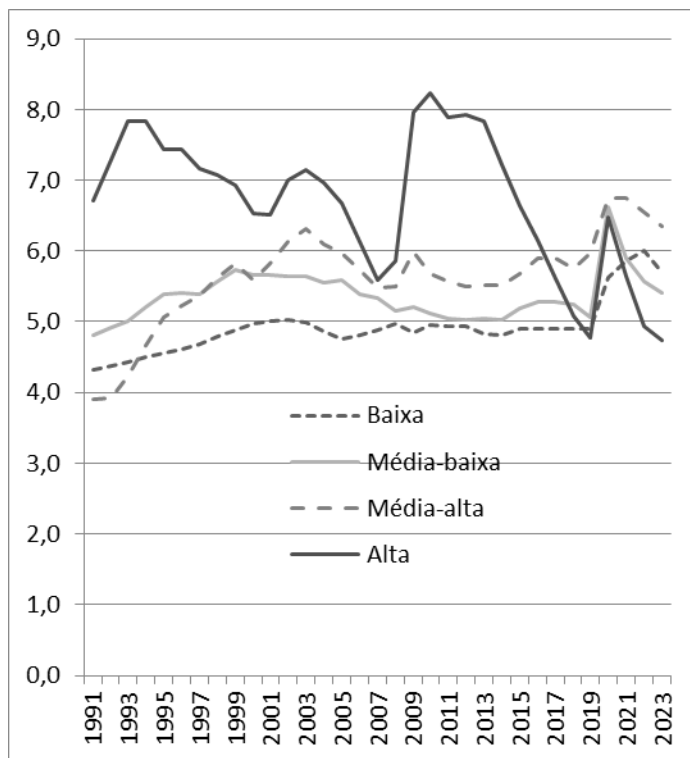
- estagnada: espalha-se em todo o mundo e em proporções semelhantes, mesmo em nossa estimativa limitada (22 e 24%), que não inclui outros grupos, como trabalhadores temporários e eventuais. É possível observar diferenças em sua composição: enquanto nos países de alta renda predomina o subemprego em formatos

<sup>6</sup> Esse resultado conservador também se destaca quando comparado com os números propostos por Foster, McChesney e Jonna (2011) e Nielson e Stubbs (2011) de cerca de 63% e 60%, respectivamente, para os anos de 2008 e 2011. Benanav (2015) propõe um valor mais baixo de 40% para 2010, mas apenas para o que consideraríamos aqui como formas flutuantes e estagnadas.

legais (o chamado “trabalho atípico”, ao qual voltaremos mais adiante), nos demais países o principal elemento é a informalidade urbana,

- flutuante: não há grandes diferenças no peso pontual do desemprego. Entretanto, sua característica é a oscilação. Favoravelmente, temos medições de longo prazo que abrangem pouco mais de três décadas. Desconsiderando a alteração do indicador causada pela situação excepcional da pandemia, é nos países de alta renda que as oscilações são mais abruptas e dentro de um intervalo maior (5-8% aproximadamente), em contraste com os países do resto do mundo, onde o intervalo é menor e as oscilações são mais suaves (entre 4 e 6%).

**Gráfico 3. Taxa de desemprego por grupo de países. 1991-2023.**



Fonte: elaboração própria com base na OIT.

E quanto à Argentina? Para criar uma estimativa comparável, precisamos ajustar os dados apresentados na primeira seção. Principalmente, isso envolve a adaptação de dados centrados na área urbana devido à falta de pesquisas sobre o mercado de trabalho rural. Infelizmente, também precisamos limitar a flexibilidade do processamento de microdados para obter comparabilidade global. Por isso, complementamos as informações da pesquisa domiciliar com dados do censo populacional de 2010. A

proporção resultante agora é reduzida para 34%, ainda significativo, o que, comparado à estimativa de pelo menos 40% da seção anterior, é mais conservador.

Entretanto, alguns elementos característicos já são evidentes na Argentina, aproximando-a dos países capitalistas mais desenvolvidos:

- uma superpopulação flutuante marcada por oscilações significativas em uma faixa alta; já sabemos que o desemprego atingiu um pico de mais de 20% e atualmente está próximo de 7%,

- uma presença relativamente baixa da forma latente, com indivíduos por conta própria agrícolas oscilando em torno de 2%,

- uma proporção substancial da forma estagnada (26%, mas que excede 30% com medições mais precisas). Notavelmente, o componente predominante aqui é o trabalho informal, em contraste com o subemprego formal predominante em países de alta renda.

E um elemento adicional está fora desses números: uma proporção substancial de trabalhadores por conta própria não agrícolas (25%), entre os quais, conforme observado acima, uma massa indeterminável de trabalhadores urbanos ocasionais permanece oculta. Assim, a superpopulação relativa se estende ainda mais a uma parcela estatisticamente indistinguível, misturando-se com pequenos proprietários, mas que buscam ou dependem de várias formas de subsídios estatais para a subsistência. Eles se aproximam do que é classicamente chamado de “pauperismo oficial”, uma população que perdeu a venda de sua força de trabalho como meio de subsistência e precisa contar com a caridade pública para sobreviver (MARX, 2013, p. 886).

### **O problema da regulamentação legal da superpopulação estagnada**

Na seção anterior, consideramos tanto as relações legais quanto as não legais como expressões da superpopulação estagnada. Esta abordagem pode ser inesperada, dada a ênfase nas estatísticas internacionais de trabalho em distinguir o que é rotulado como “informal” do que é rotulado como emprego “atípico”. Entretanto, o que diferencia essa forma da superpopulação é o trabalho irregular, decorrente da natureza intermitente da atração e da repulsão. Assim, ela trabalha e vive nas piores condições, servindo como um imenso reservatório de força de trabalho para várias tarefas improdutivas e até mesmo para a exploração por capitais que não poderiam competir em condições normais - quer essas condições não normais estejam consagradas na estrutura legal como “atípicas” ou funcionem fora do contrato de trabalho como “informais”. No último caso, o fato de o vínculo estar fora da legalidade ou de a produção estar voltada para o próprio sustento

mascara a intermitência, seja porque a contratação fora dos parâmetros normativos garante a irregularidade do emprego ou porque a aparente independência mascara as ocupações de subsistência e os empregos ocasionais. No primeiro caso, a irregularidade está associada a formas legalmente sancionadas de semi-ocupação, como “trabalho sob demanda”, contratos de prazo fixo, casuais ou sazonais, de agência temporária ou de trabalho por conta própria dependente (OIT, 2016). Tanto o trabalho atípico quanto o informal têm sido geralmente vinculados a populações resultantes de processos de repulsão, conceituados a partir de diferentes perspectivas como o “precarizado” (STANDING, 2011; WACQUANT, 2007). A identificação da “precariedade” nos países industrializados mais antigos com a “informalidade” no resto do mundo como expressões do mesmo fenômeno inerente ao capitalismo foi já adiantada criticamente por Munck (2013).

Seja porque trabalham apenas parte do tempo normal semanal, seja porque o fazem em condições que facilitam sua intermitência por um período mais longo (formal ou informalmente), ou ambos, uma parte da jornada desses trabalhadores é potencial e efetivamente ociosa e, portanto, excedente. A falta de uma condição “formal” e “típica” universalmente sancionada para a venda da força de trabalho parece ser, em parte, a raiz das discussões sobre como definir a “informalidade” e as formas “não típicas” de emprego. De qualquer forma, o problema que enfrentamos é porque elas aparecem de uma maneira ou de outra. Aqui apresentamos apenas alguns elementos para aprofundar, no futuro, a construção do problema colocado pelas características da Argentina em comparação com os países capitalistas avançados.

Considerando a presença significativa de assalariados urbanos, a Argentina se destaca como uma sociedade com relações capitalistas estendidas. O peso do proletariado alcançou uma proeminência substancial desde cedo em comparação com outros países latino-americanos. Entretanto, o que encontramos aqui não é apenas um indicativo de um país onde o capitalismo se desenvolveu em extensão, mas também o ônus substancial de uma superpopulação relativa nas áreas urbanas, ressaltando características de desenvolvimento em profundidade.

Embora a dependência da Argentina em relação ao mercado mundial seja evidente, a composição de sua população excedente relativa se alinha mais estreitamente com os países de alta renda. A principal diferença reside no fato de que, enquanto nesses últimos, a superpopulação estagnada muitas vezes aparece consagrada em estruturas legais rotuladas como “trabalho atípico”, na Argentina, ela assume a forma de uma



enorme massa de pauperismo oficial, especialmente sob a aparência de “trabalhadores da economia popular”. Vamos agora explorar em mais detalhes a presença de formas associadas ao emprego “atípico”.

Primeiro, aqui estão como referência alguns números sobre sua prevalência em países de alta renda. Nenhuma medida única capta essa questão complexa, nem existem medidas comparáveis para todas as suas expressões. Entretanto, com base em dois indicadores existentes, por volta de 2016, quando nossa medição global está datada, o emprego a tempo parcial nos países da OCDE atingiu 16,6% e nos países do G7, 17,7%. O emprego temporário era de 12,2% e 8,9%, respectivamente. Muitos países ainda chegavam a ultrapassar 20% em um ou em ambos: Áustria, Alemanha, Nova Zelândia, Japão, Reino Unido, Austrália, Suíça, Países Baixos, Coreia, Portugal, Espanha e Polônia (OCDE, 2023).

Na Argentina, não há dados unificados sobre esses formatos. Abaixo, sistematizamos informações sobre os assalariados privados registrados sob o regime geral (regido pela "lei do contrato de trabalho"). Outros detalhes são fornecidos para funcionários públicos, trabalhadores domésticos e rurais, cada um deles coberto por uma legislação trabalhista específica.

No trabalho assalariado privado não registrado, os dados relevantes referem-se ao emprego de prazo fixo, que oscilou entre 3% e 6% dos trabalhadores de 2001 até recentemente, e ao emprego de agência, que atingiu o pico de 2,5% em 2003 e depois se estabilizou entre 0,5% e 1% na última década. Em 2010, durante nossa estimativa da superpopulação, essas duas formas de emprego constituíram coletivamente 5,9% do total (MTSS 2023a)<sup>7</sup>. Entre 1976 e 2016, diversas reformas trabalhistas impactaram as modalidades de contrato. Apesar disso, em 2016, apenas 7% do emprego registrado no setor privado compreendia contratos de prazo determinado, temporários, sazonais, de estágio ou de aprendizagem (MTSS, 2023b).

No entanto, algumas pessoas podem estar classificadas como trabalhadores por conta própria sob categorias fiscais chamadas *monotributista* (destinada a pequenos contribuintes individuais com obrigações simplificadas e unificadas), ou *monotributista social* (que também inclui isenções para trabalhadores de baixa renda). Isso abrange

---

<sup>7</sup> O emprego a tempo parcial não é uma modalidade contratual na Argentina, mas sim uma regulamentação referente à jornada de trabalho. No entanto, a maioria dos subempregados são trabalhadores não registrados.

aqueles atualmente referidos como "trabalhadores da economia popular."<sup>8</sup> Focados em atividades independentes, pelo menos para fins de tributação, onde pequenos proprietários e assalariados disfarçados parecem frequentemente indistinguíveis, (como é o caso, por exemplo, com os trabalhadores de entrega através de plataformas digitais), ambas as categorias cresceram nos últimos anos. Entre 2012 e 2023, a primeira aumentou de 12% para 15% dos inscritos no sistema de seguridade social, e a segunda de 2% para 5% (MTSS, 2023c).

Formas que poderiam ser consideradas "atípicas" parecem ser mais prevalentes no setor público, embora seu peso careça de uma medida unificada. Em 2019, dentro do quadro civil da administração pública nacional, essas formas atingiram um volume substancial: 32,1% dos funcionários eram classificados como *monotributistas* e 4,4% estavam sob contratos de prazo determinado (BOIERO et al. 2020; FERNÁNDEZ e GONZÁLEZ, 2017)<sup>9</sup>. Não obstante, essa proporção não é imediatamente transferível para o total, uma vez que não inclui forças armadas e de segurança, serviços de saúde e educação, e administração pública provincial e municipal. Por fim, tanto no emprego doméstico quanto no rural, o subemprego e o trabalho temporário ou descontínuo ocorrem majoritariamente de forma não registrada. Esses são dois dos setores com os maiores níveis de informalidade (MTSS, 2014 e 2020).

Em resumo, na Argentina existem vários formatos que poderiam ser englobados sob a noção de "emprego atípico". Diferentemente dos países de alta renda, o volume de trabalhadores afetados parece ser mais restrito. Mesmo onde parecem mais disseminados (como no emprego público, embora não exclusivamente), a principal forma é apresentá-los como prestadores de serviços independentes (*monotributista*): mais como uma maneira de disfarçar uma relação de emprego do que uma forma legalmente modificada. Nesse cenário, o que predomina é a informalidade generalizada. Mesmo uma parte dos trabalhadores empregados por empresas que operam em condições formais é contratada "informalmente": cerca de 31% em 2011 (MTSS, 2013).

Tentativas recentes de promover modalidades "atípicas" começaram em 2017. Com o argumento de reduzir a informalidade no trabalho e criar novos empregos, o

---

<sup>8</sup> Notavelmente, em 2022, apenas 7,2% dos "trabalhadores da economia popular" foram registrados sob essas categorias combinadas (RENATEP, 2022).

<sup>9</sup> O impacto do recente processo de demissões na administração pública nacional caiu sobre essa porção de trabalhadores, reduzindo-se em cerca de 18 mil pessoas entre dezembro de 2023 e maio de 2024, uma diminuição de 7,8% em um semestre (INDEC, 2024). A expectativa oficial é superar amplamente esse número: "Em termos de contrato, vamos acabar demitindo 75.000 pessoas. Já chegamos a 25.000", conforme declarações de Javier Milei em junho deste ano (Argentina.gob.ar, 2024).

governo, fortemente apoiado pelos grandes empresários, propôs uma ampla reforma trabalhista. Como parte dela, certas medidas visavam introduzir duas figuras: o ‘autônomo economicamente dependente’, mas também o ‘colaborador independente’ para trabalhadores em estabelecimentos de até cinco pessoas (Observatorio del Derecho Social 2017: Centro de Investigación y Formación de la República Argentina 2017). No final de novembro de 2017, uma grande manifestação nas ruas foi organizada contra este projeto. Reuniu sindicatos e organizações dos estratos mais pobres dos trabalhadores. Naquele momento, essa tentativa fracassou.<sup>10</sup>

Ainda mais recentemente, o governo que assumiu em dezembro de 2023 finalmente conseguiu introduzir figuras semelhantes<sup>11</sup>. Como parte de uma reforma mais ampla, primeiro, um decreto até hoje judicializado tenta excluir explicitamente a contratação de serviços profissionais ou comerciais individuais da regulamentação dos contratos de emprego. Também introduz novamente a figura dos “colaboradores”, (CIFRA, 2023). Mais uma vez, essa medida pretende resolver 'a situação anômala e inaceitável em que o emprego informal supera o emprego formal' (Decreto N° 70/23)<sup>12</sup>. No momento de escrever estas linhas, foi estabelecida por lei a incorporação da figura do “trabalhador independente com colaboradores”, o qual poderá “contar com até outros três (3) trabalhadores independentes para levar adiante um empreendimento produtivo, baseado em uma relação autônoma, sem que exista vínculo de dependência entre eles” (Lei 27.742/24, art. 97, tradução nossa)<sup>13</sup>. O processo de implementação dessas figuras dentro de uma reforma trabalhista mais ampla motivou numerosas protestas onde se

---

<sup>10</sup> Durante o evento, foi proposta uma greve geral, que eventualmente ocorreu menos de um mês depois, contra a reforma da previdência que acompanhava o projeto de reforma trabalhista. A protesto desbordou além da esfera institucional e escalou para confrontos nas ruas. A lei da previdência foi aprovada, mas a reforma trabalhista não (IÑIGO CARRERA, FERNÁNDEZ e COTARELO, 2020).

<sup>11</sup> Entre 2017 e este ano, a única modalidade legalmente incorporada foi o “contrato de teletrabalho”, promovido durante a quarentena implementada após a pandemia de 2020.

<sup>12</sup> Recentemente, o presidente libertário Javier Milei destacou a necessidade de “avançar em uma reforma trabalhista moderna, que promova o trabalho formal. Sobre esse tema não pode haver dúvidas, o regime trabalhista que impera na Argentina há 50 anos é obsoleto e prejudicial... É um regime com normativas ultrapassadas, que torna quase impossível contratar alguém formalmente... Deve-se entender que a legislação trabalhista atual foi pensada para um país que havia eliminado a pobreza e não tinha desemprego. Esse país não existe mais. Somos um país pobre, com a maioria da população trabalhando em condições precárias. Precisamos gerar emprego. Emprego formal de qualidade. E para isso é indispensável gerar riqueza (Casa Rosada Presidência, 2024, tradução nossa).

<sup>13</sup> Este artigo da lei se complementa com a anulação da presunção de existência de contrato de trabalho em caso de contratações de obras ou serviços profissionais ou de ofícios em que se emitam os recibos ou faturas correspondentes (art. 89). Ao mesmo tempo, buscava-se eliminar a figura do *monotributo social* e diluí-la na categoria do *monotributo* geral. No entanto, essa modificação não teve sucesso no parlamento, pelo menos até agora (, 2024).

manifestou a confluência entre o ativo e a reserva<sup>14</sup>. Mencionaremos aqui apenas algumas situações onde se articulou uma unidade total ou parcial entre as centrais sindicais (ou sindicatos que as compõem) e as organizações dos estratos mais pobres contra essas reformas: manifestação (27 de dezembro de 2023), greve geral com concentração (24 de janeiro de 2024), concentração (1º de maio), greve geral (9 de maio) e concentração (12 de junho)<sup>15</sup>.

Essas tentativas da burguesia de promover reformas<sup>16</sup>, que incluem a promoção de figuras o emprego ‘atípico’, buscam justificativa em um diagnóstico que considera os problemas relacionados com o desemprego, a pobreza e a informalidade como reversíveis e, portanto, conjuntural. Consequentemente, a incorporação dessas formas legais no regime trabalhista (em detrimento dos próprios trabalhadores) é pretendida como uma “contribuição” para o aumento do trabalho formal. No entanto, o fenômeno da superpopulação não se mostra meramente circunstancial, mas parece assumir uma natureza orgânica no contexto das tendências atuais: sua forma estagnada é ampla em diferentes países ao redor do mundo e assume variadas expressões. Diferente de outros países com um alto grau de desenvolvimento capitalista tanto em extensão quanto em profundidade, na Argentina se expressa como uma vasta massa de pauperismo oficial. Será que essa forma particular é resultado de processos meramente conjunturais ou se refere mais bem a causas mais profundas como à inserção dependente da Argentina no mercado mundial? Essa não é uma questão menor, uma vez que as reformas em curso parecem estar destinadas a mudar a forma legal na qual os excedentes de força de trabalho são regulamentados, mas não necessariamente sua própria condição como tais. Essa questão permanece para pesquisas futuras.

Uma certeza se destaca: o dilema entre o emprego atípico e o pauperismo sobre o qual essas reformas se baseiam é indicativo da medida em que a superpopulação relativa

---

<sup>14</sup> A reforma inclui modificações como a introdução de um fundo de cessação de trabalho, a ampliação do período de experiência, a eliminação de sanções aos empregadores por não registrar a relação laboral, etc. Aqui, focamos apenas nas figuras potencialmente associáveis a uma espécie de “legalização” de características da intermitência da superpopulação estagnada. Para mais detalhes sobre a reforma (CIFRA, 2024).

<sup>15</sup> Dados provenientes do levantamento feito a partir de jornais para a base de dados sobre eventos de rebelião do Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina, sob a coordenação de María Celia Cotarelo.

<sup>16</sup> Reformas que são acompanhadas pelo uso da força pública. Desde restrições para a protesto nas ruas, denúncias e buscas, especialmente contra organizações dos estratos mais pobres, até o uso aberto da força repressiva: estima-se que pelo menos 665 pessoas ficaram feridas em seis episódios repressivos na Cidade de Buenos Aires entre janeiro e junho de 2024, além de detidos, especialmente na manifestação contra a lei que inclui a reforma trabalhista, durante a qual 33 pessoas foram encarceradas (CELS, 2024).

continua a exercer pressão para o agravamento das condições dos trabalhadores como um todo. É o terreno onde o argumento do capital, que atribui aos trabalhadores empregados, e especialmente às suas organizações, a causa dos problemas dos seus companheiros pobres, busca criar uma divisão entre o ativo e a reserva. Essas reformas encontram oposição na cooperação entre ambos, construída nas últimas décadas, em parte graças à luta e organização desses estratos pobres que caracterizam o proletariado argentino hoje.

### Referências

ARGENTINA.GOB.AR. Javier Milei: ‘Cada vez que los degenerados de la política quieran romper el equilibrio fiscal, les voy a vetar todo’, 06 junho 2024. Disponível em: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/javier-milei-cada-vez-que-los-degenerados-de-la-politica-quieran-romper-el-equilibrio>

BANTAR, Humberto, Brenda BROWN, e Julio NEFFA. *Políticas nacionales de empleo cuya ejecución está a cargo del MTEySS*. Empleo, Desempleo y Políticas de Empleo No. 21, Buenos Aires: CEIL/CONICET, 2015.

BENANAV, Aaron. *A global history of unemployment: surplus population in the world economy 1949-2010*. Universidad de California: Tese de Doutorado em Filosofia da História, 2015.

BOIERO, Mariano, Alejandro ESTÉVEZ, Leonardo GROTTOLA e María Cristina COSAKA. *Informe Trimestral de Empleo Público. ITEP: un balance preliminar de su implementación*. Buenos Aires: INAP, 2020.

CASA ROSADA PRESIDENCIA. “Palabras del Presidente, Javier Milei, en la firma del Pacto de Mayo”, 9 julho 2024, disponível em: <https://www.caserosada.gob.ar/informacion/discursos/50568-palabras-del-presidente-javier-milei-en-la-firma-del-pacto-de-mayo>

CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES. *Bala y Cárcel, Criminalización de manifestantes y restricción de libertades democráticas en Argentina*. Disponível em: <https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/bala-y-carcel/>

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Principales lineamientos del proyecto de reforma laboral. Buenos Aires: Central de Trabajadores de la Argentina, 2017.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Informe de coyuntura No. 42. Buenos Aires: Central de Trabajadores de la Argentina, 2023.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. La reforma laboral en el proyecto de “Ley Bases”. Una nueva reforma regresiva- Buenos Aires: Central de Trabajadores de la Argentina, 2024.

COLLINS, Randall. Ya no hay escape: el fin de las posibilidades de empleo para la clase media. Em WALLERSTEIN, Immanuel, Randall COLLINS, Michael MANN, M, Georgi DERLUGUIAN e Craig CALHOUN. *¿Tiene futuro el capitalismo?*. México: Siglo XXI, p. 47-87, 2015.

COTARELO, María Celia. *Argentina .1993-2010.. El proceso de formación de una fuerza social*. Buenos Aires: PIMSA/Imago Mundi, 2016.

CURIA, Dolores. Los que quedaron afuera del sistema económico, Página/12, 6 de maio 2024.

DONAIRE, Ricardo. ¿Quiénes son los 'trabajadores por cuenta propia'? Argentina, 1980/2001. Lavboratorio 20, p. 58-64, 2007.

DONAIRE, Ricardo. Las modalidades de la superpoblación relativa: aproximación a una medición mundial a comienzos del siglo XXI. Em: VARELA, Paula, Gastón GUTIÉRREZ ROSSI e Mariela CAMBIASSO (coords.). *¿Hacia donde va el trabajo? Informalidad, digitalización y reproducción social en América Latina*, Buenos Aires: CEIL/CITA, p. 173-194, 2024.

DONAIRE, Ricardo e Germán ROSATI. *Los que sobran .para el capital.: Los trabajadores argentinos entre el activo y la reserva*. Buenos Aires: Grupo Editor Universitario, 2023.

ELDIARIOAR. La Justicia vuelve a exigirle a Sandra Pettovello que reparta la comida que hay en los galpones del Gobierno. Disponible em [https://www.eldiarioar.com/politica/justicia-vuelve-exigirle-sandra-pettovello-reparta-comida-hay-galpones-gobierno\\_1\\_11495521.html](https://www.eldiarioar.com/politica/justicia-vuelve-exigirle-sandra-pettovello-reparta-comida-hay-galpones-gobierno_1_11495521.html). 2 julho 2024.

FERNÁNDEZ, Ana Laura e Mariana GONZÁLEZ. Empleo público: nivel, evolución y formas de contratación. Realidad Económica 309, p. 33-65, 2017.

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION. FAOSTAT. Disponible em: <https://www.fao.org/faostat/es/#data/OEA>. 2022.

FOSTER, John Bellamy, Robert W. MCCHESENEY e R. Jamil JONNA. The Global Reserve Army of Labor and the New Imperialism. *Monthly Review* 63, 2011.

GAMALLO, Gustavo. *El gobierno de la pobreza en la Argentina de la postconvertibilidad. El Ministerio de Desarrollo Social*. Buenos Aires: Centro de Estudios Para el Cambio Estructural, 2017.

GIMENEZ, José. ¿Qué decía la Ley Bases sobre la moratoria previsional?, Chequeado. Disponible em: <https://chequeado.com/el-explicador/que-dice-la-ley-bases-sobre-la-moratoria-previsional>. 29 junho 2024.

INFOBAE. Los movimientos sociales sellaron la unidad y lanzaron la UTEP, el sindicato de la economía popular. Disponible em: <https://www.infobae.com/politica/2019/12/21/los-movimientos-sociales-sellaron-la-unidad-y-lanzaron-la-utep-el-sindicato-de-la-economia-popular/>. 21 decembro 2019.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS. *Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad: resultados definitivos*. Buenos Aires, 2018.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS. *Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades*. Buenos Aires. 2024.

IÑIGO CARRERA, Nicolás, FABIÁN FERNÁNDEZ e María Celia COTARELO.. El movimiento obrero organizado ante la ofensiva de la oligarquía financiera. Argentina, 2016-2019. *Tempo Social* 32, p. 75-98, 2020

IÑIGO CARRERA, Nicolás, Fabián FERNÁNDEZ e Davisson Canguçu DE SOUZA. *Trabajadores y pobres. La cooperación entre el activo y la reserva de la clase obrera en Argentina .1994-2004*. Buenos Aires: PIMSA/Imago Mundi, 2022.

IÑIGO CARRERA, Nicolás e Jorge PODESTÁ. Las nuevas condiciones en la disposición de fuerzas objetiva. La situación del proletariado. *PIMSA Documentos y Comunicaciones* 1, p. 15-36. 1997.

JUEGUEN, Francisco. Radiografía del ajuste: los ingresos se hundieron casi un 20% en el primer cuatrimestre. *La Nación*, 28 junho 2024.

LA NACIÓN. Los promotores de la medida. 31 março 2022.

MARX, Karl. *El Capital*. São Paulo: Boitempo, 2013.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. *Acceso a las políticas de protección y seguridad social de los asalariados agrarios. Principales resultados*. Buenos Aires, 2014.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. *Condiciones de empleo, trabajo y salud de trabajadoras domésticas particulares. Resultados de la ECTSS 2018*. Buenos Aires, 2020.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. *Alcance de la Seguridad Social. Personas aportantes y beneficiarias*. Buenos Aires, 2022.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. *Encuesta de Indicadores Laborales. Evolución del empleo registrado del sector privado en los principales centros urbanos*. Disponible en <https://www.argentina.gob.ar/trabajo/estadisticas/encuesta-de-indicadores-laborales>, 2023a.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. *Reformas a la contratación laboral en la Argentina: orientación y alcances en el empleo privado*. Buenos Aires. 2023b.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. *Situación y evolución del trabajo registrado*. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/trabajo/estadisticas>, 2023c.

MUNCK, Ronaldo. The Precariat: a view from the South. *Third World Quarterly* 34(5), p.747-762, 2013.

NIELSON, David e Thomas STUBBS. Relative surplus population and uneven development in the neoliberal era: theory and empirical application. *Capital and Class*, 3(35), p. 435-453, 2011.

OBSERVATORIO DEL DERECHO SOCIAL. *Reforma Laboral: principales aspectos del mayor retroceso legislativo en décadas*. Buenos Aires: Central de Trabajadores Argentinos Autónoma, 2017.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. *Non-standard employment around the world. Understanding challenges, shaping prospects*. Genebra, 2016.



ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. *Mujeres y hombres en la economía informal*. Ginebra, 2018.

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. OCDE Data. Disponível em: <https://data.oecd.org/emp/labor-force.htm>, 29 novembro, 2023.

REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL. *Características laborales y productivas en la economía popular. Informe abril 2022*. Buenos Aires: Secretaría de Economía Social, 2022.

SCHIPANI, Andrés, Rodrigo ZARAZAGA e Lara FORLINO. *Mapa de las Políticas Sociales en la Argentina. Aportes para un sistema de protección social más justo y eficiente*. Buenos Aires: CIAS/Fundar, 2022.

SISTEMA DE INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y MONITOREO DE PROGRAMAS SOCIALES. *Asignación Universal por Hijo/a, Discapacidad y Embarazo. Reporte de Monitoreo Segundo Trimestre 2021*, Buenos Aires, 2021a.

SISTEMA DE INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y MONITOREO DE PROGRAMAS SOCIALES. *Evaluación del Programa Progresar*. Buenos Aires, 2021b.

STANDING, Guy. *The Precariat. The New Dangerous Class*. New York: Bloomsbury, 2011.

TELAM. En el Día del Trabajador, el Gobierno destacó el nivel de desempleo 'más bajo en décadas'. Disponível em: <https://www.telam.com.ar/notas/202305/627105-1-de-mayo-alberto-fernandez-repercusiones.html>, 01 maio 2023.

WACQUANT, Loïc. *Los condenados de la ciudad. Gueto, periferias y Estado*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2007.

**Resumo:** Se há uma característica que se tornou típica da Argentina nas últimas décadas, é a consolidação de uma massa de população relativamente redundante de trabalhadores e, talvez ainda mais notável, a presença que ela alcançou na organização e no protesto social. Essa presença dos supranumerários nas relações políticas, juntamente a sua notável persistência, parece ser uma característica do próprio país. A própria existência de uma superpopulação relativa, que tem atingido uma dimensão mundial, não é. Isso levanta a questão de saber se há características peculiares na Argentina. Este artigo oferece uma abordagem inicial. Em primeiro lugar, apresentamos suas principais formas de expressão no país e uma estimativa provisória com base em dados estatísticos oficiais, a fim de nos concentrarmos no que parece ser sua principal manifestação, o “pauperismo oficial”. Em seguida, e com base em uma revisão crítica das medições internacionais, mostramos as nossas próprias, especialmente preocupadas com o peso de suas diferentes formas constantes (flutuante, latente e estagnada, seguindo a conceituação clássica). Por fim, ao comparar o volume e a composição da superpopulação relativa entre a Argentina e o resto do mundo, introduzimos novos elementos para formular algumas hipóteses sobre as semelhanças e diferenças especialmente na forma de regulação desta população.

**Palavra-chave:** Superpopulação; Pauperismo; Desemprego; Trabalho informal; Emprego atípico

**Abstract:** If there is one feature that has become typical of Argentina in recent decades, it is the consolidation of a mass of relative surplus population of laborers and perhaps even more notably, the presence it has achieved in organisation and social protest. This presence of the supernumeraries in political relations, along with their notable persistence, seems to be a feature of the country itself. The very existence of relative surplus population, which has reached a worldwide extent, is not. This raises the question of whether there are distinctive characteristics in Argentina. This article presents an initial approach. First and foremost, we present its main forms of expression in the country and a provisional estimate based on public statistical data, in order to focus on what seems to be its main manifestation, 'official pauperism'. Next, and based on a critical review of international measurements, we advance our own, especially concerned with the weight of its different constant forms (floating, latent and stagnant, following the classical conceptualisation). Finally, by comparing the volume and composition of surplus population between Argentina and the rest of the world, we present new elements to formulate hypothesis about some of the resulting similarities and differences especially in the way this population is regulated.

**Key-words:** surplus population; Pauperism; Unemployment; Informal work; Non-standard employment

\* Artigo recebido em: 30/07/2024

\*Artigo aceito em: 02/08/2024

## A LEGITIMAÇÃO DA VIOLÊNCIA ESTATAL POR MEIO DAS LEGISLAÇÕES DE EXCEÇÃO E A DEGRADAÇÃO DOS SUJEITOS

Marisa de Fatima Morais\*

### Introdução

O presente artigo tem como objetivo demonstrar de que forma o Estado aplica sua violência estatal por meio das legislações de exceção, que, de acordo com Maria Lúcia Karam, são aquelas legislações que vão para além das garantias constitucionais, ou seja, ferem os direitos básicos garantidos na Constituição Federal de 1988.

Assim, fazemos inicialmente uma análise de como funciona o sistema de justiça criminal, que é responsável por efetivamente aplicar as legislações de exceção. Além disso, analisamos a questão da política penal, que é aplicada justamente no momento de elaboração das leis, de modo que a seleção sobre quem recai o peso das consequências do sistema de justiça criminal.

A seguir, analisamos a seletividade desse sistema e de que forma essa seletividade é demonstrada por meio da atividade policial e como seleciona aqueles que serão os “clientes” do sistema.

Por fim, é feita a análise acerca das dinâmicas de degradação, teoria elaborada por Harold Garfinkel. O autor explica os ritos essenciais para que haja uma degradação de sucesso.

### Revisão Bibliográfica

Iniciamos o presente artigo discorrendo sobre a dinâmica de funcionamento do sistema de justiça criminal, atuando com alta seletividade, de gênero, raça e classe.

Para essa análise acerca do sistema de justiça criminal, selecionamos um artigo de Vera Regina Pereira de Andrade, intitulado: “A soberania patriarcal: O sistema de Justiça Criminal no tratamento da Violência Sexual contra as Mulheres”, no qual a autora afirma que o sistema de justiça criminal é um subsistema cuja finalidade é principalmente o controle social, sendo ainda completamente desigual e seletivo. Além disso, esse sistema reproduz dois dos grandes tipos de violências sociais: a violência das relações sociais capitalistas (desigualdade de classes) e a violência das relações sociais patriarcais (desigualdade de gênero).

Em um segundo momento, a autora aborda o que seria o sistema de justiça criminal. A

---

\* Mestranda em Ciências Humanas e Sociais na Universidade Federal do ABC Paulista/UFABC.

autora divide esse sistema em: primeira dimensão, que seria a da Lei e das instituições formais de controle, sendo este o seu caráter *stricto sensu*, sendo essa dimensão a normativa institucional-instrumental e o sistema de justiça criminal é enxergado como o Outro.

A segunda dimensão do sistema é a integrativa do controle social informal (o Outro não está só), aqui sendo constituído pela esfera de controle informal, esfera privada – família, escola – e pelas mídias. E por fim a terceira dimensão é a ideológica simbólica (o sistema somos todos nós), sendo esta a dimensão com caráter de senso comum punitivo.

A autora pontua:

com efeito, é precisamente a Lei e o saber (Ciências Criminais), dotados da ideologia capitalista e patriarcal, que dotam o sistema de uma discursividade que justifica e legitima sua existência (ideologias legitimadoras), co-constituindo o senso comum punitivo reproduzido, por sua vez, pelo conjunto dos mecanismos de controle social, com ênfase, contemporaneamente, para a mídia” (PEREIRA DE ANDRADE, 2005, p.78).

Percebe-se que o sistema de justiça criminal segue a lógica capitalista patriarcal, ideologia dominante, e permanece fazendo com que as classes baixas e as mulheres continuem sendo marginalizadas (aqui não apenas se refere à lei, mas como uma forma de mantê-las longe dos locais de privilégio e poder na sociedade).

A autora fala, ainda, sobre as funções que o sistema de justiça criminal declara e aqueles reais, de forma que a eficácia que é invertida

mas é precisamente o funcionamento ideológico do sistema – a circulação da ideologia penal dominante entre os operadores do sistema e no senso comum ou opinião pública – que perpetua o ilusionismo, justificando socialmente a importância de sua existência e ocultando suas reais e invertidas funções. Daí apresentar uma eficácia simbólica sustentadora da eficácia instrumental invertida” (PEREIRA DE ANDRADE, 2005, p.79).

A partir deste fragmento é possível perceber que a legitimação da atuação do sistema de justiça criminal não se dá apenas por seus operadores, mas até mesmo por aqueles que são dominados pelas instituições de controle do sistema de justiça criminal, sendo assim, não cumpre com sua função de combater o crime – que seria sua função declarada – mas sim de continuar a legitimar as desigualdades entre gênero, classe e raça.

A autora aborda também sobre a seleção estigmatizante de vítimas e criminosos, sendo a seletividade a função real do sistema de justiça criminal

ora, se a conduta criminal é majoritária e ubíqua e a clientela do sistema penal é composta, regularmente, em todos os lugares do mundo, por homens adultos jovens pertencentes aos mais baixos estratos sociais e, em grande medida, não brancos, isto significa que impunidade e criminalização (e também a vitimação) são orientados pela seleção desigual de pessoas de acordo com uma fortíssima estereotípia presente no senso comum e dos operadores do controle penal, e não pela incriminação igualitária de condutas, como programa o discurso jurídico-penal (PEREIRA DE ANDRADE, 2005, p.82).

Sendo assim, a seletividade do sistema de justiça criminal é inegável. Ela alerta para a análise não só da vulnerabilidade para a criminalidade, mas também para a vitimação, vez que esta também é selecionada pelo sistema, uma vez que se entende que ao se designar um criminoso automaticamente há a necessidade de haver uma vítima.

Ainda de acordo com a autora, o capitalismo e o patriarcado são matrizes do sistema de justiça criminal, aqui começa-se a delinear a relação dos dois com a seletividade

Ora, nisto o SJC replica a lógica e a função real de todo mecanismo de controle social que se, em nível micro, implica ser um exercício de poder e de produção de subjetividades (a seleção binária, entre o bem e o mal, o masculino e o feminino), em nível macro, implica ser um exercício de poder (de homens e mulheres); reprodutor de estruturas, instituições, simbolismos e o SJC ocupa um importantíssimo lugar na manutenção do status quo social (PEREIRA DE ANDRADE, 2005, p.83),

O sistema de justiça criminal seleciona para manter a ordem e o status social, como o capitalismo oprime as classes o patriarcado o gênero feminino (além da opressão de raça) e de modo que esses sistemas estão intrínsecos o sistema de justiça criminal apenas reproduz e mantém aquilo que a hierarquia social propaga.

A autora ainda menciona o fato de que o sistema de justiça criminal só criminalizar a mulher de forma residual – conforme as mulheres começam a ocupar espaços na esfera pública, passando a exercer papéis até então masculinos, especialmente no mercado, sendo legal ou ilegal, elas se tornam mais vulneráveis ao controle penal

“o SJC funciona então como um mecanismo público integrativo do controle informal feminino, reforçando o controle patriarcal (a estrutura e o simbolismo de gênero), ao criminalizar a mulher em algumas situações específicas e, soberanamente, ao reconduzi-la ao lugar da vítima, ou seja, mantendo a coisa em seu lugar passivo” (PEREIRA DE ANDRADE, 2005, p.89),

Ainda, é necessário pontuar que crimes próprios de mulheres são acolhidos de forma privilegiada pelo sistema de justiça criminal, uma vez que a criminalização é simbólica, pois tem como finalidade reforçar os papéis de gênero, ressaltando que o lugar da esposa e mãe é em casa (de volta à esfera privada).

Por fim, o centro do controle feminino no patriarcado se concentra no controle da sexualidade, assim a violência contra a mulher é entendida pelo sistema de justiça criminal como violência sexual, em que a mulher aparece como vítima da violação sexual.

A seguir, analisamos a perspectiva crítica em que o professor Nilo Batista conceitua política criminal, sendo ela um “conjunto de princípios e recomendações para a reforma ou transformação da legislação criminal e dos órgãos encarregados de sua aplicação” (BATISTA, 2011, p. 33).

Em vista disso, essa política criminal que, segundo o mesmo autor, é composta pelas instituições policial, judicial e prisional, não deve se restringir à mera função de indicar para o legislador onde, quando e quais condutas criminalizar.

Essa é uma concepção que se constrói diante da evidente falha da pena privativa de liberdade, busca-se elaborar, então, uma política criminal que se volta, justamente, à uma menor incidência (quantitativa e qualitativa) do sistema penal: é o que propõe, por exemplo, Alessandro Baratta, ao fazer indicações estratégicas ao desenvolvimento de uma política criminal não mais pautada nos interesses das classes dominantes, mas daquelas que são dominadas.

Tocante ao sistema de justiça criminal brasileiro, percebe-se que esse, além de social e economicamente custoso, é altamente seletivo e consolida um punitivismo extremamente mortal sem trazer quaisquer benefícios reais à sociedade como um todo.

Assim, o que se averigua é, em verdade, uma política penal, como elencou June Cirino dos Santos, “enquanto a formulação de políticas públicas por parte do Estado estiver voltada ao controle do crime, esta será denominada política penal” (SANTOS, 2018, p. 55).

Isto é, não há uma política (criminal) verdadeiramente instrumentalizada à transformação social e remediação das dificuldades e problemáticas do Sistema e do Direito Penal: é política penal porque se concentra e se limita à pena enquanto punição e ferramenta de controle social, utilizada pelos grupos dominantes, em detrimento dos subalternos, na manutenção das desigualdades, pouco importando o descumprimento e/ou o desvio das funções e princípios que a regulariam e legitimariam.

Nessa lógica, o Estado brasileiro adota uma política penal de exceção, que contraria as noções de democracia e cidadania, colocando a questão social como problema de polícia. De modo que a consolidação do Estado punitivo apenas reforça as violências históricas já sofridas por determinadas parcelas da população, selecionadas justamente para isso, e essa seleção se encaixa perfeitamente ao Estado punitivo bem como ao modelo econômico neoliberal (PASTANA, 2009), como diria Massimo Pavarini “o cárcere funciona contra a criminalidade mediante seleção/neutralização de sujeitos que o Estado não pode/não quer incluir” (PAVARINI, 2012, s. p.).

Nesse sentido é o livro de Didier Fassin, “La fuerza del orden”, em que o autor explica o funcionamento da polícia francesa e toda a estigmatização contra pessoas de cor e imigrantes. Além disso, o autor explica que a polícia é essencial para a estabilidade do governo, sendo tanto uma ferramenta para consolidar a autoridade quanto um reflexo do estilo do regime.

No Brasil, tal realidade não se mostra tão diferente, uma vez que a seletividade do

sistema de justiça criminal começa pelas polícias, pois são a porta de entrada para o sistema.

Em seguida, o autor aborda sobre a necessidade de explorar a justificção interna dos policiais para agir como agentes da justiça e destaca a necessidade de avaliar não apenas as ações em si, mas também as crenças e valores que as fundamentam. Ele aponta também para a necessidade de explorar as consequências da desconfiança mútua entre a polícia e o sistema judicial, levantando questões sobre o equilíbrio de poder e a aplicação imparcial da lei.

Adentrando no tópico sobre as práticas policiais em bairros populares, o autor destaca a tendência de repressão e punição sem evidências claras de crimes. Fassin observa que as ações policiais muitas vezes se assemelham mais à vingança do que à justiça, especialmente quando não conseguem encontrar os verdadeiros culpados. São delineados dois modelos de represália: o castigo aleatório, onde um indivíduo é escolhido para "pagar" pelos outros, e as operações punitivas, que envolvem ocupação e abuso em larga escala.

Nesse sentido, o autor traz a chamada "economia moral do trabalho policial", que é apresentada como um conjunto de valores e sentimentos que tornam aceitáveis as práticas que, de outra forma, seriam consideradas imorais, de modo que a hostilidade na sociedade, combinada com a retórica pública radical, reforçando o *ethos* policial.

Assim, Fassin destaca que a intolerância em relação a certas categorias da população e à tolerância percebida dos magistrados alimenta o sentimento de que os policiais têm o direito de fazer justiça por conta própria.

Adiante, o autor pontua que, além da violência física, há outras formas de castigo moral, como a divulgação da condição de saúde de um suspeito, de modo que a humilhação é considerada uma forma de castigo merecido, vinculada à ideia de que os policiais estão do lado do bem e agindo contra o mal. O conceito de "sentimentos morais" é introduzido como uma característica subjacente a essas práticas.

Além disso, o autor argumenta que essa economia moral não reflete necessariamente as éticas individuais dos policiais, e destaca a diversidade de posturas morais observadas na atividade policial. Há contraste entre disposições morais opostas de dois policiais. Enquanto um expressa empatia e generosidade em relação aos detidos, o outro revela antipatia e agressividade, indicando que a insensibilidade é considerada a norma, enquanto a compaixão é vista como desviante.

O autor explora a transformação da polícia francesa ao longo das últimas décadas, especialmente em relação aos bairros populares e minorias étnicas. Ele destaca uma mudança na filosofia profissional da polícia, passando de "guardião da paz" para "força do ordenamento", com ênfase em uma abordagem mais dura e securitária. Essa mudança é atribuída a fatores

ideológicos, geográficos e tecnológicos.

Argumenta que a polícia, ao invés de manter a ordem pública, está se tornando uma ferramenta para administrar problemas sociais, exacerbando desigualdades e discriminando certos segmentos da população. Ele também destaca a falta de avaliação efetiva dessas práticas policiais, apontando para os custos sociais e de segurança associados.

Demonstra uma desconexão significativa entre a polícia e os habitantes dos bairros populares, com uma distância sociológica notável. Os policiais, em sua maioria homens brancos, muitas vezes veem os residentes como inimigos, alimentando a hostilidade mútua. A narrativa destaca a tensão entre as expectativas da polícia, como manter altos índices de prisões, e a realidade de patrulhas frequentemente ineficazes e desafios na aplicação da lei.

Assim, as práticas agressivas da polícia, incluindo detenções arbitrárias e humilhações públicas, não apenas falham em alcançar seus objetivos, mas também têm um impacto negativo na confiança pública e na coesão social.

Conclui enfatizando a necessidade de uma abordagem ética e política na condução de estudos etnográficos sobre a polícia e seus efeitos nas comunidades. Há a importância de compreender e divulgar as verdades desconfortáveis sobre a interação entre a polícia e os cidadãos, especialmente em contextos democráticos. Por fim, expressa a esperança de que seu trabalho estimule um debate mais amplo sobre a democracia, a aplicação da lei e a necessidade de uma antropologia pública.

Ademais, como pontua Maria Lucia Karam, o Estado máximo, vigilante e onipresente, no que concerne ao campo da justiça criminal, fornece uma roupagem pós-moderna para antigas formas de intervenção e restrições sobre a liberdade individual. Assim, a autora pontua que o neautoritarismo surge como a outra face do neoliberalismo.

Ainda, acerca da repressão política das ditaduras, que alimenta a crescente repressão por parte do sistema penal, naquelas democracias que são mais ou menos reais, das formações sociais do capitalismo pós-industrial e globalizado. Nesse sentido, pode-se falar acerca das legislações de exceção

a intensificação do controle social, revivendo as premissas ideológicas de afirmação de autoridade e da ordem, a abrir espaço para uma desmedida extensão do poder do Estado de punir, nas formações sociais do capitalismo pós-industrial e globalizado, reflete-se no campo normativo, com a produção de leis, que, também fazendo lembrar a repressão política das ditaduras, afastam-se de princípios garantidores, inerentes ao Estado Democrático de Direito (KARAM, 2004, p. 99).

A autora considera como marco da legislação de exceção no Brasil a Lei de Crimes Hediondos - Lei 8.072/90 - que foi além das exceções previstas na Constituição de 1988.



Não obstante, essas legislações de exceção ainda contemplam meios invasivos para obtenção de provas, bem como rompe-se com o mínimo de racionalidade, transparência e conteúdo ético que deveriam orientar as atividades estatais em um Estado Democrático de Direito.

Assim, o Estado desempenha um papel deseducador no que concerne às relações entre os indivíduos, pois acaba por transmitir valores tão ou mais negativos que aqueles ditos dos “criminosos” que eles alegam combater (KARAM, 2004).

A seguir, a autora pontua sobre as Leis nº 9.034/95, modificada pela Lei nº 10.217/01, que dispõe sobre a “criminalidade organizada”. Além disso, encontra-se nesse rol de legislações de exceção, a Lei nº 10.792/2003, que dispõe sobre o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), criando uma prisão dentro da prisão e minando a garantia constitucional de respeito à integridade dentro do sistema penitenciário.

Além dessas leis trazidas por Maria Lucia Karam, podemos elencar a Lei nº 13.964/2019, também conhecida como “pacote anticrime”, editada durante o governo de Bolsonaro, pelo então Ministro Sérgio Moro.

Indicamos aqui o que seria uma das maiores violações da Constituição por essa nova lei, na parte em que dispõe sobre as supostas lideranças de organizações criminosas, não prevendo nenhum tipo de requisito para que uma pessoa seja tida como tal, deixando um amplo espaço para a discricionariedade dos juízes. Ainda, retirou direitos da execução penal dessas pessoas.

A autora pontua ainda que para além da abertura de brechas para meios invasivos de busca de prova, ação controlada e a infiltração de agentes policiais, também premia a delação, invertendo-se as premissas.

Feita essa consideração acerca do funcionamento do sistema de justiça criminal, bem como realizada a explicação de conceitos como legislação de exceção e política penal, passemos a análise da obra de Harold Garfinkel, sobre cerimônias de degradação.

Passemos a análise então do artigo formulado por Harold Garfinkel como “condições de cerimônia de degradação de sucesso”, sendo entendido como: “trabalho comunicativo voltado para transformar a identidade total de um indivíduo em uma identidade mais baixa o esquema de tipos sociais do grupo é chamado de “cerimônia de degradação do status”.

Para reconstituir o outro como um objeto social, o denunciante deve fazer com que as testemunhas apreciem o autor e o culpado, evento como instâncias de extraordinária uniformidade, em contraste dialético com valores de rotina, ordens de pessoal e ação.

O denunciante deve reivindicar e gerenciar publicamente o status de boa-fé, representante do grupo de testemunhas. A partir dessa posição, ele deve nomear o agressor como "alguém de fora". Variáveis organizacionais determinarão a eficácia de um programa de táticas de degradação” (GARFINKEL, 1956, p.420).

A seguir, o autor lista os passos para que haja sucesso e cita um exemplo em nossa sociedade de um sujeito que pratique a degradação. O autor afirma que a indignação moral é que serve para efetuar a destruição de forma ritual da pessoa denunciada. “No mercado e na política uma cerimônia de degradação deve ser contada como uma forma secular de comunhão” (GARFINKEL, 1956, p.421).

A partir disso, é possível compreender que o autor parte do princípio de que a degradação acontece como um ritual, além disso ele ainda ressalta que possuem semelhança com cerimônias de posse e elevação, “a destruição da identidade é a destruição de um objeto social e a constituição de outro” (GARFINKEL, 1956, p.421). Ele ressalta que o objeto antigo não é superado, mas sim substituído por outro.

Além disso, Garfinkel elenca os passos para que uma cerimônia de degradação “obtenha sucesso”, em que o último passo consiste em: “a pessoa denunciada deve ser ritualmente separada de um lugar na ordem de um companheiro, ou seja, ele deve ser definido como padrão em um lugar oposto a ele, devendo ser colocado ‘fora’, deve ser feito ‘estranho’” (GARFINKEL, 1956, p.423).

Aqui temos a ligação com o sistema de justiça criminal, uma vez que a pessoa passa a integrar o sistema, é colocado em um lugar “fora” da sociedade, sendo assim estigmatizado e degradado.

Além disso, de acordo com o autor, os dispositivos para efetuar a degradação variam tanto na característica quanto na eficácia, de acordo com a organização e operação do sistema de ação em que ocorrem.

Por fim, o exemplo de instituição que degrada utilizado pelo autor são os tribunais, “o tribunal e seus oficiais têm algo como um monopólio sobre tais cerimônias, e lá eles tornam uma rotina ocupacional” (GARFINKEL, 1956, p.424), sendo assim o sistema de justiça criminal se faz seletivo, estigmatizante e degradante.

### **Considerações finais**

Mediante o exposto, concluímos que o Estado permanece legitimando sua violência, utilizando-se dos meios tidos como legítimos, principalmente das legislações de exceção,

como bem pontuou Maria Lucia Karam, sendo essas leis exceções que violam os direitos fundamentais da população garantidos pela então chamada Constituição Cidadã.

Conforme demonstrado, o Estado não se utiliza da política criminal, inicialmente pensada de acordo com a Constituição, mas sim, política penal, que é justamente voltada a uma parcela vulnerável da população.

Desse modo, o sistema de justiça criminal atua apenas para reforçar as distinções já tão presentes na sociedade, principalmente com relação ao gênero, à classe e à raça.

Conforme bem pontuado por Didier Fassin, a polícia, que é a “porta de entrada” para o sistema, tem uma clientela preferida. Apesar do autor estar se referindo ao contexto parisiense, no Brasil não há muita diferença.

Assim, a atuação do sistema de justiça criminal faz com o indivíduo aquilo que Harold Garfinkel chama de rituais de degradação.

## Referências

AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de. Tendências do controle penal na modernidade periférica: as reformas penais no Brasil e na Argentina na última década. Tese (Doutorado em Sociologia). Porto Alegre: Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2003.

BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: Introdução à Sociologia do Direito Penal / Alessandro Baratta; tradução Juarez Cirino dos Santos. Rio de Janeiro: Editora Revan: Instituto Carioca de Criminologia, 6ª edição, outubro de 2011. 5ª reimpressão, março de 2018.

BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011.

BATISTA, Vera Malaguti. Introdução Crítica à Criminologia Brasileira. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 21-29.

Di GIORGI, Alessandro. A miséria governada através do sistema penal. Rio de Janeiro: Revan, 2006.

FASSIN, Didier. La fuerza del orden. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2016.

FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. Corpo negro caído no chão: o sistema penal e o projeto genocida do Estado brasileiro. 2006. 145 f. Dissertação (Mestrado em Direito)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006.

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.

GARFINKEL, Harold. "Conditions of successful degradation ceremonies".

American Journal of Sociology, vol. 61, n. 5, Chicago: The University of Chicago Press, 1956, p.420-424.

GARLAND, David. A cultura do controle. Rio de Janeiro: Revan, 2008.

HEIN DE CAMPOS, Carmen. Criminologia e Feminismo. Themis – Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero. Porto Alegre: Editora Sulina, 1999.

KARAM, Maria Lúcia. Pela Abolição do Sistema Penal. In: Curso Livre de Abolicionismo Penal. Passetti, Edson (org.). Rio de Janeiro: Revan, 2004, pp. 69-107.

KILDUFF, Fernanda. O controle da pobreza operado através do sistema penal. Rev. Katál. Florianópolis v. 13 n. 2 p. 240-249 jul./dez. 2010. 64

MISSE, Michel. Crime, Sujeito e Sujeição Criminal: Aspectos de uma contribuição analítica sobre a categoria "bandido". Lua Nova, São Paulo, 79: 15-38, 2010.

PASTANA, Débora. Justiça Penal Autoritária e Consolidação do Estado Punitivo no Brasil. Revista de Sociologia e Política. Curitiba, v. 17, n. 32, p. 121-138, fev. 2009, pp. 121-138.

PAVARINI, Massimo. Punir os inimigos: criminalidade, exclusão e insegurança. Tradução de Juarez Cirino dos Santos; Aliana Cirino Simon. Curitiba: LedZe Editora, 2012. Ebook.

PAVARINI, Massimo. Control y dominación. Ciudad de México: Siglo Veintiuno, 1992.

PEREIRA DE ANDRADE, Vera Regina. A soberania Patriarcal: O sistema de Justiça Criminal no Tratamento da Violência Sexual Contra a Mulher. Revista Sequência, no 50, p. 71-102, jul. 2005.

SANTOS, June Cirino dos. Criminologia Crítica ou Feminista - Uma Fundamentação Radical para pensar Crime e Gênero. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2018.

VASCONCELOS, Francisco Thiago Rocha. Justiça, política penal e tolerância zero. Revista Sociedade e Estado – Volume 31 Número 2 Maio/Agosto 2016, pp. 541-546.

WACQUANT, Loïc. Os condenados da cidade. Rio de Janeiro: Revan, 2005. YOUNG, Jock. A sociedade excludente. Rio de Janeiro: Revan, 2002.

WACQUANT, Loïc. As duas faces do gueto. São Paulo: Boitempo, 2008.

WACQUANT, Loïc. As prisões da miséria. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

WACQUANT, Loïc. Punir os pobres. Rio de Janeiro: Revan, 2003.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. A questão criminal. Tradução Sérgio Lamarão. 1. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2013.

**Resumo:** O presente artigo tem como objetivo demonstrar de que forma o Estado aplica sua violência estatal por meio das legislações de exceção, que, de acordo com Maria Lúcia Karam, são aquelas legislações que vão para além das garantias constitucionais, ou seja, ferem os direitos básicos garantidos na Constituição Federal de 1988. Assim, por meio de revisão bibliográfica, de uma literatura crítica, abordamos sobre o sistema de justiça criminal e seu funcionamento, assim como sobre a seletividade desse sistema e como ele opera primeiramente nas polícias, que são a “porta de entrada”. Por fim, fazemos a análise sobre a degradação dos indivíduos, sendo o sistema de justiça criminal um dos principais exemplos desse ritual.

**Palavras-chave:** Violência Estatal; Legislações de Exceção; Degradação.

**Abstract:** This article aims to demonstrate how the State applies its state violence through exceptional legislation, which, according to Maria Lúcia Karam, is legislation that goes beyond constitutional guarantees, that is, violates the basic rights guaranteed in the Federal Constitution of 1988. Thus, through a bibliographic review of critical literature, we address the criminal justice system and its functioning, as well as the selectivity of this system and how it operates primarily in the police, which are the “gateway”. Finally, we analyze the degradation of individuals, with the criminal justice system being one of the main examples of this ritual.

**Keywords:** State violence; exceptional legislation; degradation.

\*Artigo recebido em: 09/04/2023

\*Artigo aceito em: 12/05/2023

## ACUMULAÇÃO INTEGRAL E ESCALADA REPRESSIVA

Jaciara Veiga\*

A sociedade capitalista se fundamenta no modo de produção capitalista, contudo, uma vez que esse fundamento existe ele passa a precisar de diversas formas sociais que o tornem regular, isto é, necessita desenvolver suas formas de regularização social, dentre tais formas ganha destaque o aparato repressivo estatal, como vem demonstrando os trabalhos dessa coletânea. Todo modo de produção necessita, para sobreviver, de formas de regularização que lhes são correspondentes. O modo de produção capitalista desenvolve inúmeras formas de regularização, e tem no Estado capitalista sua principal forma. O capitalismo não é estático, ele possui uma historicidade. Apesar de sua durabilidade, ele é perpassado por mudanças em seu interior, baseadas na dinâmica da acumulação de capital, isto é, o desenvolvimento capitalista ocorre através das formas assumidas pela acumulação de capital que, em cada época, assume a forma de um determinado regime de acumulação. No capitalismo contemporâneo impera a acumulação integral que gera a necessidade de uma forma estatal que lhes corresponda: a forma neoliberal.

Partindo dessa premissa, nosso objetivo no presente texto é analisar o processo de regularização neoliberal, especificamente sua política repressiva no capitalismo contemporâneo, buscando demonstrar a existência da relação entre a acumulação capitalista integral e suas formas de regularização social, que visam tornar regular o regime de acumulação integral. Para tanto, apresentamos, de forma resumida, uma discussão acerca do regime de acumulação integral e sua forma estatal correspondente; apresentando, em seguida, o caráter extremamente violento dessa forma de regularização das relações sociais capitalistas.

Por fim, concluímos que o capitalismo contemporâneo é marcado pela intensificação da exploração do trabalho, da lumpemproletarização social e por uma escalada repressiva capaz de conter as tensões sociais derivada das relações sociais neoliberais, provocadoras de um maior empobrecimento das classes inferiores e, por conseguinte, do aumento da criminalidade e da violência social. Essa realidade exige uma forma estatal policial hiper repressiva: o Estado neoliberal.

### O capitalismo contemporâneo

A sociedade capitalista deve ser compreendida como um conjunto de relações sociais que incluem além das relações existentes no modo de produção capitalista, que é seu fundamento, existem também as relações sociais existente nas formas de regularização social (formas sociais), tal conjunto constitui a dinâmica totalizante da sociedade capitalista (produção de mercadorias, circulação e comércio de mercadorias, infraestrutura para transporte de força de trabalho e mercadorias, serviços, legislação, educação técnica e científica, policiamento das cidades, repressão, relações internacionais etc.). Embora o modo de produção capitalista seja a

---

\* Graduada e mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás/UFG, doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná/UFPR e investigadora do Núcleo de Estudos sobre Capitalismo e Contestação Social/ NECCSO.

determinação fundamental da sociedade, as demais partes, uma vez existindo, atuam sobre ele, isto é, estabelecem uma relação de correspondência e determinação mútua que contribuem para torná-lo regular (VIANA, 2022; BRAGA, 2023). O desenvolvimento capitalista é marcado pelas mutações das formas de valorização de capital e das formas de regularização das relações sociais capitalistas. Essas mutações podem ser compreendidas como uma sucessão dos regimes de acumulação<sup>1</sup>.

O modo de produção capitalista modifica suas formas de valorização de capital (relações de trabalho), mas continua produzindo a sua essência: a produção de mais-valor, pois:

possui uma historicidade marcada pela permanência e pela tendência para a transformação devido suas contradições internas e desafios externos. Porém, os elementos constitutivos e fundamentais do modo de produção capitalista continuam existindo e se reproduzindo. A essência do modo de produção capitalista se encontra nas relações de produção capitalistas. Estas são caracterizadas pela produção de mais-valor, gerando o capital e a acumulação de capital. A produção de mais-valor, por sua vez, continua existindo, assim como as classes constituídas nessa relação, a burguesia e o proletariado, bem como as relações de distribuição, o chamado “mercado”, entre outros elementos” (VIANA, 2022, p. 18).

Esta, por sua vez, é uma relação de classe fundada na exploração, na qual o proletariado produz um excedente além do necessário para garantir sua sobrevivência e de sua família (ou seja, o equivalente ao seu salário), bem como o repasse do valor dos meios de produção. Este excedente, o mais-valor, por sua vez, é apropriado pela classe capitalista. A consequência desse processo de exploração é a acumulação de capital que ao ser reinvestida na produção, gera a reprodução ampliada do capital e, por conseguinte, um crescente processo de centralização e concentração de capital, levando a uma expansão mundial do capitalismo, e à uma exploração internacional, em conjunto com uma ação estatal visando garantir todo esse processo (MARX, 1996; VIANA, 2009, 2022).

Um regime de acumulação pode ser compreendido como uma determinada forma assumida pelo capitalismo ao longo do seu desenvolvimento histórico, e expressa uma correlação de forças entre burguesia e proletariado, manifestando, assim, um determinado estágio da luta de classes. O processo de acumulação de capital — que gera riqueza (capital) por um lado, também gera, por outro, um crescimento ampliado da miséria do proletariado, bem como a expansão do lumpemproletariado e suas diversas frações (desempregados, mendigos, prostitutas, desabrigados, subempregados etc.) — é, portanto, expressão do desdobramento da luta de classes e da emergência de uma diversidade de formas sociais que buscam lhe tornar regular em cada regime de acumulação.

A luta de classes perpassa todas as relações sociais da sociedade capitalista, ela está presente tanto no modo de produção, quanto na sociedade civil, nas relações de exploração internacionais e no estado, isto é, nas formas estatais de regularização das relações sociais capitalistas. No entanto, as formas fundamentais da luta de classes no capitalismo são encadeadas no modo de produção e na sociedade civil. No caso da primeira, trata-se da luta travada no processo produtivo, que no capitalismo equivale à produção capitalista de mercadorias, produção de mais-valor. Nessa luta, o que está em jogo é o

---

<sup>1</sup> A história do capitalismo é caracterizada pela sucessão de regimes de acumulação. Para uma maior compreensão acerca desta discussão, cf. (VIANA, 2009; 2019).

controle sobre o tempo de trabalho, pois à burguesia interessa ampliar o tempo de trabalho destinado à produção de mais-valor, enquanto para o proletariado interessa a diminuição desse tempo, que é o mesmo que ampliar o tempo de trabalho destinado ao seu salário, à melhoria do seu consumo, à sua qualidade de vida etc. (BRAGA, 2020, p. 30).

O atual regime de acumulação, o integral, emerge como reação à obsolescência do regime de acumulação conjugado, ou seja, ao curso descendente da acumulação capitalista que levou ao declínio da lucratividade capitalista, no final da década de 1960 e início de 1970. Em vista disso houve, por parte do estado neoliberal, um recrudescimento das contradições sociais em escala gigantesca com vistas a tentar frear a queda da taxa de lucro, isto é, as contradições derivadas das próprias relações sociais que lhe sustentam, tais como a contradição inerente à produção de capital, as desigualdades sociais e concentração de capital, a violência social cotidiana, a miséria, e outros fatores que podem gerar diversas crises no capitalismo contemporâneo (BRAGA, 2023).

A contratendência a essa crise implicou, portanto, numa série de alterações nas formas de valorização e regularização da dinâmica da reprodução ampliada do capital e, por conseguinte, necessitou-se intensificar ainda mais a exploração do proletariado e demais classes inferiores.

O regime de acumulação integral expressa a contemporaneidade [...] o estágio da história capitalista mais avançado no que diz respeito à ofensiva burguesa contra o proletariado, o lumpemproletariado e outras classes sociais exploradas, já que tal período intensifica e expande a já existente precariedade laboral, o subemprego, a superexploração do trabalho e seus resultados para o proletariado, isto é, suas doenças físicas e psíquicas, a expansão monstruosa do lumpemproletariado, a favelização do mundo, a militarização da vida cotidiana de milhares de bairros pobres espalhados pelo globo terrestre e uma lista assombrosa de outras barbaridades cometidas contra as classes exploradas (BRAGA, 2020, n. p.).

É neste contexto que o aparato estatal é fundamental para a acumulação capitalista, uma vez que é sua principal forma de regularização. Cada um dos regimes de acumulação promove formas de regularização que lhes são correspondentes. A mudança de um regime de acumulação para outro gera também mudança nas suas formas de regularização (políticas, financeiras, culturais, educacionais, repressivas etc.). No regime de acumulação integral, o estado assume a forma neoliberal, cuja função é garantir a acumulação integral, através da regularização das novas relações de produção capitalista, bem como do conjunto das relações sociais.

### **A repressão estatal neoliberal**

Para combater o curso descendente da acumulação capitalista e retomar uma maior extração de mais-valor (relativo e absoluto), elaborou-se de forma sistemática, e em escala planetária, uma dura ofensiva contra o proletariado, bem como toda e qualquer classe que representasse um obstáculo à efetivação da acumulação integral. Emerge, assim, uma nova forma estatal capitalista, o Estado neoliberal<sup>2</sup>, como a principal instituição regularizadora dessa

---

<sup>2</sup> Vale ressaltar aqui que compreendemos que o Estado neoliberal é diferente da ideologia neoliberal. Essa última antecede o primeiro. A ideologia neoliberal surge no pós-guerra, mas não teve ressonância, e décadas depois é



ofensiva (Braga, 2020). Essa nova forma estatal surge para atender às novas necessidades da reprodução das relações capitalistas. O Estado neoliberal é peça fundamental nesse processo, uma vez que, regulariza as novas relações de trabalho, seguindo uma política financeira que visa controlar a inflação, a dívida pública etc., associada a uma política de contenção dos gastos estatais (sobretudo os gastos com políticas de assistência social) e uma acentuada política estatal repressiva:

no regime de acumulação integral também há o surgimento do Estado neoliberal, uma forma de Estado na qual há um ataque direto às conquistas e direitos dos trabalhadores. Ocorre um enfraquecimento dos direitos sociais, na fiscalização das condições de trabalho e também surge um aprofundamento do imperialismo, através da transnacionalização do capital. O neoliberalismo e suas políticas possibilitam o avanço de projetos que atacam diretamente os trabalhadores, como é o caso, por exemplo, da terceirização e da privatização de empresas, o que faz com que muitos indivíduos acabem perdendo seus empregos e se insiram cada vez mais em relações de trabalho informais e precárias (ALMEIDA, 2020, n.p.).

[...] O neoliberalismo é expressão de uma violenta ofensiva do capital contra o proletariado e outras classes exploradas e suas conquistas sociais históricas, visando proporcionar a retomada da acumulação capitalista. Dessa maneira, o Estado neoliberal se apresenta como um complemento de toda essa mudança estrutural, necessária para a emergência do novo regime de acumulação, atuando no campo da regularização das novas relações sociais imprescindíveis à efetivação da acumulação integral de capital e, conseqüentemente, da restauração do poder de classe da burguesia (BRAGA, 2013, p. 83-85).

As conseqüências da consolidação da ofensiva neoliberal foram diversas: aumento da pobreza e da miséria (inclusive nos países de capitalismo imperialista); aumento da exploração via “desregulamentação do mercado” (corroendo os direitos e efetuando a perda do poder aquisitivo e da pressão das classes trabalhadoras); corte nas despesas estatais (principalmente nos gastos com as políticas sociais); aumento da violência, da criminalidade e dos conflitos sociais - o que justifica o aumento da política estatal repressiva e do crescimento da população carcerária (HARVEY, 2008; BRAGA, 2020; WACQUANT, 2003). O crescimento da pobreza e da miséria, por sua vez, produz vários problemas sociais, tal como a favelização (DAVIS, 2006). Derivado disso, tem-se um aumento da violência, da criminalidade e dos conflitos e ações sociais, reforçando e justificando, desta forma, o endurecimento da política repressiva. Assim, o estado neoliberal se manifesta como Estado mínimo (em políticas de assistência social, em intervenção no mercado e no aparato produtivo) e forte (nas políticas repressivas) contra aqueles que representam uma ameaça às relações sociais capitalistas.

Nesse sentido, podemos afirmar que, “a acumulação integral de capital necessita de um aparelho repressivo que lhe seja correspondente e esse adquire uma centralidade impressionante na contemporaneidade” (BRAGA, 2020, p. 62). No neoliberalismo, o aparato repressivo tornou-se a principal resposta às ações e contestações dos movimentos e grupos sociais, onde sua modalidade preventiva passa a ser contrainsurgente.

---

que surge o Estado neoliberal, que se apropria dessa ideologia, adaptando-a e reformulando-a às novas necessidades do capitalismo a partir dos anos 1980. O neoliberalismo não é mero produto da aplicação da ideologia neoliberal, mas sim resultado de um conjunto de transformações sociais que tornaram necessária essa forma estatal (Viana, 2009).

No capitalismo neoliberal [...] a repressão estatal é realizada através de duas modalidades primordiais: a repressão contrainsurgente e a repressão preventiva. [...] o aparato repressivo estatal, composto por suas forças policiais, exerceu um papel crucial na constituição da sociabilidade capitalista (sec. XIX). Na contemporaneidade sua crucialidade se mantém com a tarefa de tornar regular o regime de acumulação integral, o que significa, dentre outras coisas, garantir a sociabilidade adequada para esse, pois toda e qualquer organização de classe e grupos sociais que representem, através de suas lutas, um obstáculo a tal sociabilidade, através de bloqueio de vias, ocupação de fábricas, marchas massivas constantes etc. devem ser violentamente reprimidas (BRAGA, 2023, p. 286).

A nova ofensiva do capital (intensificação da exploração, maior apropriação da renda estatal para fins burgueses, escalada da repressão etc.) pode ser vista tanto nos países capitalistas imperialistas (EUA, Europa etc.), como nos países capitalistas subordinados (América Latina). A partir dos anos 1980, com o desenvolvimento do neoliberalismo, nos Estados Unidos, por exemplo, após a eleição de Ronald Reagan à presidência, iniciou-se uma era de ataques à classe operária, bem como às demais classes inferiores. O Estado neoliberal americano dá início à liberalização econômica, a uma nova regularização dos mercados e das relações trabalhistas, à isenção de impostos para burguesia e a cortes em suas políticas sociais. As consequências dessas medidas foram desde as altas taxas de desemprego, subemprego, trabalhos precários, até o alto índice de criminalidade, tráfico de drogas, violência generalizada, crescimento do número de sem-teto, mendicância etc. (BRAGA, 2013).

À vista disso, foi necessária uma maior repressão estatal, isto é, aumento de seu aspecto repressivo visando conter a luta de classes decorrentes dessas consequências.

O segundo componente da política de “contenção repressiva” dos pobres é o recurso maciço e sistemático ao encarceramento [...]. Depois de ter diminuído em 12% durante a década de 60, a população carcerária americana explodiu, passando de menos de 200 mil detentos em 1970 a cerca de 825 mil em 1991, ou seja, um crescimento nunca visto em uma sociedade democrática, de 314% em vinte anos (WACQUANT, 2003, p. 28-29).

O estado estadunidense apresenta-se como “mais Estado (penal) para aqueles que negam a aceitar as consequências derivadas da acumulação integral que ele busca regularizar” (BRAGA, 2020, n.p.). Essa escalada penal pode ser vista nos números cada vez maiores de encarceramentos:

a reviravolta da demografia carcerária americana depois de 1973 será tão brutal quanto espetacular. Contra qualquer expectativa, a população penitenciária do país começa a aumentar em uma velocidade vertiginosa: fato sem precedentes em uma sociedade democrática, ela “dobrou em dez anos e quadruplica em vinte”. Partindo de menos de 380 mil em 1975, o número das pessoas encarceradas beira os 500 mil em 1980 (ver quadro 1). E continua a inchar no ritmo infernal de 9% ao ano em média (ou seja, 2 mil detentos suplementares por semana durante a década de 90, de maneira que em 30 de junho de 1997 a América contava com 1.855.575 prisioneiros, dos quais 637.319 nas casas de detenção dos condados e 1.218.256 nas prisões federais e estaduais (WACQUANT, 2003, p. 57).

A prisão, sem dúvida, apresentou-se como a principal resposta social do estado capitalista estadunidense às consequências sociais da acumulação integral. A explosão carcerária que ocorre neste país desde a década de 1970 é espantoso, e só vem aumentando. A população carcerária americana vem crescendo rapidamente, desde que o governo decidiu

tornar-se “duro contra o crime”. Até 2005 havia 2.193.789 pessoas encarceradas nos Estados Unidos. Hoje (2014) os EUA possuem a taxa de encarceramento mais alta do mundo, um em cada 136 (homens, mulheres e crianças) estão na prisão (CARTER *apud* BRAGA, 2020). Não à toa o estado neoliberal estadunidense é caracterizado como um “Estado-Centauro”<sup>3</sup>.

A destruição deliberada do Estado social e a hipertrofia súbita do Estado penal transatlântico no curso do último quarto de século são dois desenvolvimentos concomitantes e complementares. Cada um a seu modo, eles respondem, por um lado, ao abandono do contrato salarial fordista e do compromisso keynesiano em meados dos anos 70 e, por outro, à crise do gueto como instrumento de confinamento dos negros em seguida à revolução dos direitos civis e aos grandes confrontos urbanos da década de 60. Juntos, eles participam do estabelecimento de um “novo governo da miséria” no seio do qual a prisão ocupa uma posição central e que se traduz pela colocação sob tutela severa e minuciosa dos grupos relegados às regiões inferiores do espaço social estadunidense. Desenha-se assim a figura de uma formação política de um tipo novo, espécie de “Estado centauro”, cabeça liberal sobre corpo autoritário, que aplica a doutrina do “laissez faire, laissez passer” ao tratar das causas das desigualdades sociais, mas que se revela brutalmente paternalista e punitivo quando se trata de assumir as consequências (WACQUANT, 2003, p.55).

A escalada repressiva neoliberal também pôde ser vista na Europa, onde registrou-se recordes de encarceramento. De acordo com Wacquant,

A população penitenciária da Inglaterra e do País de Gales aumentou lenta, mas regularmente sob os governos de Margaret Thatcher, antes de cair notavelmente de 1990 a 1993 como decorrência da lei sobre a justiça criminal de 1991, provocada por uma onda de rebeliões carcerárias espetaculares. Em seguida, aumentou brutalmente entre 1993 e 1998, passando de menos de 45.000 detentos para quase 67.000 em apenas cinco anos, para atingir o pico recorde de 120 detentos para cada 100.000 habitantes, ao passo que o índice de criminalidade do país diminuía regularmente durante esse intervalo. No mesmo período, o número de prisioneiros “subcontratados” no setor comercial pulou de 198 para 3.707 (ou seja, um crescimento anual médio de 350%) e promete dobrar novamente nos três anos vindouros para atingir um décimo do “mercado” penitenciário inglês. Com este impulso, a Inglaterra logo deverá alcançar, depois ultrapassar, os Estados Unidos na corrida para a inflação carcerária e a comercialização da punição (WACQUANT, 2001, p. 89-90).

Seguindo o modelo da “americanização do penal”, a Grã Bretanha, por exemplo, ampliou nitidamente sua política penal e, por conseguinte, seus recursos ao encarceramento, de modo que, dentre todos os gastos públicos, o orçamento da administração penitenciária foi o que alcançou maior crescimento desde 1979 (WACQUANT, 2001). A França, que entre 1968 a 1975 teve sua população carcerária reduzida em 25%, a partir de 1980 volta a experimentar altos índices de encarceramento. Somente na metrópole, a população carcerária francesa passou de 26.032, em 1975, para 42.937, em 1985. “Praticamente todos os países membros da União Europeia (EU) viram sua criminalidade aumentar e seus índices de encarceramento registraram um aumento rápido e contínuo (BRAGA, 2020, n.p.). O afastamento do Estado europeu das

---

<sup>3</sup> “Em torno da construção do estado penal estadunidense e do consenso ideológico que legitima sua construção existe toda uma trama de interesses de classes diversas, na qual o estado se apresenta como o grande agente articulador e regularizador dessa nova doxa nacional que se afirma em menos estado para obstaculizar a liberdade de exploração de mão-de-obra superprecarizada e mais estado para controlar o avanço de ações que ameacem a estabilidade social, mais estado (penal) para aqueles que se negam a aceitar as consequências sociais derivadas da acumulação integral que ele busca regularizar” (BRAGA, 2020, n.p.).

políticas sociais voltadas para as classes inferiores, veio acompanhado por um “Estado penal”, através da generalização das políticas mais severas no que se refere ao crime e castigo.

### **Capitalismo Subordinado e Repressão Neoliberal**

Nos países de capitalismo subordinado a acumulação integral e sua ofensiva neoliberal consolidou-se na década de 1990. A expansão do neoliberalismo para os países de capitalismo subordinado não só manteve o processo de exploração já existente, ela provocou o aprofundamento da mesma e, de forma cada vez mais intensa. O neoliberalismo torna ainda mais grave a situação no capitalismo subordinado. Na Argentina, que foi reconhecida como “uma espécie de aluno exemplar do neoliberalismo”, a transição do regime de acumulação conjugado para o integral teve seu início na década de 1970 com a instalação da ditadura burguesa (1976-1983), consolidando-se em 1990 com o menemismo.

A maneira como tais medidas foram tomadas tornou a Argentina uma espécie de aluno exemplar do neoliberalismo, pois sua eficácia foi extraordinária no que se trata de: imensas privatizações acompanhadas de demissão em massa, destruição da produção industrial nacional, abandono estatal absoluto das políticas sociais, estatização das dívidas empresariais privadas, liberdades econômicas irrestritas para o capital internacional e frações do capital nacional, concentração e centralização extraordinária de capital, intenso processo de lumpemproletarização, retirada de direitos sociais, aprovação de leis e medidas de precarização e intensificação do trabalho, mais-violência no trabalho (doenças físicas e psíquicas) regularização do subemprego e do trabalho precário, controle social e militarização dos bairros pobres, criminalização da pobreza e da contestação social, repressão estatal semifascista etc. [...] (BRAGA, 2020, p. 70-71).

Assim, o desenvolvimento do capitalismo argentino, se deu sobre “um rastro de violência estatal praticada por um estado com contornos nitidamente policial/militar” (BRAGA, 2020, p.66). A cada regime de acumulação, é possível ver o caráter altamente violento do aparato repressivo estatal argentino, visando impor as formas de valorização/exploração do capital correspondente a cada um deles.

[...] o golpe militar de 1976 representou um duro golpe no proletariado, com o objetivo de abrir as portas para um novo regime de acumulação que objetivava, fundamentalmente, promover a acumulação integral de capital. [...] inicia-se o processo de esfacelamento do movimento operário e, por conseguinte, de fortalecimento do poder da burguesia nacional e internacional, acompanhado da desintegração das ferramentas de pressão sindical, da desindustrialização, da precarização do trabalho, da imensa lumpemproletarização, e de uma maior exploração da força de trabalho etc. Tal processo se consolidará com as reformas estruturais neoliberais da década de 1990, realizadas com o fito de tornar regular o regime de acumulação integral (BRAGA, 2020, p. 70).

O impacto das políticas neoliberais (altos índices de desemprego, subemprego, indigência e pobreza), coincidem com o aumento da prática de diversos delitos (BRAGA, 2020). Em resposta, inicia-se uma intensa política repressiva, traduzida numa ação policial altamente violenta, cuja luta contra o delito não possuía limitações.

O "punho de ferro" converteu-se, sem maquiagem, em política de Estado e alcançou um alto grau de consenso que possibilitou naturalizar um crescimento incomum das taxas de encarceramento, a deterioração contínua das condições de detenção e a promoção da violência policial como ferramenta privilegiada para a gestão da criminalidade (AYOS; DALLORSO; RANGUNGNI; RECEPTER, 2010, p.10).

A partir de 1990, com o processo de regularização neoliberal, o Estado argentino intensificou sua política repressiva, levando à exacerbação da taxa de encarceramento no país.

No ano de 1990 a quantidade de pessoas privadas de liberdade em prisões federais era de 4.473, enquanto que no ano de 2002 esse número chegou a 8.836. Isto significa que o aumento no período de 1990 a 2002 foi de 97,54%: em 12 anos praticamente se duplicou a quantidade de pessoas encarceradas no âmbito federal. Ao mesmo tempo, a porcentagem de presos sem condenação aumentou até chegar a 58% em 2002; situação que —até o momento— não se reverteu. Na Província de Buenos Aires o endurecimento das medidas penais instalado durante a década de 1990 assumiu contornos ainda mais alarmantes: entre 1990 e 2003 a população carcerária na Província de Buenos Aires aumentou dramaticamente. O salto mais significativo ocorreu entre 1999 e 2000 com um aumento de 22%, passando de 16.598 presos para 20.305 em um só ano. No período entre 1994 e 2003 registrou-se um aumento de 129% da população carcerária. O período se inicia com 12.223 presos e chega a 28.034 em 2003 (AYOS et al, p.11, 2010).

No Brasil, outro país de capitalismo subordinado, que desde o início de seu processo de industrialização esteve subordinado aos investimentos estrangeiros tem, no regime de acumulação integral, essa subordinação aumentada. A instauração do neoliberalismo brasileiro deu-se nos anos 1990, com o governo Collor, mas foi durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), mais especificamente com sua eleição e posse a partir da segunda metade da década de 1990, que o “projeto neoliberal brasileiro” foi colocado em prática. O governo FHC, seguindo à risca as determinações do Banco Mundial, foi marcado pelo desmonte do Estado, acompanhado por um processo de privatizações de empresas públicas, intensa precarização dos serviços públicos, maior abertura ao capital financeiro internacional.

Com isso, o proletariado e demais classes inferiores foram afetadas por uma verdadeira “epidemia de desemprego” que, por sua vez, gerou o crescimento do subemprego e da informalidade. Diante desse contexto, o Brasil experimentou um processo de intensificação da lumpemproletarização. A consolidação do neoliberalismo no Brasil, ao ampliar a taxa de lucro das grandes empresas, bem como promover um acelerado processo de acumulação de capital, gerou consequências sociais desastrosas para as classes inferiores, tais como pobreza, desigualdade social (BRAGA, 2013). Ao lado da implementação das políticas neoliberais, houve também um desenvolvimento da repressão e do controle social voltados à “gestão da miséria” (WACQUANT, 2007). No governo FHC ocorre um recrudescimento da repressão visando, supostamente, desestimular eventuais criminosos. Seu governo teve como marca central as “políticas criminais”, com discursos de guerra ao crime, guerra às drogas (CAMARGOS, 2021).

Dentre essas políticas, fortaleceu-se o sistema de prevenção e repressão ao crime, promovendo uma ampla expansão do sistema carcerário em diversos estados do país (construção de inúmeros presídios) e, por conseguinte, um aumento dos índices de encarceramento, onde o número de presos que em 1990 era de cerca de 90 mil, passou para mais de 230 mil em apenas dez anos depois (a taxa de encarceramento por 100 mil habitantes cresceu de 61 a 137 entre 1990 e 2000) (CAMARGOS, 2021). Os investimentos no aparato

repressivo estatal como um todo aumentaram durante a década de 1990, criando-se, em 1954, a Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública (Seplanseg) que, em 1997, foi transformada em Secretaria Nacional de Segurança Pública. Além disso, criou-se também as Guardas Municipais (entre 1999-2002 teve um crescimento relevante), estabelecendo-se com isso, órgãos policiais nas três esferas de governo: Federal, Estadual e Municipal (GROTTI, 2023).

### Considerações Finais

Como vimos, a partir da década de 1980 a regularização neoliberal se generalizou e, embora tenha assumindo um caráter mais repressivo, bem como políticas sociais mais prejudiciais ao proletariado e demais classes inferiores nos países de capitalismo subordinado, ela vem cumprindo muito bem sua tarefa no mundo inteiro — é notável a intensificação da ofensiva burguesa visando assegurar as melhores condições reprodutoras do capitalismo em escala mundial. A acumulação integral, marcada fundamentalmente pela intensificação da exploração e repressão estatal violenta, passou a atingir também os países de capitalismo imperialista. As consequências sociais derivadas da acumulação integral foram diversas, e a repressão estatal foi, sem dúvidas, uma das principais, haja visto pela explosão da população carcerária mundial.

O regime de acumulação integral, que marca a nova fase do capitalismo mundial, uma fase de maior intensificação da exploração e repressão, visando aumentar ainda mais a extração de mais-valor, ou seja, a exploração capitalista já excessiva, gerou o empobrecimento da população e intensificou a criminalidade e a violência. Esse processo, ao lado da redução dos gastos estatais e das políticas de assistência social etc., gerou a necessidade de um aparato estatal hiperrepressivo, o Estado neoliberal. Todavia, o regime de acumulação integral não é estático — ele já se encontra em seu processo de desestabilização. O mesmo podemos dizer sobre as formas assumidas pelo estado capitalista, elas também sofrem alterações com o desenvolvimento histórico do capitalismo. O Estado neoliberal, portanto, também não é estático, sua dinâmica histórica acompanha a evolução do regime de acumulação integral do qual faz parte.

A nova fase do neoliberalismo, o discricionário<sup>4</sup>, que emerge a partir dos anos 2000, traz consigo uma intensificação ainda maior no aspecto repressivo, onde o Estado neoliberal passa de “penal” para contrainsurgente, isto é, o Estado neoliberal adota uma política repressiva contrarrevolucionária preventiva em vários países e passa a usar estratégias militares para controlar a população (VIANA, 2020). Todavia, o desenvolvimento desse processo, teremos que analisar em outro momento. Não obstante, ao percebermos que a sociedade capitalista tem uma historicidade, como todas as outras sociedades que a antecederam, logo compreendemos sua finitude. Isso significa que sua superação é possível, ou ainda, inevitável.

---

<sup>4</sup> “Ele se caracteriza por intensificar características do neoliberalismo visando a retomada da estabilidade, especialmente a repressão contrainsurgente e as chamadas “políticas de austeridade” (que podem efetivar uma intensificação da exploração, já excessiva, e redução ainda maior dos gastos estatais). Em determinados casos, ele pode intensificar apenas a repressão, em outros apenas as suas políticas econômicas, de austeridade, ou, ainda, em certos casos, a combinação de ambos. A combinação de ambos é mais comum, pelo menos temporariamente, especialmente quando emergem políticas de austeridade, pois isso tende a aumentar a reação popular, os protestos, manifestações, greves, etc.” (Viana, 2022, p. 32).

Afinal, o próprio capitalismo, ao longo do seu desenvolvimento, vem dando sinais de dificuldades cada vez maiores de sua reprodução.

## Referências

AYOS, Emilio; DALLORSO, Nicolás; RANGUNGNI, Victoria; RECEPTER, Celina. La Argentina Neoliberal: Naturalización de la Fragmentación Social y Exacerbación Punitiva. En Sozzo, Máximo (Comp.), *Delito y Sociedad: Por una sociología crítica del control social. Ensayos en honor de Juan S. Pegoraro*. Buenos Aires Editores Puerto, 2010.

BRAGA, Lisandro. *Classe em Farrapos: acumulação integral e expansão do lumpemproletariado*. São Carlos: Pedro e João Editores, 2013.

BRAGA, Lisandro. *Repressão Estatal e Capital Comunicacional: a criminalização do movimento de desempregados na Argentina (1996-2002)*. Jundiaí: Paco Editorial, 2020.

BRAGA, Lisandro. Acumulação integral e escalada repressiva nos EUA e na Europa (1980-2000). Em: ALMEIDA, Felipe Mateus (org.). *O regime de acumulação integral: Retrato do Capitalismo Contemporâneo*. Goiânia: Edições Redelp, 2020.

CAMARGOS, Pedro. Neoliberalismo e política criminal no Brasil após 1988: entre a redemocratização e a desdemocratização. *Cadernos Gestão Pública e Cidadania*, São Paulo, v. 26, n. 85, 2021. Disponível em: <https://periodicos.fgv.br/cgpc/article/view/83175>. Acesso em: 14 abril. 2024.

DAVIS, Mike. *Planeta Favela*. São Paulo: Boitempo, 2006.

GROTTI, Vyctor. *Repressão Estatal e Discurso: A Legitimação da Letalidade Policial em Curitiba (2017-2018)*. Curitiba: Appris, 2023.

HARVEY, David. *O neoliberalismo – história e implicações*. São Paulo: Edições Loyola, 2008.

MARX, Karl. *O Capital*. São Paulo: Nova Cultural, 1996.

SILVA, Rubens Vinícius da. Concepção Marxista de Neoliberalismo: O Fenômeno no Capitalismo Brasileiro. *Revista Enfrentamento*, ano 16, n. 27, setembro, 2021. Disponível em: <https://redelp.net/index.php/renf/article/view/549>. Acesso: março, 2024.

VIANA, Nildo. *O Capitalismo na Era da Acumulação Integral*. São Paulo: Ideias e Letras, 2009.

VIANA, Nildo. *Hegemonia Burguesa e Renovações Hegemônicas*. Curitiba: CRV, 2019.

VIANA, Nildo. A Acumulação Integral e a Dinâmica do Capitalismo Contemporâneo. *Revista Despierta*, ano 09, n. 12, jul.-dez. 2022. Disponível em: <https://redelp.net/index.php/rd/article/view/1334>. Acesso: março, 2024.

VIANA, Nildo. Regime de Acumulação Integral e Dinâmica Histórica do Neoliberalismo. Em: ALMEIDA, Felipe Mateus (org.). *O regime de acumulação integral: Retrato do Capitalismo Contemporâneo*. Goiânia: Edições Redelp, 2020.

VIANA, Nildo. Estado e Violência Estatal. *Revista Espaço Livre*, v.16, n. 31, jan.-jun. 2021. Disponível em: <https://redelp.net/index.php/rel/article/view/174>. Acesso: março, 2024.

WACQUANT, Löic. *As Prisões da Miséria*. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

WACQUANT, Löic. *Punir os Pobres: A nova gestão da miséria nos Estados Unidos*. Rio de Janeiro: Revan, 2003.

**Resumo:** O desenvolvimento capitalista ocorre através das formas assumidas pela acumulação de capital que, em cada época, assume a forma de um determinado regime de acumulação. Todo modo de produção necessita, para sobreviver, de formas de regularização que lhes são correspondentes e, dentre tais formas, ganha destaque o aparato repressivo estatal. No capitalismo contemporâneo impera a acumulação integral, e esta é marcada pela intensificação da exploração do trabalho, da lumpemproletarização, por um maior empobrecimento das classes inferiores e, por conseguinte, do aumento da criminalidade e da violência social. Essa realidade, por sua vez, exige uma escalada repressiva para conter as tensões sociais derivadas dessas relações sociais, isto é, exige uma forma estatal altamente violenta: o Estado neoliberal. Partindo dessa premissa, o objetivo do presente texto é analisar o processo de regularização neoliberal, especificamente sua política repressiva no capitalismo contemporâneo, buscando demonstrar a existência da relação entre a acumulação capitalista integral e suas formas de regularização social, que visam tornar regular o regime de acumulação integral. Para tanto, apresentamos, de forma resumida, uma discussão acerca do regime de acumulação integral e sua forma estatal correspondente; apresentando, em seguida, o caráter extremamente violento dessa forma de regularização das relações sociais capitalistas.

**Palavras-chave:** Estado neoliberal; superexploração do trabalho; lumpemproletarização; hiperrepressão.

**Abstract:** Capitalist development occurs through the forms assumed by the accumulation of capital, which, in each era, assumes the form of a specific accumulation regime. In order to survive, every mode of production requires corresponding forms of regulation, and among these forms, the state's repressive apparatus stands out. In contemporary capitalism, integral accumulation prevails, and this is marked by the intensification of labor exploitation, lumpenproletarianization, greater impoverishment of the lower classes and, consequently, an increase in crime and social violence. This reality, in turn, requires an escalation of repression to contain the social tensions arising from these social relations, that is, it requires a highly violent state form: the neoliberal state. Based on this premise, the objective of this text is to analyze the process of neoliberal regulation, specifically its repressive policy in contemporary capitalism, seeking to demonstrate the existence of the relationship between integral capitalist accumulation and its forms of social regulation, which aim to regulate the regime of integral accumulation. To this end, we present, in summary form, a discussion about the regime of integral accumulation and its corresponding state form; then presenting the extremely violent nature of this form of regularization of capitalist social relations.

**Keywords:** Neoliberal state; overexploitation of labor; lumpenproletarianization; hyperrepression.

\* Artigo recebido em: 19/08/2024

\* Artigo aceito em: 28/08/2024



Resenha do livro

**CAPITALISMO CRIMINOSO: COMO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  
FACILITAM O CRIME**

Stephen Platt

Elias Marcos Lesczynski\*

O título “Capitalismo criminoso: como as instituições financeiras facilitam o crime” é a tradução de “*Criminal capital: how the finance industry facilitates crime*” livro escrito por Stephen Platt, em 2015, e publicado originalmente pela editora britânica Palgrave Macmillan, com sede em Londres.

É pertinente considerar que “[a] perspectiva é a base axiomática e intelectual pela qual os indivíduos avaliam, percebem, analisam e observam o mundo” (VIANA, 2024, 19). Então, antes de ingressar no texto do livro é recomendável conhecer o autor. De acordo com o LinkedIn, Stephen Platt teve formação acadêmica, entre 1989-1993, na *Brunel University London*; em 1994, tornou-se advogado pelo *Inns of Court School of Law*; em 2003, em Londres, fundou com a *Wilmington PLC* – empresa do setor de treinamentos especializados – que faz parte até os tempos atuais da *International Compliance Association*, e entre outras atividades, ministra cursos sobre prevenção de lavagem de dinheiro e práticas de conformidade; é professor adjunto, desde 2010, na *Georgetown University*, em Washington, D.C.; em 2017, fundou a *KYC360* – empresa de tecnologia que atua em soluções de integração de serviços financeiros, seguros, direito, contabilidade, jogos e indústrias – sendo o atual CEO da empresa.

Algumas das atividades que Stephen Platt encerrou também são interessantes de registrar. Entre 2004 e 2010, Stephen Platt foi presidente do *BakerPlatt Group*, empresa que prestava serviços de consultoria e advocacia; entre 2007 e 2015, foi presidente da *Jersey Employment Trust*, instituição de caridade registrada com o objetivo de prestação de serviços de educação, formação e apoio à obtenção de emprego para pessoas deficientes em Jersey (uma das ilhas autônomas no Canal da Mancha); em 2010 fundou e foi diretor não executivo até 2012 da *Jersey International Business School*, empresa voltada à educação empresarial; entre 2010 e 2023 foi advogado na área de crime, fraude e questões regulatórias na *23 Essex Street*

---

\* Mestrando em Sociologia no Programa de Pós-Graduação em Sociologia, da Universidade Federal do Paraná. Especialista em Direito Público pela Faculdade Legale. Bacharel em Direito, com habilitação em Direito do Estado e Direito das Relações Sociais, pela Universidade Federal do Paraná. Investigador do Núcleo de Estudos sobre Capitalismo e Contestação Social/NECCSO, da Universidade Federal do Paraná. Advogado inscrito na OABPR.

*Chambers*; entre 2011 e janeiro de 2024, foi consultor sênior da *Stephen Platt & Associates LLP*, empresa de advocacia com ênfase em investigações regulatórias e projetos de remediação após ações de fiscalização; entre 2012 e 2013, foi consultor no Banco Mundial em um projeto que examinou os fluxos financeiros ilícitos da pirataria na Somália (PLATT, 2024).

A maioria das informações publicadas no LinkedIn não são verificáveis, mas considerando a máxima jurídica de que a boa-fé se presume e a má-fé se comprova, é possível estabelecer como divisor na carreira de Stephen Platt o antes e o depois da publicação do original em inglês do livro, “Capitalismo criminoso: como as instituições financeiras facilitam o crime”. Antes da publicação do livro, Stephen Platt já era advogado, com experiência de mais de dez anos no direito penal econômico, na área de regulação e consultoria; já havia aberto empresas na área educacional, com especial foco no treinamento de gerentes e administradores; fundado uma associação internacional de *compliance*; prestado serviço ao Banco Mundial; e era professor universitário nos Estados Unidos da América. Após a publicação do livro, Stephen Platt abriu uma empresa de tecnologia para vender soluções para empresas e Estados na área de *compliance* e investigações corporativas, deixou a advocacia, mas continua à docência universitária.

O livro, de 302 páginas, “Capitalismo criminoso: como as instituições financeiras facilitam o crime” é composto por seis seções distintas: “abreviaturas usadas neste livro”, prefácio, introdução, agradecimentos, 11 capítulos e notas. O livro é classificado nas livrarias como parte da seção de “Administração, Negócios e Economia”. Durante a leitura foi necessário o constante retorno às abreviaturas, pois são 60 siglas em grande medida bem específicas como, por exemplo, TIBOR (*Tokyo Interbank Offered Rate*) – taxa interbancária oferecida em Tóquio. O prefácio foi escrito por Robert Mazur – ex-agente federal dos Estados Unidos da América – autor do livro “O infiltrado: minha vida secreta nos bastidores da lavagem de dinheiro no cartel de Medellín”.

Entende-se que na introdução foi estabelecida a condição de contorno do livro, pois Stephen Platt sustenta não defender “a tese de que haja uma toxicidade inata no cerne da indústria de serviços financeiros” (2017, 15). Com essa afirmação somada ao curriculum vitae do autor – voltado para a venda de cursos e soluções em consultoria empresarial, jurídica e governamental – é possível imaginar o livro como o cartão de visitas de um intelectual disposto a prestar serviços, e não como uma obra crítica como o título faz parecer se tratar, ainda mais quando o autor afirma “ilustrar, por meio de cenários fictícios, as vulnerabilidades do setor de serviços financeiros ao abuso de criminosos” (PLATT, 2017, 16), e nas partes do livro em que são abordados casos reais de grande repercussão como, por exemplo: a pirâmide financeira de

Bernard Madoff – às fls. 42 do capítulo um –, tem-se a impressão que se está diante de um Lex Luthor em carne e osso, um “gênio” do crime que sozinho conseguiu encontrar brechas no sistema para delinquir; ou no “Mensalão” no Brasil – às fls. 141 e 142 do capítulo 5 – quando o autor limita-se a citar os nomes dos envolvidos, o tragicômico dinheiro escondido na cueca, sem ir além de uma mera notícia de jornal.

No capítulo um, fls. 19-44, denominado “práticas nocivas”, o autor estabelece que sem a álea dos negócios – risco – não existe lucro, e o suposto “interesse público” exige que as instituições financeiras assumam riscos, desde que esses riscos não obriguem os “contribuintes” a arcar com a conta final. Contudo, o “interesse público” é uma abstração para irmanar todos os habitantes de um Estado em propósitos comuns, mas a realidade desvelada é que os “interesses” que exigem supostos riscos do capital financeiro são os interesses da classe dominante. O “contribuinte” – a expressão em inglês “taxpayers” pagador de impostos é mais direta – como responsável final pela conta do prejuízo dos bancos tem um caráter bifacial não apresentado: (i) para combater o “a tendência declinante da taxa de lucro, diversas empresas ... se transferem para regiões onde os custos ... dos impostos ... são mais atraentes” (BRAGA, 2020, p. 99).

É verossímil que se o capital financeiro tiver prejuízos não serão outros setores do capital que pagarão o aumento de tributos, sobretudo porque grande parte das legislações tributárias preveem regras de anterioridade para a cobrança de impostos, então até começar a cobrança de um novo tributo ou alíquota maior uma empresa pode ter transferido todo o seu estabelecimento para outra jurisdição; (ii) por assimetria à situação antes descrita, a classe trabalhadora que não pode migrar para outro Estado é que acabará pagando o aumento de impostos e os eventuais prejuízos sofridos pelos bancos. Ainda no início do capítulo o autor estabelece alguns dos males da atualidade: A lavagem de dinheiro e o favorecimento ao crime por parte de instituições financeiras são dois dos grandes males de nossa época. Eles alimentam a comercialização de drogas, o tráfico humano, a evasão fiscal, pagamentos a corruptos e a prática de atos de terrorismo em todas as partes do globo (PLATT, 2017, p. 19)

O capítulo ainda se subdivide em seis seções: “assumir riscos excessivos”; “manipulação de taxas”; “venda inapropriada de produtos financeiros”; “violação de sanções”; “lavagem de dinheiro”; e “favorecimento ao crime”.

Na seção “assumir riscos excessivos” o autor cita o Lehman Brothers (banco de investimentos que abriu falência em 2008 no que ficou conhecido como “bolha imobiliária norte-americana” – em síntese: “[o]s bancos estavam ... criando e vendendo títulos de modo que pudessem lucrar ao apostar que não tinham valor algum” (PLATT, 2017, p. 23). Essa

situação se fosse praticada por qualquer pessoa seria uma espécie de fraude, mas como foram realizadas por bancos centenários, com sede em Nova Iorque, denomina-se “riscos excessivos”. Uma pessoa mais otimista poderia esperar que, no médio prazo, medidas para coibir tais práticas fossem adotadas, mas passados alguns anos nada foi feito, pois as instituições bancárias constituem “um universo avesso a aprender com os próprios erros, em que a volatilidade e os riscos continuavam a despontar sem monitoramento algum” (PLATT, 2017, p. 25).

Na seção “manipulação de taxas” apresenta-se o caso da LIBOR (*London Interbank Offered Rate* – taxa interbancária oferecida em Londres), fixada nos anos 1980, era uma referência calculada pela média da resposta numérica dada à pergunta diária, feita aos bancos com importante presença em Londres: “A que taxa seria possível tomar dinheiro emprestado, caso você o fizesse pedindo e depois aceitando ofertas interbancárias em uma amostragem razoável de mercado, até as onze horas da manhã em ponto?” (PLATT, 2017, p. 26).

A LIBOR não era a taxa real em que os bancos emprestavam entre si, mas em 2012, era a referência para mais de US\$300 trilhões em empréstimos, quando veio à tona que os bancos alteravam de modo artificial a LIBOR “para dar a impressão de que eram mais dignos de crédito do que eram na realidade ou para lucrar com as operações.” (PLATT, 2017, 26).

O autor trata o caso da LIBOR e outras manipulações no FOREX (*Foreign Exchange* – mercado de câmbio) como “falhas do sistema financeiro na identificação e prevenção” (PLATT, 2017, p. 30) desses ilícitos. Contudo, cabe à reflexão: a LIBOR existiu por mais de 30 anos, então é verossímil que as supostas “falhas” não ocorreram apenas no ano em que foram descobertas, mas, ao longo dos anos, e tampouco são “lapsos”, são verdadeiros costumes – “repetição geral de comportamentos, que, pela reiteração, passam a indicar um modo de proceder em determinado meio social. É a norma criada e afirmada pelo uso social ... sem a intervenção legislativa” (FARIAS; ROSENVALD, 2021, p. 130) – bancários. Em outros termos, parece crível a existência de uma regra não escrita no sistema bancário à “especulação mercantil” (MARX, 1993, p. 137) em que as taxas financeiras são cálculos de probabilidades com o dinheiro no intuito de maximização dos lucros.

Na seção “venda inapropriada de produtos financeiros” apresenta-se o caso do PPI (*Payment Protection Insurance* – seguro de proteção de pagamento) cujas apólices – “caras, ineficazes e ineficientes” – eram apresentadas como de aquisição obrigatória na contratação de hipotecas, empréstimos e cartões de crédito (PLATT, 2017, p. 31). No Brasil seria algo muito semelhante à “venda-casada” – “condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço” (MARQUES, BENJAMIN, MIRAGE, 2013, p. 891) – em que a pessoa premiada pela necessidade de contratar algum serviço bancário acaba

adquirindo outro serviço independente, mas apresentado como um pacote único e indivisível ao serviço inicial que se quer contratar. O autor ressalta esses ardis como uma das portas de entrada para atividades de organizações criminosas, pois “[s]ão precisamente esses fatores (...) que têm permitido a lavagem de dinheiro, o favorecimento ao crime, a evasão fiscal e a impunidade” (PLATT, 2017, p. 32).

Na seção “violação de sanções” é explicado que “as transferências eletrônicas de dólares americanos exigem o envolvimento (...) de um banco de compensação norte-americano” (PLATT, 2017, 34), ainda que o banco de origem e o banco final da transferência não sejam norte-americanos. Isso permitiria, em tese, que o OFAC (*Office of Foreign Assets Control* – Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América impedissem que certos países sancionados como, por exemplo, Cuba, Irã, Coreia do Norte, Rússia recebessem dólares alijando-os do comércio internacional. Porém, para manter a lucratividade, o UBS (*Union Bank of Switzerland*) dissimulou operações para continuar o relacionamento bancário com países que não poderiam receber dólares; e o britânico *Lloyds* ensinou aos seus clientes iranianos a “navegar pelos filtros do OFAC sem serem detectados” (PLATT, 2017, 34), e assim continuar o fluxo de dólares para o Irã.

A seção “lavagem de dinheiro” é uma preliminar do capítulo 2, “modelagem de lavagem de dinheiro”. O autor observa que a maioria das definições de lavagem de dinheiro é inútil e ao longo do livro propõe alternativas para reduzir a suposta vulnerabilidade do setor financeiro à participação passiva na lavagem de dinheiro.

A seção “favorecimento ao crime” começa com um exemplo de evasão fiscal que gerou, em 2013, o encerramento das atividades do banco privado suíço, *Wegelin & Co*, que admitiu ter permitido que alguns clientes escondessem US\$1,2 bilhões da IRS (*Internal Revenue Service* – Receita Federal norte-americana). Os bancos também contribuíram com esquemas de pirâmide como o de Bernard Madoff. O autor encerra a seção e o capítulo com uma aparente crítica ao conjunto do setor financeiro e não apenas aos casos descobertos de crimes:

Uma das características mais marcantes desse breve passeio pelo hall da vergonha do setor bancário é o envolvimento de muitos de seus maiores players — um indício incisivo de que cada um dos diferentes comportamentos é sintoma de uma enfermidade comum. Com certeza não há nenhuma coincidência no fato de vários bancos envolvidos em lavagem de dinheiro e violação de sanções também terem se engajado em manipulações de taxas e vendas abusivas de produtos financeiros, tendo sido pegos somente em razão da maneira com que expuseram seus demonstrativos financeiros a riscos excessivos na iminência da quebra de 2008 (PLATT, 2017, p. 42-43).

O capítulo dois, fls. 45-83, “modelos de lavagem de dinheiro”, é o maior capítulo do livro e as suas ideias perpassam todos os demais capítulos. Não seria de todo sem sentido intuir

que se o título de um livro é a envoltória máxima do texto desenvolvido, o livro “Capitalismo criminoso: como as instituições financeiras facilitam o crime” poderia coincidir com o título do capítulo 2, “modelos de lavagem de dinheiro”, ainda que o apelo externo fosse menor com esse hipotético título.

O capítulo dois é subdividido em 22 partições entre tópicos e subtópicos: um preâmbulo, ainda que não nomeado; dois exemplos da discussão realizada nas páginas anteriores; “um novo modelo de lavagem de dinheiro”; três explicações sobre desconexões; “vulnerabilidade de produtos e serviços”, esse tópico subdivide-se em: “empresas e serviços empresariais”; “fundos fiduciários”; “fundações”; “contas bancárias”; “contas correspondentes”; “empréstimos”; “cartões de crédito e de débito diferido”; “fundos de investimento”; “cartas de crédito”; “advogados”; “relações com bancos privados”; “títulos”; “moedas digitais”; e “sistema informal de transferência”.

Considerou-se as primeiras nove páginas do capítulo dois como um preâmbulo inominado em que a lavagem de dinheiro é associada, a partir dos ataques de 11 de setembro de 2001, ao financiamento do terrorismo. Nesse caso existiria crime de ponta a ponta, a depender da jurisdição. A ponta inicial, origem, a lavagem de dinheiro não é crime em todos os países, por sua vez a ponta final, o destino, o terrorismo é crime na maior parte dos países. Alguns países como, por exemplo, a Suíça, Cingapura e Dubai, engendraram a necessidade de “dupla criminalidade”, isto é, “que a conduta fosse ilegal tanto no país em que ocorreu a lavagem de dinheiro como no país em que aconteceu o crime” (PLATT, 2017, p. 48), para que o dinheiro circulante no sistema financeiro fosse considerado ilícito, o que aumentou o volume de negócios nos bancos desses países.

A noção popular de “lavagem de dinheiro” está muito presa na expressão “dinheiro” e alguns seriados de sucesso como *Familia Soprano*, *Breaking Bad*, *Ozark*, *Better Call Saul* popularizaram imagens de pilhas de dinheiro, revestimentos internos de paredes como esconderijo de dinheiro da máfia e do tráfico de drogas. Porém, “a lavagem de dinheiro não precisa de — e com frequência não envolve — dinheiro, seja em espécie ou em uma conta bancária” (PLATT, 2017, p. 51). Com isso, grande parte dos possíveis esforços de combate à “lavagem de dinheiro” são canalizados no ciclo específico de captação de movimentações suspeitas de dinheiro em detrimento de outros modos de circulação de bens como, por exemplo, imóveis, direitos de propriedade intelectual, títulos, bitcoins, entre outros.

Ao longo dos demais capítulos do livro é mostrado que a “lavagem de dinheiro” tem ocorrido em combinações financeiras passivas que fogem do “ciclo” padrão do modelo descrito comumente pelos jornais, dividido em três partes: colocação; ocultação; e integração. Em

síntese: ocorre um crime – qualquer crime envolvendo o recebimento de dinheiro – a primeira etapa da lavagem seria a “colocação”, isto é, a inserção desse dinheiro em um banco para que o dinheiro físico torne-se virtual; uma vez dentro de um banco o modelo padrão considera que o dinheiro precisa sofrer transformações – hipoteticamente quanto maior o número de transformações mais efetiva seria a metamorfose do dinheiro do crime em dinheiro lícito – essa etapa é denominada “ocultação”, pois são criadas camadas de operações bancárias para mascarar o depósito inicial de dinheiro; por fim, na “integração”, o dinheiro que sofreu a “colocação” em um banco, que passou pela “ocultação” no sistema bancário, chega à “integração” em que os criminosos passam a fazer uso de dinheiro “limpo” para uso próprio. (PLATT, 2017, p. 52-3).

Dois exemplos são apresentados. O primeiro coincide com o modelo padrão de “lavagem de dinheiro”: uma situação imaginária de tráfico de drogas no varejo em que o dinheiro das inúmeras vendas é acumulado em um esconderijo; esse dinheiro é coletado de tempos em tempo e depositado em várias contas bancárias até o limite de US\$10 mil dólares – depósitos acima desse valor nos Estados Unidos da América exigem que o banco preencha um formulário de fiscalização da FinCEN (*Financial Crimes Enforcement Network* – rede de policiamento de crimes financeiros); o dinheiro também é colocado em atividades de fachada em que a circulação de dinheiro vivo não despertaria grande atenção como, por exemplo, casas noturnas, restaurantes, empresas de táxis entre outras atividades da mesma espécie; o dinheiro no sistema bancário é transferido para uma empresa, em uma localidade diversa da sede do banco, para comprar obrigações e ações que depois são vendidas e o dinheiro transferido, como empréstimo, para outra empresa que é utilizada para o pagamento das despesas de algum membro da organização de tráfico de drogas. O segundo exemplo, não coincide com o modelo padrão de “lavagem de dinheiro”: é o hipotético caso de um político que abre uma empresa de fachada em que a propriedade e o controle são disfarçados, então a empresa abre uma conta bancária para receber a transferência eletrônica da propina que o político tem a receber, o dinheiro na conta bancária é utilizado como garantia de um empréstimo para a compra de uma casa que o político usa em suas férias.

O autor então suscita um novo modelo de lavagem de dinheiro, que possa inclusive captar situações semelhantes ao exemplo do político corrupto. Um aspecto que não é citado pelo autor e de certo modo parece uma hipótese plausível para o motivo de a corrupção de políticos não ser facilmente captada pelos modelos legais de verificação de “lavagem de dinheiro” é que as leis são feitas pelos políticos, então parece verossímil que nesses casos ocorra o fatídico “legislar em causa própria”, sobretudo quando o autor considera que para elaborar o

novo modelo é preciso se “colocar na mente de um criminoso” (PLATT, 2019, p. 55). É difícil imaginar que alguém em sã consciência, se tivesse a prerrogativa de escrever as leis, colocaria em suas costas um alvo para facilitar a persecução penal.

Em todo o caso, o autor enumera quatro supostos desejos de todos os criminosos: “1. Obter sucesso na perpetração de um crime. 2. Evitar a descoberta desse crime. 3. Beneficiar-se do crime. 4. Conservar os produtos do crime” (PLATT, 2019, p. 55). A percepção do autor é de que as leis escritas em conformidade ao modelo padrão de “lavagem de dinheiro” não foram desenhadas para captar que o sistema financeiro pode ser utilizado em todos os quatro ditos “desejos universais dos criminosos” e não em apenas um como, por exemplo, usufruir o dinheiro do crime.

A partir disso é teorizada uma relação triangular cujos vértices são o “criminoso”, o “crime” e o “bem”, e os lados do triângulo retângulo são três desconexões. O cateto oposto é a primeira desconexão entre os vértices “criminoso” e “crime”; o cateto adjacente é a segunda desconexão entre os vértices “crime” e “bem”; a hipotenusa é a terceira desconexão entre “bem” e “criminoso”. (PLATT, 2017, p. 56). Não há a afirmação de que o triângulo formado seja um triângulo retângulo, em todas as situações do novo modelo à lavagem de dinheiro. Mas, a escolha, consciente ou não, de uma figura geométrica específica – em detrimento de outras como, por exemplo, uma relação circular subdividida em três semicírculos que fariam o mesmo papel de desconexão que os lados do triângulo retângulo fazem –, passa a impressão de que as desconexões têm tamanhos distintos e são hierárquicas, sendo a mais importante a desconexão entre o “criminoso” e o “bem”, depois a desconexão entre o “crime” e o “bem”, e por fim, hipoteticamente, menos importante a desconexão entre o “criminoso” e o “crime”.

É verossímil que o autor não tenha tido a intenção de gerar essa reflexão, mas a apropriação de entes matemáticos sem a necessária reflexão dá margem à interpretação. Talvez para utilizar a metáfora de plano do Ronnie Biggs, mas no sentido matemático de superfície, o modelo seria mais compreensível se cada uma das três desconexões fosse uma das hastes de um tripé que sustenta um plano (superfície), nesse caso se alguma parte do tripé fosse maior do que a outra o plano seria insustentável o que permite intuir que todas as partes das desconexões são igualmente importantes para o atingimento do objetivo criminoso de lavagem de dinheiro.

Feita essa consideração cabe expor o que o autor exemplificou como hipotéticas desconexões em uma fraude. A desconexão “um” seria o fraudador não agir em nome próprio, para tanto ele criaria uma empresa que seria controlado por meio de uma procuração estabelecida em favor de um escritório de advocacia. A analogia seria o criminoso que usa luvas para não ter as impressões digitais no local do crime (PLATT, 2017, p. 56). Cabe a observação



de que no Brasil uma procuração poderia ser assinada em favor de qualquer pessoa para administrar uma empresa, não necessariamente em favor de um advogado. A desconexão “dois” seria a empresa abrir diversas contas bancárias e de corretagem e transferir o dinheiro da fraude, então com os rendimentos obtidos o fraudador compraria algum bem como, por exemplo, um iate. A desconexão “três” seria o fraudador não deixar o iate em seu nome [o autor não menciona, mas o fraudador não deveria sequer ter tido o iate em seu nome um dia] e para isso faria uso de um modo de organização e administração de propriedade típico de países de língua inglesa denominado “truste”, então o iate seria registrado em nome de um trustee que seria administrado por outro trustee de um banco privado e assim o dinheiro da fraude não teria mais vinculação com os benefícios que o fraudador pretende usufruir do crime e tudo isso foi feito dentro do sistema financeiro (PLATT, 2017, p. 57).

O autor passa a tratar das vulnerabilidades de produtos e serviços financeiros, não é uma lista exaustiva, mas exemplificativa do que é relatado com maior frequência em investigações financeiras (PLATT, 2017, p. 58).

As empresas e os serviços empresariais podem ser utilizadas na lavagem de dinheiro, pois uma empresa não necessariamente produz algo, ela pode ser apenas o arranjo jurídico para a criação de uma pessoa não natural que será detentora de personalidade na sociedade capitalista, e assim poderá assinar contratos, receber dinheiro, pagar serviços de modo a preservar – no caso de atividades lícitas – ou esconder – no caso de atividades ilícitas, de pessoas politicamente expostas, ou como o empresário mexicano abordado no capítulo três que desejava proteger a família de um sequestro – os seus sócios. Além disso, os serviços empresariais podem compreender o fornecimento de diretores para outra empresa, a sede ou endereço, atividades de secretaria, e até mesmo sócios ou acionistas (PLATT, 2017, p. 59-63).

Os fundos fiduciários ou trustes são arranjos legais que só existem em países que adotam o *common law* (sistema jurídico do Reino Unido, Estados Unidos da América e diversas ex-colônias britânicas). Os trustes podem administrar bens, ter a titularidade de bens, mas não precisam de registro para existirem, então são quase sociedades empresárias, tendo praticamente todos os seus bônus, mas sem as formalidades e seus ônus, então acabam sendo utilizadas na lavagem de dinheiro, pois um criminoso pode entregar um bem para a administração de um trustee e depois usufruir desse sem qualquer vinculação de propriedade anterior (PLATT, 2017, p. 63-66).

As fundações em geral são associadas à filantropia, mas elas podem parecer algo que não são e assim serem utilizadas para a lavagem de dinheiro, pois o instituidor da fundação pode doar o dinheiro do crime para uma fundação que poderá comprar vários bens, que serão

propriedade da fundação, mas cuja administração e usufruto pode ser realizado pelo instituidor da fundação que seria um criminoso (PLATT, 2017, p. 66-68).

As contas bancárias na atualidade permitem em frações de segundos transferir dinheiro para qualquer outra conta bancária no mundo, então a repetição quase infinita dessas operações e a troca de titularidade das contas pode ser um meio de lavagem de dinheiro (PLATT, 2017, p. 68-69). As contas correspondentes são contas de um banco em outro banco, em geral bancos não norte-americanos precisam abrir uma conta em um banco norte-americano para fazerem negócios em dólares. Alguns países não fazem qualquer exigência para um banco ser aberto, então um criminoso poderia obter a licença para operar um banco em nome de uma empresa ou de pessoa interposta, depositar o dinheiro do crime em moeda local, transferi-lo para um banco norte-americano e lá sacar em dólares o dinheiro lavado (PLATT, 2017, p. 69-71).

Os empréstimos em geral são vistos no aspecto de dívida que foi parcelada e deverá ser paga em um determinado tempo, mas os empréstimos são o adiantamento em dinheiro que podem ser utilizados para compra de um bem, e o pagamento futuro do empréstimo seria feito com o dinheiro do crime e com isso existe pelo menos uma camada de distância entre crime, criminoso e modo de usufruir o resultado do crime (PLATT, 2017, p. 71).

Os cartões de crédito e de débito diferido podem ser utilizados na lavagem de dinheiro, pois um cartão pode ser emitido com os dados de uma pessoa, mas ser utilizado por outra pessoa, e com a possibilidade de uso em qualquer parte do mundo, o controle é limitado à máquina do cartão confirmar a informação da senha digitada pelo usuário (PLATT, 2017, p. 72).

Os fundos de investimento arrecadam dinheiro/bens de diversas origens e os utilizam para ganhar mais dinheiro ou bens. Hipoteticamente, grandes fundos “conseguem” resistir às tentativas de criminosos de utilizarem os seus serviços, mas pequenos fundos de investimento que precisariam crescer podem aceitar o dinheiro do crime ou pelo menos não fazem o menor esforço para inviabilizar o uso do fundo para meios ilícitos como, por exemplo, quando permitem que os investimentos sejam resgatados por terceiros sem relação jurídica prévia com o fundo (PLATT, 2017, p. 72-76). Em outros termos, uma pessoa “A” investe dinheiro em um fundo “Y”, passado algum tempo é o momento do recebimento dos dividendos do investimento. Na hora de receber os lucros da pessoa “A”, aparece a pessoa “B”, sem qualquer relação conhecida com a pessoa “A”, e recebe os lucros. Esse agir é uma das hipóteses de desconexão entre “criminoso – crime – bem”

As cartas de crédito são utilizadas com frequência na lavagem de dinheiro por meio de emissões que não são baseadas em operações reais, as práticas mais comuns associadas são o

superfaturamento, o subfaturamento e o embarque fantasma. Em todas essas hipóteses o dinheiro é lavado, mas as obrigações que as cartas de crédito representam são fictícias (PLATT, 2017, p. 76).

Os advogados, em tese, são pessoas acima de suspeita, e quando com formação adequada e experiência sabem “implantar operações financeiras complexas” e por isso são considerados profissionais chave em atividades ilícitas (PLATT, 2017, p. 77-78).

Nas relações com bancos privados são vendidos serviços personalizados para pessoas com alto patrimônio líquido, e os gerentes para não perderem a oportunidade de relacionamentos bancários lucrativos não questionam a origem das fortunas e com isso acolhem dinheiro que pode ser criminoso (PLATT, 2017, p. 78-79). Beira a jocosidade achar que os gerentes de bancos seriam inocentes e que precisariam perguntar a origem do dinheiro de seus clientes para desconfiar se alguma transação financeira tem origem lícita ou ilícita, nos tempos atuais quando algumas consultas em bancos de dados públicos ou privados permitem descobrir, sem exageros, do hábito alimentar à frequência cardíaca, de locais visitados até as músicas mais ouvidas das pessoas, o que dizer então de seus rendimentos.

Os títulos são diversos – letras de câmbio, fundos de investimento, mútuos entre outros – e apresentam duas razões fundamentais para serem usados na lavagem de dinheiro: (i) diariamente são realizadas bilhões de operações envolvendo títulos o que torna impossível identificar as operações e, não foi dito pelo autor, mas fica subentendido que é impossível saber qual título quando associado a uma obrigação tem em sua essência uma atividade lícita ou ilícita; (ii) é praticamente impossível auditar a circulação de títulos (PLATT, 2017, p. 79-81). Daí cabe a célebre tautologia “vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais”, então auditar o mercado de títulos é impossível porque os títulos circulantes são criminosos, ou é a essência do capitalismo ser criminosa e por isso a auditoria dos títulos é impossível, sobretudo quando se compreende que o “capital bancário é um setor do capital parasitário, que drena parte do mais-valor extraído pelo capital produtivo em troca de sua ação de permitir a circulação de dinheiro e mercadorias” (MAIA e VIANA, 2022, p. 67).

As moedas digitais como bitcoins, entre outras, são apontadas como meios de exploração por criminosos dado o anonimato, a desnecessidade de passagem por instituições financeiras e a possibilidade de troca pelas moedas convencionais como dólares, euros, libras esterlinas (PLATT, 2017, p. 81-82).

O sistema informal de transferência é apresentado como o sistema *hawala* ou *hundi* que é utilizado há séculos pelos povos do Oriente Médio que conforme foram se mudando levaram consigo a prática que consiste, em resumo, na transferência de dinheiro de um lugar para o outro

sem o uso de meios eletrônicos ou meio físico, mas código/senha entre o corretor do país de origem do dinheiro e o corretor do país do destino do dinheiro (PLATT, 2017, p. 82-83).

O capítulo três, fls. 84-100, denominado “dicotomia *onshore/offshore*”, não tem subdivisões e tenta desmistificar a expressão *offshore* que a partir do livro “A Firma”, de John Grishan ganhou contornos de lavagem de dinheiro. Contudo, *onshore/offshore* tem relação com o local de residência de uma pessoa. Por exemplo, se uma pessoa residente na Espanha “prefere” fazer operações bancárias em Luxemburgo, essas operações são *offshore*, pois Luxemburgo não é o local de residência da pessoa; por sua vez, eventuais operações que essa mesma pessoa, residente na Espanha, faça na Espanha são *onshore*, pois o local da residência e de operações bancárias são os mesmos (PLATT, 2017, p. 85). O motivo que faz uma pessoa que vive em um país ter movimentação bancária em outro país não necessariamente seja criminoso, mas no mínimo desperta dúvidas, que acabam não sendo sanadas e propiciam a lavagem de dinheiro em locais, a princípio, acima de suspeita.

Em geral centros *offshore* são imaginados como praias paradisíacas em alguma ilha tropical, mas um dos maiores centros offshore no mundo é Londres, no Reino Unido, pois funciona como *hub* para diversas atividades bancárias de empresas e pessoas do mundo inteiro. Os estados norte-americanos de Delaware, Nevada e Wyoming também são centros *offshore* caracterizados pela “opacidade das empresas que podem ser instituídas em seu território”, em outros termos, uma empresa registrada em Delaware não precisa informar a identidade de seus proprietários beneficiários, o que acaba gerando vulnerabilidades aproveitadas pelos criminosos (PLATT, 2017, p. 85-92). Mas de certo modo isso acaba se justificando, além de supostos “satélites” americanos e protetorados britânicos – como por exemplo: ilhas Cayman e Bahamas – para impedir ou diminuir a extensão da influência asiática:

se o Reino Unido e os Estados Unidos fechassem de fato seus centros-satélite offshore, os imensos pools de capital de desenvolvimento neles residentes seriam direcionados para o Oriente, ampliando ainda mais o domínio econômico emergente da Ásia. Se isso ocorresse, maior proporção do capital global se concentraria em centros que, pela natureza de suas órbitas, seriam muito mais difíceis de influenciar e policiar. ... as revelações da Offshore Secrets, uma investigação de dois anos liderada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), que obteve mais de 200 gigabytes de dados “vazados” de empresas nas Ilhas Virgens Britânicas. Foi constatado que vários membros da elite política chinesa, com a assistência de contadores e bancos privados, também buscaram resguardar e proteger seu patrimônio por meio de estruturas offshore. Vistos pelo prisma de um burocrata chinês, os centros offshore devem, de fato, parecer uma inovação capitalista muito prática. Os perus não tendem a apreciar o Natal, e a perspectiva de a China ver com bons olhos o dramalhão do G8 sobre os centros offshore é extremamente remota. Pelo menos por enquanto, os centros offshore — quer localizados em Londres, Irlanda, Delaware ou numa ilha repleta de palmeiras — tendem a permanecer na caixa de ferramentas de empresas, HNWIs [High Net Worth Individuals – Indivíduos com Alto Patrimônio Líquido] e trapaceiros. (PLATT, 2017, p. 99-100)

Com isso fica perceptível que a tolerância com a falta de registro de informações empresariais e o fluxo sem controle de capital em ambientes *onshore/offshore* que permite o livre trânsito de dinheiro do crime são políticas de Estado, americana e britânica, tendo entre os seus objetivos atrasar o domínio econômico da China. E ainda que essa política não tenda a interromper a ascensão da China como primeira economia do mundo, tem consigo atrair o dinheiro de altas autoridades do partido comunista chinês, que de comunismo só tem o nome e de nacionalistas passam ao largo, pois preferem guardar seu dinheiro no conforto do berço do capitalismo às margens da Inglaterra.

O capítulo quatro, fls. 101-125, denominado “tráfico de drogas”, tem uma subdivisão intitulada “cenário”. O capítulo enumera a América Latina como principal produtora de cocaína, de drogas sintéticas e de maconha (junto com a Ásia); o Afeganistão como maior produtor de ópio. Os traficantes e cartéis latino-americanos fariam uso do sistema bancário para lavagem de dinheiro, já os afegãos usariam o sistema *hawala*.

A corrupção na América Latina, no Afeganistão e na Ásia são apontadas como um dos fatores que tem facilitado o tráfico de drogas nessas regiões, e para garantir rotas de tráfico privilegiadas os cartéis, em especial os mexicanos, realizaram, somente no ano de 2010, mais de três mil homicídios apenas em Ciudad Juárez, no México, que fica na fronteira com El Paso, no Texas, nos Estados Unidos da América (PLATT, 2017, p. 101-107).

A lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas é imaginada a partir de cinco personagens “um narcotraficante, um corretor, um colombiano residente nos Estados Unidos, uma empresa da Zona de Livre Comércio e um empresário colombiano.” (PLATT, 2017, p. 109).

Primeiro, um colombiano – não foi definido o motivo da nacionalidade ser colombiana, mas como se considerou que o narcotraficante é colombiano, então faz sentido a coincidência de nacionalidades – residente nos Estados Unidos da América, mediante o recebimento de algumas centenas de dólares, abre várias contas bancárias para um corretor de pesos colombianos do mercado paralelo, o colombiano pega diversos talhões de cheques e entrega assinados para o corretor. O narcotraficante vendeu as drogas nos Estados Unidos da América e recebeu em dólares que estão escondidos, mas ele quer usufruir o dinheiro em seu país em pesos colombianos, então ele contrata os servidores do corretor que mediante uma taxa de corretagem transfere dinheiro (em pesos) de uma conta na Colômbia para uma conta do narcotraficante também na Colômbia. Após a transferência o traficante informa ao corretor onde estão escondidos os dólares ganhos com a venda de drogas nos Estados Unidos da América. O corretor retira os dólares do esconderijo do traficante e deposita nas diversas contas que o

colombiano abriu e lhe entregou os talões de cheques. Por fim, um empresário colombiano precisa de dólares para fazer uma movimentação internacional, mas ele não procura os canais tradicionais de compra de dólares, ele procura o corretor paralelo que mediante uma taxa entrega um cheque no valor que empresário necessita. Com isso todo um ciclo de lavagem de dinheiro se encerra e cada um dos criminosos alcançou os objetivos (PLATT, 2017, p. 109-111).

Por fim, na subdivisão “cenário” do terceiro capítulo é apresentado um triângulo de desconexão envolvendo os vértices “dono da boate”, “drogas” e “bem”. A situação hipotética é de um adicto e dono de boate no Reino Unido que permite a venda de drogas em seu estabelecimento com faturamento semanal médio de £17 mil libras esterlinas. Uma parte do dinheiro é depositado na conta bancária da boate e lançado como rendimento do local, a outra parte – que pode levantar suspeitas da polícia e órgãos de controle, pois excederia a capacidade de ganho da boate – é entregue a um fornecedor de serviços offshore para uso em um truste e em uma empresa beneficente “inativa”. O fornecedor informou que toda a semana um funcionário seu irá à boate para coletar o dinheiro que sequer entrará no sistema bancário, pois o fornecedor vai usar o dinheiro coletado com o dono da boate para pagar um de seus clientes, um engenheiro aposentado que também tem um truste e precisa de uma determinada quantidade de dinheiro vivo e não pode levantar suspeita de ter esse dinheiro. Esse método de lavagem de dinheiro consegue a desconexão por meio do conluio de clientes – que muitas vezes sequer tem conhecimento um do outro – com um fornecedor de serviços empresariais em comum. (PLATT, 2017, p. 120-125).

O capítulo cinco, fls. 126-152, denominado “suborno e corrupção”, tem duas subdivisões: “a corrupção no Brasil” e “cenário”. Corrupção é definida como “o abuso do poder público para a obtenção de ganhos privados” (PLATT, 2017, 129). A partir disso são relatados diversos casos de corrupção: (i) Teodoro Nguema Obiang Mangué, filho do ditador de Guiné Equatorial, classificado pela revista Time como um “exemplo clássico da elite cleptocrata africana”; (ii) a petrolífera americana *Baker Hughes* que confessou que não poderia assegurar que os seus pagamentos feitos na Indonésia, Nigéria, Angola não seriam utilizado para suborno, e assumiu que pagou corruptos no Cazaquistão, tudo isso para ganhar contratos de exploração de petróleo; (iii) a Siemens pagou US\$1,6 bilhão de dólares de multa após uma investigação norte-americana e alemã constatar que “o suborno não era nada menos que um procedimento operacional padrão” da empresa (PLATT, 2017, p. 126-128). É interessante localizar a participação dos bancos na corrupção:

O sistema financeiro internacional é um participante essencial da própria operação corrupta ou da retenção do dinheiro acumulado por suborno ou roubo. Os bancos desempenham um papel fundamental, fornecendo contas e estruturas empresariais que possibilitam a execução de contratos ilegais, disfarçando a origem ou o destino do dinheiro e permitindo que o dinheiro advindo de corrupção seja retido para, depois, ser acessado por seu destinatário.

(...)

O Banco Mundial estima que, em nível planetário, o âmbito da corrupção com o favorecimento de negócios e propinas envolvendo empresas privadas e o setor público some cerca de US\$ 1 trilhão ao ano. (PLATT, 2017, p. 129-130)

O questionamento que não é feito no livro, mas merece reflexão: a corrupção, o suborno e a criminalidade financeira não estão imbricados no capitalismo de tal modo que aquilo que chama à atenção são meras rebarbas que escondem muito mais ilicitudes e crimes do que se possa imaginar.

Na subdivisão “A corrupção no Brasil” é apresentado o caso do “Mensalão” e o início da operação Lava Jato. A exposição é superficial, quase como uma manchete de jornal, e limita-se a apresentar o caso do dinheiro na cueca em um aeroporto, para exemplificar a corrupção no Brasil. Além de citar que 37 dos 65 membros da comissão do impeachment, da presidente Dilma Rousseff, estavam sendo investigados por corrupção (PLATT, 2017, p. 141-142).

Na subdivisão “cenário” o autor apresenta o exemplo de desconexão em um caso de uma empresa de armamentos europeia que para conseguir um contrato bilionário no Oriente Médio aceita pagar propina para uma autoridade local e o faz por meio de fundações, empresas fictícias, advogados, contas bancárias para garantir, simultaneamente, que a empresa ganhe o contrato e não seja penalizada pelos órgãos de controle de seu país de origem. (PLATT, 2017, p. 146-152).

O capítulo seis, fls. 153-173, denominado “pirataria”, tem uma subdivisão intitulada “cenário”. O capítulo trata da captura de embarcações no chifre da África por piratas somalis e o fato de que muitas empresas, donas dos navios, não admitem em público o pagamento de resgate pela recuperação da tripulação, carga e embarcação, pois, em tese, a divulgação de valores poderia aumentar o preço de outros resgates futuros, soma-se a isso que:

as pessoas dispostas a pagar um resgate não raro pedem autorização às agências reguladoras de seu país, de modo que as operações possam ser autorizadas e, depois, monitoradas. Deixar de emitir uma declaração não só causa o risco de o pagador do resgate ser criminalizado como também impede que os investigadores financeiros sigam o rastro do dinheiro. O Comitê Europeu do Parlamento britânico considerou essa posição em um relatório de 2009 intitulado Money Laundering and the Financing of Terrorism [Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo]. O Comitê declarou que o pagamento de resgate é legal no Reino Unido e deve permanecer com esse status de modo a evitar a criminalização das pessoas que buscam comprar a libertação de parentes, funcionários ou bens. (...) e observaram o “nítido contraste” entre os esforços navais de grande escala empregados internacionalmente para interromper atos de pirataria em si e a “falta de qualquer ação elaborada para inibir a transferência dos rendimentos desses atos criminosos, ou, ainda, para determinar se estavam auxiliando o financiamento do terrorismo”. (PLATT, 2017, 164)

É interessante contrastar que de um lado existe o pensamento de punir as pessoas que pagam o resgate, a obrigação de comunicação aos órgãos de controle sobre o pagamento do resgate, e mais empenho bélico para combater a pirataria do que ações para controlar o ingresso do dinheiro dos resgates no sistema financeiro. Isso pode ser explicado, pois no regime de acumulação integral:

ao ver o recrudescimento do mercado consumidor, a disputa por este se torna cada vez mais acirrada, bem como se busca desacelerar a produção de meios de consumo, seja através da transformação de capital improdutivo (capital financeiro), seja através de guerras, o que permite um fortalecimento da indústria bélica e a destruição das forças produtivas nacionais em alguns países capitalistas subordinados, que no seu pós-guerra, se torna um mercado consumidor subordinado (VIANA, 2009, 92)

Combater militarmente os piratas é fazer a indústria bélica lucrar com a destruição de maquinário, estruturas de cidades entre outros equipamentos. Mas, inibir o ingresso do dinheiro do crime de sequestro no sistema bancário é prejuízo, pois não há interesse em controlar o capital financeiro, mas sim de aumentá-lo e isso pode ser feito inclusive com o dinheiro advindo do cometimento de crimes. A pirataria teria chegado a um nível de organização que existiria na cidade de Harardhere, na Somália, uma espécie de “bolsa da valores” para a pirataria que contaria com, aproximadamente, 70 empresas registradas (PLATT, 2017, p. 153- 159).

Por fim, a subdivisão “cenário” do sexto capítulo aborda a hipótese de o dinheiro pago pelo resgate de navios ser utilizado no financiamento do terrorismo considerando uma parceria entre o grupo terrorista Al Shabaab e os piratas somalis (PLATT, 2017, p. 169-173)

O capítulo sete, fls. 153-173, denominado “tráfico de seres humanos e entrada clandestina de imigrantes”, tem uma subdivisão intitulada “cenário”. O tráfico de pessoas é considerado pela ONU como o terceiro crime com mais benefícios financeiros, atrás apenas do tráfico de drogas e do tráfico de armas. Não obstante o pódio na criminalidade, a fiscalização bancária na busca de lucros auferidos com o tráfico de pessoas é quase inexistente, e sem alta prioridade (PLATT, 2017, p. 175-176).

O tráfico de seres humanos e a entrada clandestina de imigrantes as vezes se fundem em uma mesma atividade criminosa. A diferença fundamental é que no caso do tráfico a pessoa traficada jamais deixa o controle do transportador. A pessoa pode ser traficada para a exploração sexual, para o transplante de órgãos, e em estudos de casos verificou-se:

a exploração de contas bancárias para se ter acesso a crédito: a documentação das vítimas é retirada delas na chegada a seu destino, sendo aberta uma conta com seus documentos, que, depois, são usados de forma maliciosa para fazer empréstimos e saques a descoberto, além de cartões de crédito e débito. Às vezes, as mesmas contas são usadas para acessar a previdência social ou outros empréstimos antes de a vítima retornar ao país de origem para evitar os esforços do banco na recuperação do dinheiro (PLATT, 2017, p. 188).



O tráfico de seres humanos e a entrada clandestina de imigrantes são considerados crimes secretos, pois as histórias das vítimas e dos criminosos são pouco conhecidas e as vezes estão associadas a outros crimes como por exemplo, a subdivisão “cenário” do sétimo capítulo trata de uma gangue albanesa que, além de traficar mulheres para a prostituição, também traficam armas e munições e fazem uso de fundos de investimento para a suposta lavagem de dinheiro (PLATT, 2017, p. 191-195).

O capítulo oito, fls. 196-215, denominado “financiamento do terrorismo”, tem uma subdivisão intitulada “cenário”. O terrorismo é considerado uma das maiores ameaças à segurança global, e isso gerou compreensão de que o financiamento do terrorismo ocorre por meio do sistema financeiro usual. Mas, a detecção do dinheiro para o terrorismo é ainda mais difícil do que o dinheiro usado para a lavagem “normal” de dinheiro (PLATT, 2017, p. 197).

Um dos problemas é que não existe uma definição comum do que é terrorismo como, por exemplo, é praticamente universal o conceito de homicídio – o crime em que uma pessoa é morta. Desse tentou-se o consenso em poucos elementos: “o terrorismo usa a violência para atingir fins políticos, ideológicos ou religiosos” (PLATT, 2017, p. 197). Mas, mesmo esse suposto consenso é problemático, pois “existem várias formas de violência” (VIANA, 2002, p. 29), como, por exemplo, a violência urbana que “assume duas formas que expressam a luta de classes. Ela assume a forma de violência repressiva/coercitiva, realizada pelo estado capitalista e pelas classes proprietárias e violência contestadora, realizada pelas classes exploradas” (VIANA, 2002, p. 42), então esse conceito aberto de violência inerente ao terrorismo pode descambar na consideração de atos de contestação como atos de terrorismo, e por consequência, de modo absurdo, a pessoa que comprou um livro ou um folheto em uma manifestação possa ser considerada financiadora do terrorismo, pois seria possível ligar a compra-venda do material ao protesto, coisa que supostamente não valeria a pena ser feita no sistema bancário para prevenir o terrorismo, pois segundo um especialista:

em um artigo que discute a eficácia dos sistemas de *compliance*, o diretor de um banco chegou a comentar na *Economist* que o custo de uma supervisão mais rigorosa “mal valia o esforço”, em face das chances relativamente pequenas de se descobrir o planejamento de um ataque por meio de operações financeiras suspeitas (PLATT, 2027, p. 209).

A subdivisão “cenário” do oitavo capítulo aborda um hipotético clã no Golfo Pérsico que apoiaria com vigor, mas não em público, a corrente sunita do islamismo, e diante das atitudes do presidente da Síria passa a apoiar financeiramente grupos terroristas e o faz de modo indireto ao pagar as viagens e os serviços de engenheiros para colocarem em produção os campos de petróleo capturados pelos terroristas.

O capítulo nove, fls. 216-237, denominado “violação de sanções”, tem uma subdivisão intitulada “cenário”. As sanções costumam serem aplicadas, de modo unilateral, pelos Estados Unidos da América, pela União Europeia ou pela Organização das Nações Unidas contra países, pessoas ou empresas que são consideradas ameaças globais como, por exemplo, Cuba, Birmânia, Coreia do Norte, Rússia (PLATT, 2017, p. 216-218).

Contudo, diversas empresas, bancos dos países que aplicaram as sanções continuam realizando transações comerciais como os sancionados, pois são atividades lucrativas. No caso das sanções impostas pelos Estados Unidos da América, não são apenas os seus nacionais que deveriam cumprir as sanções, mas em tese qualquer pessoa/empresa/estado no mundo que desejasse continuar a utilizar dólares deveria cumprir as sanções norte-americanas (PLATT, 2017, p. 219-222). O descumprimento das sanções costuma ser punido com multas bilionárias, mas sem indiciamento criminal dos executivos:

o BNP Paribas, flagrado processando operações no total de bilhões de dólares em nome de partes iranianas, cubanas e sudanesas entre 2002 e 2012. Esse caso em particular se destaca por três razões: a magnitude do acordo financeiro (US\$ 8,9 bilhões); a declaração de culpa do banco nos processos penais; e a decisão dos reguladores nova-iorquinos de proibir o banco de administrar determinadas operações em dólares por um ano. Apesar dessa combinação relativamente inusitada de punições, não foram feitos indiciamentos criminais contra nenhum dos executivos do banco, embora houvesse envolvimento de pessoal do alto escalão na fraude. Isso se evidenciou com a narrativa do que aconteceu numa reunião em 2005, em Genebra, a que compareceram uma série de executivos da instituição. De acordo com as atas do processo, a reunião foi convocada depois que os suíços responsáveis pelo compliance expressaram sérias preocupações em relação às transações sudanesas que estavam sendo executadas pelo banco. Não só esses graves problemas foram desconsiderados na reunião, por parte de pessoas que deveriam saber mais a respeito, como também o líder do grupo exigiu que não houvesse elaboração da ata daquela reunião (PLATT, 2017, p. 232).

Essas atitudes dos executivos não parecem isoladas, mas uma verdadeira ação corriqueira que só se tornou pública em razão da assunção de culpa pelo descumprimento das sanções. Em sendo prática diária não incide no sistema bancário como algo isolado, mas como essência do sistema bancário que aprisiona todo o sistema capitalista e, por consequência, inclusive as ações criminosas que nada mais seriam do que meros números nos balanços e extratos bancários. O “cenário” imaginado no capítulo nono é um contrato de arrendamento feito no Irã para a venda de aeronaves, contudo algum tempo depois do negócio as tensões entre Irã e os Estados Unidos da América aumentam e são impostas sanções contra o Irã. Então, para manter o arrendamento são utilizadas empresas offshore que removem detalhes dos destinatários das mensagens de pagamento que permitem a manutenção dos pagamentos em dólares do arrendamento (PLATT, 2017, p. 233-235).

O capítulo 10, fls. 238-260, denominado “evasão/elisão fiscais”, tem uma subdivisão intitulada “cenário”. A evasão fiscal é a adoção de “uma série de medidas enganosas para reduzir um compromisso tributário”, em geral é crime em vários países, mas não em todos. Já a elisão fiscal é um meio lícito de reduzir a carga tributária no limite das regras legais em uma espécie de planejamento tributário que otimiza o gasto tributário sem praticar crime (PLATT, 2017, p. 239-241).

São diversos casos de pessoas e empresas que mudaram de cidadania para pagar menos impostos como, por exemplo, o ator Gerard Depardieu que se tornou cidadão russo depois de a França aprovar a alíquota de 75% dos rendimentos dos milionários franceses; e o Google que transferiu € 8,8 bilhões de euros de suas receitas de royalties para uma empresa de Bermudas que detém os direitos de propriedade intelectual não americanos da empresa, em ambos os casos a justificativa da transferência foi a de pagar menos tributos (PLATT, 2017, p. 242-248).

A convivência entre a burocracia estatal e os bancos pode ser observada no caso Estados Unidos vs. Andreas Bachmann. No começo do ano 2000, o senhor Bachmann, então funcionário do banco *Credit Suisse*, viajou para os Estados Unidos para se encontrar com diversos clientes. Em Nova York, um desses clientes entregou para o senhor Bachmann US\$50 mil dólares, em dinheiro vivo, para serem depositados em uma conta não declarado pelo cliente à receita federal norte-americana. O senhor Bachmann sabia que um cliente na Flórida queria fazer um saque de US\$50 mil dólares de outra conta não declarada, então ele pegou o dinheiro e viajou para a Flórida, mas no meio do caminho o senhor Bachmann foi parado por um policial que ao revistar a bagagem encontrou os US\$50 mil dólares. O policial fez um breve interrogatório, e o senhor Bachmann seguiu viagem sem maiores transtornos. Porém, ao chegar na Flórida o cliente desistiu de sacar os US\$50 mil dólares, pois percebeu que o senhor Bachmann estava sendo monitorado por agentes do governo norte-americano. O senhor Bachmann empacotou o dinheiro e levou em sua mala de volta para a sede do *Credit Suisse*, na Suíça. Essa situação tornou-se um indiciamento por fraude contra o fisco norte-americano e o senhor Bachmann admitiu a culpa (PLATT, 2017, p. 253-254). Mas, não terminou apenas nisso, pois em 2014:

o Credit Suisse admitiu em juízo sua parcela de culpa na fraude, por auxiliar clientes norte-americanos com a apresentação ao fisco de declarações falsas de imposto. O CEO expressou em uma declaração pública que a instituição “lamentava muito a conduta inapropriada do passado”, que levou a admissão de culpa, multas e indenização no total de US\$ 2,6 bilhões. No caminho contrário do trilhado por outros bancos, que firmaram acordos de DPA, o Credit Suisse é considerado um banco condenado pela justiça norte-americana. Porém, para a surpresa de vários observadores, o Departamento de Justiça não exigiu como parte do acordo que o banco revelasse o nome de seus clientes norte-americanos com contas na Suíça. Nos dias de

hoje, ainda não se sabe se o nome dos titulares de contas não reveladas será, em algum momento (PLATT, 2017, 254-255)

Mesmo um ex-funcionário do *Credit Suisse* tendo admitido a culpa e depois o próprio banco admitindo a culpa, ainda assim, de modo “espantoso”, a burocracia estadunidense não exigiu que o banco revelasse o nome dos clientes estadunidenses que estavam fraudando o fisco. Isso não deixa de ser um indício de que a evasão fiscal e outras práticas bancárias criminosas são toleradas, pois não são situações atípicas, mas típicas do capital bancário.

A subseção “cenário” considera o aumento de 50% na alíquota do imposto de renda de contribuintes com altos rendimentos. Um consultor fiscal, um agente esportivo e ricos atletas clientes em conluio compram ações de empresas que divulgam balanços financeiros falsos para inflar os preços das ações, que depois são doadas para sociedades beneficentes para pedir isenção fiscal (PLATT, 2017, 257-260).

O capítulo 11, fls. 261-285, denominado “causas e soluções”, é subdividido em três seções intituladas “fatores humanos”, “sistemas”, e “o papel de legisladores e reguladores”. No capítulo final o autor de certo modo considera que os crimes apontados ao longo do livro não são responsabilidade apenas de dirigentes mal-intencionados, pois eles não agem no vazio, e coloca os bancos, os legisladores e o reguladores como parte do problema e de possíveis soluções para os problemas que foram apontados de modo exemplificativo e não exaustivo. (PLATT, 2017, 262).

Na seção “fatores humanos” a suposta vocação para o enriquecimento como qualidade fundamental para se trabalhar no setor bancário é questionada, para dar lugar ao profissionalismo, pois se é “preciso passar por exames escritos e práticos para dirigir um carro”, também deveria ser preciso “para administrar um banco” (PLATT, 2017, 268) e defende uma reforma radical das estruturas existentes no setor financeiro como proteção em “relação a futuras crises” (PLATT, 2017, 271).

Na seção “sistema” é reiterado que o paradigma de lavagem de dinheiro não é o correto para proteção de bancos e instituições financeiras contra o abuso de criminosos (PLATT, 2017, 273). E que a divulgação das falhas seja incentivada como forma de correção de rumo e não reprimida o que teria causado a suposta normalização de situações irregulares (PLATT, 2017, 274-277).

Por fim, na seção “o papel de legisladores e reguladores” é pregada a persecução penal contra diretores e executivos, pois não bastaria punir os bancos que dão guarida ao dinheiro de criminosos, uma vez que as pessoas comuns não conseguem deixar de usar os bancos, então mesmo multados e com a reputação prejudicada os bancos continuam atuando, mudando assim

a máxima que “os executivos saem livres enquanto acionistas e consumidores pagam a conta”, em um mundo em que o “capital, criminoso ou não, é fonte de poder” (PLATT, 2017, 278-285).

Pois bem, as empresas e os serviços empresariais e bancários podem agir na estrita legalidade, mas também podem ser utilizados para a ilegalidade o que deixa em xeque a crença de que a criminalidade empresarial e bancária é um mero resíduo captado em investigações quando o desvio é tão chamativo que o Estado precisa dar uma resposta. A realidade aceita por poucos é de que esse agir criminoso não é exceção, mas é o modo de operação do capitalismo que transmite à exterioridade ares de imaculado meio lícito de obtenção de desenvolvimento e riqueza, mas cuja interioridade é “uma relação social de exploração” (MAIA e VIANA, 2022, p. 21).

O livro desta resenha é uma leitura agradável e que vale a pena ser realizada em sua integralidade, pois mesmo não sendo um texto de crítica radical ao capitalismo, o livro exemplifica uma possível “agenda de pesquisa” (MAIA e VIANA, 2022, 73), o capital bancário, pouco desenvolvida no regime de acumulação integral, que praticamente coincide com o período que o livro aborda.

## Referências

BRAGA, Lisandro. *A acumulação integral e escalada repressiva nos EUA e na Europa (1980-2000)*. In. ALMEIDA, Felipe Mateus de. *O regime de acumulação integral: retratos do capitalismo contemporâneo*.

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. *Curso de direito civil: parte geral e LINDB*. 19. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021. v. 1.

MAIA, Lucas; VIANA, Nildo. *Marx e o capital bancário: o segredo dos juros e do capital monetário*. Goiânia: Ragnatela, 2022.

MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. *Comentários ao Código de Defesa do Consumidor*. 4.<sup>a</sup> ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

MARX, Karl. *Grundrisse: foundations of the critique of political economy (rough draft)*. London: Penguin Books, 1993.

PLATT, Stephen. *Capitalismo criminoso: como as instituições financeiras facilitam o crime*. São Paulo: Cultrix, 2017.

PLATT, Stephen. *LinkedIn: Stephen Platt*. Londres 10 jan. 2024. Disponível em: <<https://uk.linkedin.com/in/stephenwplatt>>. Acesso em 10 jan. 2024.

VIANA, Nildo. *A consciência da história: ensaios sobre o materialismo histórico-dialético*. 3. ed. Goiânia: Enfrentamento, 2024.

VIANA, Nildo. *O capitalismo na era da acumulação integral*. São Paulo: Ideias & Letras, 2009.

VIANA, Nildo. *Violência urbana: a cidade como espaço gerador de violência*. Goiânia: Germinal, 2002.